Unidad n°8: Los derechos políticos.

1. **Concepto.**

* La titularidad de los derechos políticos se reconoce sólo a los integrantes de la comunidad política argentina (excepcionalmente a los extranjeros), ya que aquéllos tienen por objeto la participación en el gobierno del Estado. Los derechos políticos consisten en la facultad que tienen sólo los ciudadanos (es decir, quienes integran la comunidad política argentina) de participar en el gobierno del Estado, de diversas maneras, fundamentalmente en dos aspectos: *Los derechos políticos activos y pasivos.*
* Los derechos políticos son aquellos que tienen solo los ciudadanos y que consisten en participar de todo lo que tenga que ver con el Estado; ya sea votando a quienes van a gobernar o ejerciendo las llamadas formas de democracia semidirecta- iniciativa popular, plebiscito, referéndum, etc- o presentándose como candidato para gobernar el país: es decir, votando o siendo votado.

El ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado lejos de colocar al [hombre](http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml) en oposición a éste, lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la estructuración política de la [sociedad](http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml) de la cual es miembro.

Se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional, y así nos proponemos desarrollar los conceptos de derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones .

1. **El electorado activo y pasivo.**

Los derechos electorales son de dos tipos:

* 1. Derechos electorales activos: Consisten en el derecho de sufragio, esto es, la facultad (que es también obligación) de sufragar en los comicios convocados por el órgano competente, ya sea para la elección de candidatos para integrar los órganos del gobierno nacional, provincial o municipal, o bien para alguna de las formas de democracia semi-directa ejercidas por medio del sufragio (Ejemplo plebiscitos, referéndum, etc.).
  2. Derechos electorales pasivos**:** Consisten en el derecho de sufragio pasivo, es decir, la capacidad que tienen los ciudadanos para postularse a los cargos electivos (ser elegidos).

La aptitud para el ejercicio de derechos electorales pasivos (para ser elegido) es más restringida que la que tienen los ciudadanos para ejercer el sufragio activo (elegir). En tanto que la capacidad para sufragar es la norma para todos los ciudadanos mayores de 18 años, y las inhabilidades (que surgen de la ley 346 y de las leyes electorales) son la excepción, la capacidad para presentarse como candidato a los cargos electivos tiene mayores limitaciones, muchas de las cuales surgen de la propia Constitución Nacional (arts. 48 y 55 para los legisladores; art. 89 para presidente y vicepresidente, etc.), y otras, de las leyes respectivas. Entre dichas limitaciones, se hallan la edad, residencia, ejercicio de ciudadanía, renta, etc. Otra de las limitaciones fundamentales es la pertenencia del candidato a un partido político reconocido.

1. **El proceso electoral**

El proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos complejos y con efecto preclusivo, destinados a instrumentar y facilitar la realización de los comicios y la posterior asignación de cargos y bancas entre las distintas fuerzas políticas participantes en base al resultado por ellas obtenido.

Categorías

Ordinarias: Aquellas emanadas de la norma fundamental de cada Estado, la que al establecer los órganos de gobierno y sus formas de integración, regula también la renovación periódica de las autoridades políticas que los conforman, fijando pautas legales y procesales a seguir a tal fin.

Extraordinarias: Son todas las que están destinadas a encauzar procesalmente el ejercicio libre del poder electoral en circunstancias especiales en las que el constituyente o el legislador han considerado adecuado devolver al electorado el libre ejercicio de la soberanía popular cuya titularidad siempre detenta.

ELEMENTOS

El proceso electoral se encuentra conformado por cuatro elementos esenciales que son:

1) Los sujetos del proceso:

• Los organismo electorales.

• Los actores políticos

• El cuerpo electoral: Es el conjunto de personas que, cumpliendo con las exigencias requeridas por la normativa electoral vigente (Mayoría de Edad, Domicilio, Etc.) y perteneciendo al ámbito geográfico común identificado por ese ordenamiento legal como una unidad electoral (Circuito, Sección, Distrito), se encuentra habilitado para ser incluido en los correspondientes registros electorales (Padrones) para ejercer su derecho a sufragio activo (Voto), de modo tal que sea computado a efectos de la asignación de cargos y/o bancas de los distintos órganos de gobierno correspondientes a la unidad político-electoral (Comuna, Municipio, Departamento, Provincia) a la que pertenecen.

Electorado activo: Es el conjunto de electores con derecho a emitir el sufragio, o sea la suma de ciudadanos con derecho electoral activo. Determinar que individuos forman parte del cuerpo electoral es una cuestión de derecho positivo, pues cada Estado es el que establece mediante el dictado de una ley especial quienes son titulares del sufragio.-

Electorado pasivo: Es el conjunto de individuos que, para determinados cargos o funciones, tienen la capacidad o posibilidad de ser elegidos o designados. Como ejemplos podemos nombrar al Presidente de la Nación (ver art. 89 de la Constitución Nacional), a los Senadores (ver art. 55 C.N.), y a los Diputados (ver art. 48 de la C.N.).-

1. Medios de participación
2. Etapas del proceso electoral
3. Plazos electorales
4. **El sufragio: Concepto y clases.**

El sufragio es el ejercicio del derecho electoral activo por parte de los ciudadanos. Mediante él se expresa la voluntad del soberano, para elegir a las personas que ocuparán los cargos electivos en el gobierno, o para tomar una decisión en una materia que afecta a la política general o local (en los casos de democracia semidirecta).

TIPOS DE SUFRAGIO

1. Sufragio Universal: Es la extensión del derecho a votar a todos los adultos, sin distinción de raza, sexo, creencias y posición social.
2. Sufragio femenino: Es la consecución de la igualdad, con los hombres en el derecho a votar. Fue la meta de las sufragistas occidentales, que dirigieron un movimiento liberal y democrático muy importante a principios del siglo XX y por la que protestaron enérgicamente durante muchos años hasta su conseguimiento.
3. Sufragio Masculino: Es el concepto opuesto al anterior estado. Consisten en la restricción del sufragio universal sólo a votantes masculino
4. Sufragio Igual: Es un término que a menudo suele confundirse con el Sufragio universal, consiste en darle a cada ciudadano adulto un solo voto, que tiene un valor de resultado, igual al de cualquier otro lector, independiente de sus ingresos, riquezas o posición social.
5. Sufragio Censatario o Restringido: Se opone al sufragio igual. Solo podían votar las personas que aparecían en un censo o lista, normalmente en función de su riqueza, propiedades inmobiliarias o nivel de tributación.
6. Sufragio Obligatorio: Es una práctica que requiere que las personas voten en elecciones o se presenten en una junta electoral para justificar su ausencia de un proceso electoral. Si un elector cualificado no se presenta en una junta electoral, dependiendo del país, puede ser castigado con multa, servicios comunitarios o hasta con prisión.
7. Sufragio Facultativo: Votar es sólo un derecho. Quien no quiere hacerlo, no concurre a sufragar.
8. Sufragio Secreto: El sistema impide saber por quien vota cada ciudadano. También denominado **voto secreto** es una garantía del [sistema electoral](http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_electoral) que impide que un extraño pueda influir en su [voto](http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)) o conocerlo. Esto no supone que lo votado por el cuerpo electoral sea secreto al público, sino que tal sentido no pueda asociarse a una persona en concreto. El fin último del sufragio secreto es conseguir un voto libre e incondicionado, en el que sólo cuente la soberana voluntad del votante. El sufragio secreto tiene un valor esencial para garantizar que el voto exprese realmente la voluntad del electorado, por lo que su violación suele ser castigada como [delito](http://es.wikipedia.org/wiki/Delito). Para garantizar el secreto, en las elecciones presenciales se suelen organizar recintos conocidos como [cuartos oscuros](http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_oscuro_(elecciones)) que permiten la privacidad a la hora de votar, donde nadie puede observar ni controlar el voto. Al salir, dicho sobre cerrado es colocado personalmente por el votante en una urna con muchos otros sobres, de modo que luego no pueda ser identificado individualmente. En los sistemas electorales de sufragio manual, el voto secreto se garantiza utilizando sobres en los que los ciudadanos colocan la papeleta. Para que el voto sea válido, las papeletas o bien deben carecer de marca alguna, o éstas deben cumplir ciertas condiciones. Por la misma razón suele estar prohibido, bajo pena de nulidad del voto, mencionar el sentido del sufragio en voz alta, en los centros de votación.
9. Sufragio público: Al votar, el votante evidencia públicamente por cual candidato o partido lo hace, (voto cantado).
10. Sufragio Directo: Los votantes sufragan directamente por los candidatos propuestos para cubrir los cargos electivos.
11. Sufragio Indirecto: Los votantes sufragan por electores quienes, a su vez, hacen la elección final entre los candidatos propuestos para cubrir los cargos electivos.
12. **Ley Saénz Peña.**

El sufragio en Argentina es Universal y Obligatorio desde 1912. En 1912 se sanciono la Ley Sáenz Peña (ley 8.871) General de Elecciones, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio a través de la confección de un padrón electoral.   
Fue sancionada durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, miembro del ala modernista del gobernante Partido Autonomista Nacional e impulsor de la ley.  
Esta ley desecha el voto calificado y establece el sufragio universal, secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta, con lo que se da representación legislativa a la minoría.

Con esta ley, el sufragio tiene varias características:

1. **Indelegable o individual**: No puede otorgársele poder a otra persona para ejercerlo.
2. **Secreto**: El ciudadano no sólo no está obligado a manifestar por quién o por qué votó, sino que, además, en el lugar de votación hay que tomas las medidas que garanticen el carácter secreto del voto.
3. **Universal**: Responde al principio de “un hombre, un voto”, cualquiera que sea la calificación intelectual, familiar o económica del ciudadano, por oposición al voto calificado o restringido.
4. **Obligatorio**: Las leyes respectivas prevén sanciones para los infractores de la emisión del sufragio.

Es importante notar que el voto femenino recién llegaría durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón en 1947; la Ley Sáenz Peña sólo incluía a los hombres.

Por la ley Sáenz Peña se considera electores a todos los ciudadanos, natos y natural, que consten en el padrón electoral, desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir de esa edad el voto es opcional. Se consideran afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio, los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no puedan expresarse por escrito. Por su estado y condición se hallan imposibilitados de votar, los religiosos, los soldados y los detenidos por Juez competente. Por causas de indignidad, no pueden sufragar los reincidentes condenados por delitos contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la condena, los penados por falso testimonio y por delitos electorales, por el lapso de cinco años. Las juntas escrutadoras de votos son las encargadas del recuento de las votaciones, reuniéndose en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Legislatura, constituyéndose dichas juntas en cada capital de provincia, integrada por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. En la capital de la república la integrará el Presidente de la Cámara Civil. La primera aplicación de la ley Sáenz Peña sucedió en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.

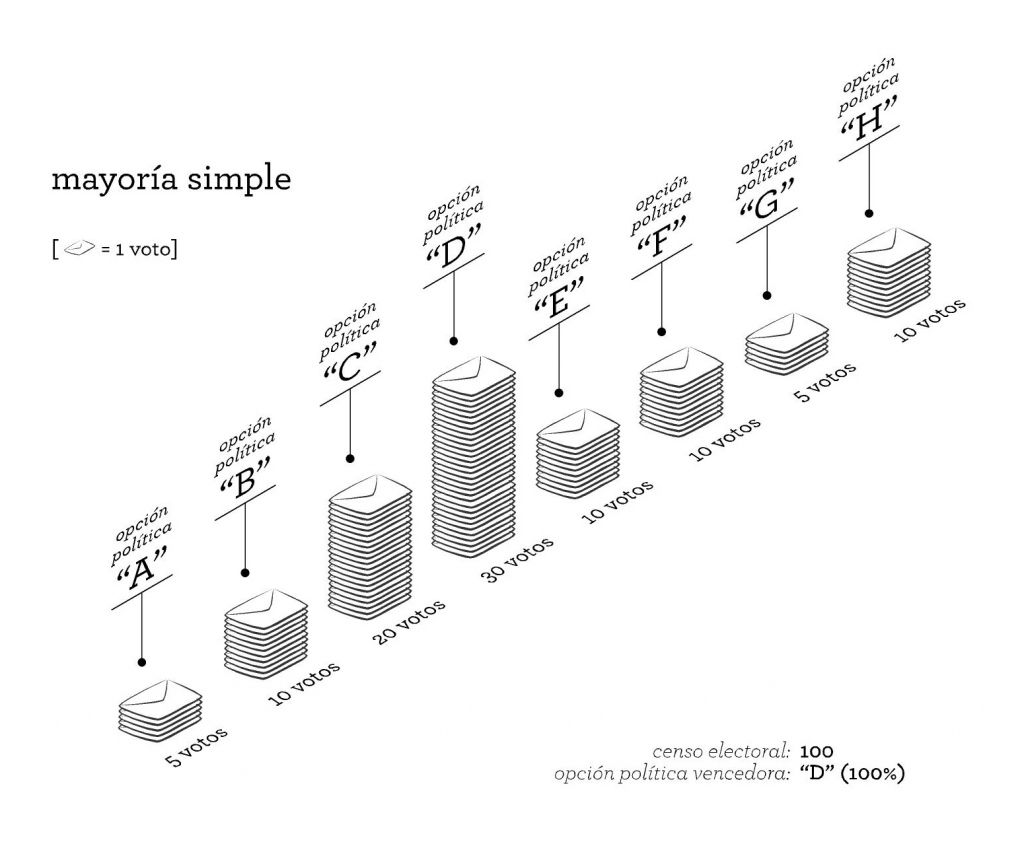
1. **Sistemas electorales: Tipos.**

El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos, por medio del voto, establece quiénes conformarán los diferentes órganos de gobierno o de representación política de una Nación. Es una estructura intermedia del proceso a través de la cual una sociedad democrática representativa elige a sus gobernantes.

A saber, los participantes de un sistema electoral son: los candidatos, partidos políticos, electores, medios de comunicación, gobierno, campañas electorales, fórmulas de repartición de votos, localización de las mesas electorales, modelos de recuento, etc.

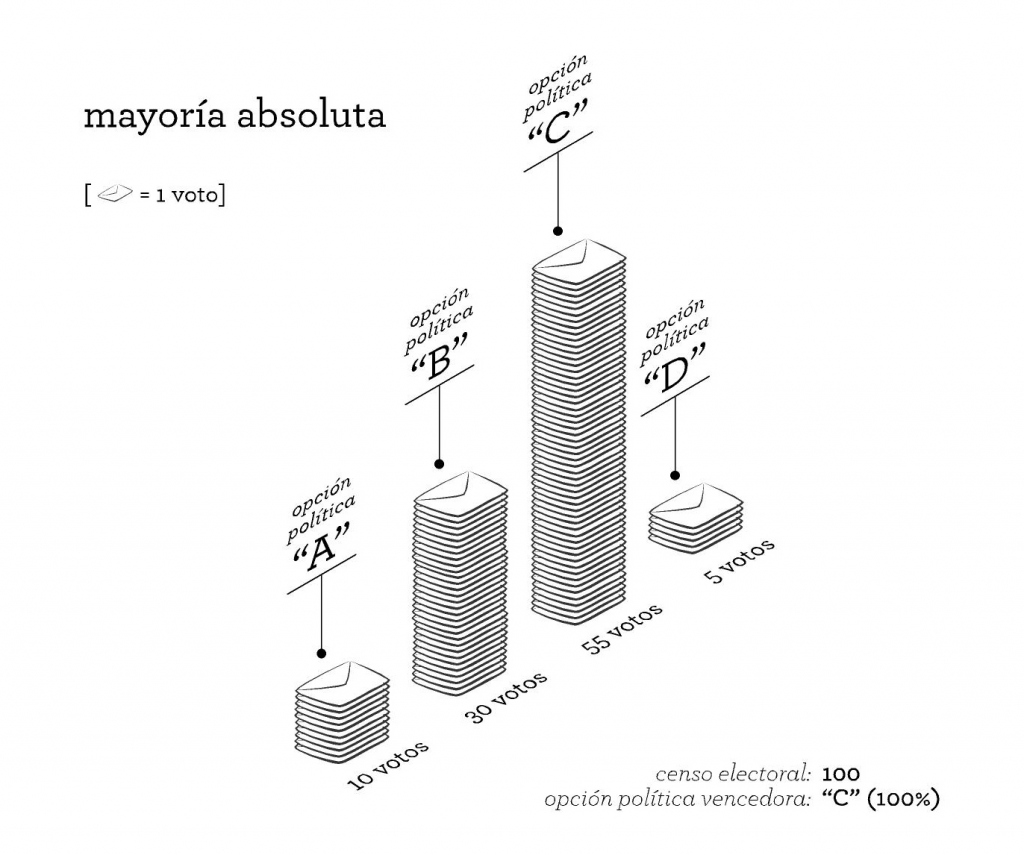
Ningún sistema electoral es neutro. Todo régimen electoral beneficia a algunos partidos y perjudica a otros. Podemos clasificar a los sistemas electorales en:

* Mayoritarios:
  + Mayoría simple: Este es el medio más antiguo y sencillo de los que existen. Cada elector posee un voto que da a uno u otro candidato. El candidato con el mayor número de votos gana. Este sistema tiene el gran inconveniente de que si se presenta una gran cantidad de candidatos, el ganador puede representar una pequeña minoría del electorado. Puesto que este tipo de sistema electoral sólo busca un ganador (no reparte la representación), la Opción Política D decidiría por todo el resto de electores, limitando, y mucho, la decisión del resto de votantes.

[](http://latrampadelaselecciones.files.wordpress.com/2011/04/abstencion_mayoria-simple3.jpg)

* + Mayoría absoluta: Esta variante corrige el error del modelo anterior, puesto que para alcanzar la victoria el candidato ha de obtener al menos, la mitad de los votos más uno. Esto asegura que la opción ganadora tenga el respaldo de la mayoría de los votantes. Generalmente este sistema está asociado a segundas vueltas que van limitando las candidaturas.

En este caso, el vencedor de estas supuestas elecciones sería opción política que ha obtenido 55 votos (Opción Política C) ya que ha conseguido más de la mitad de los votos (50 + 1 votos). Al igual que la mayoría simple, este sistema se emplea para asignar un solo vencedor.

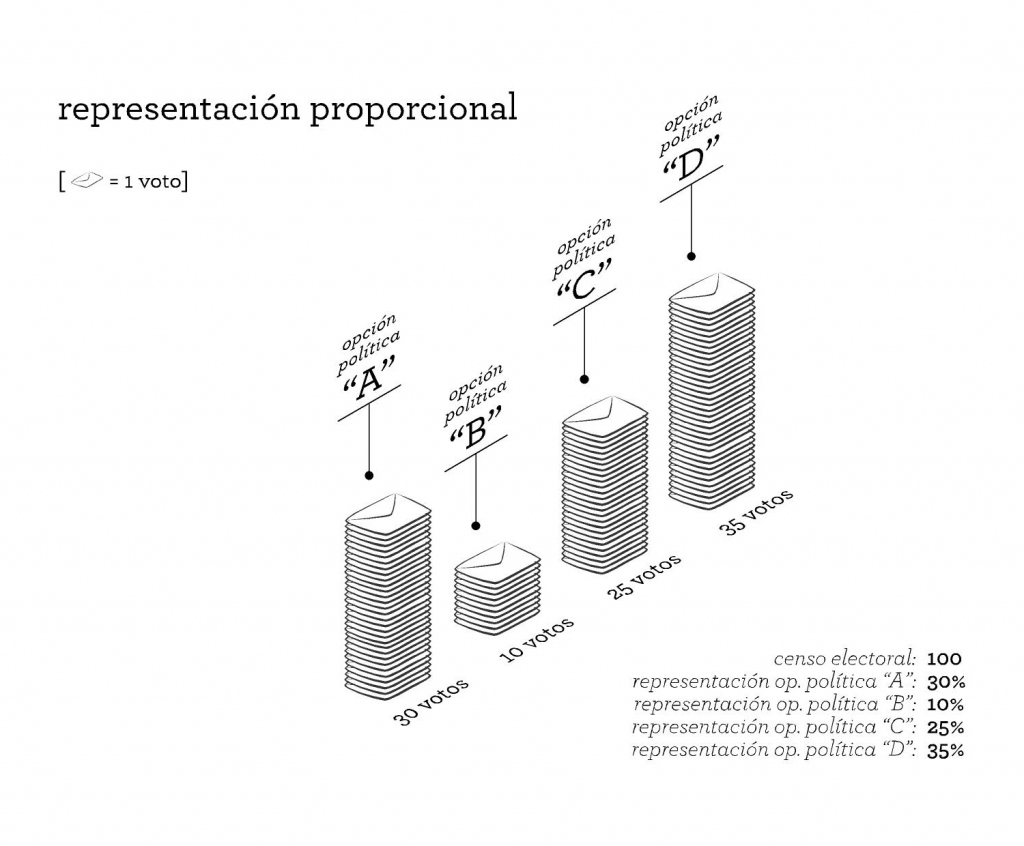
[](http://latrampadelaselecciones.files.wordpress.com/2011/04/abstencion_mayoria-absoluta1.jpg?w=1024)

* Sistemas minoritarios: Tienen como finalidad proteger a las minorías a fin de que obtengan su representación y de este.
* Sistemas Proporcionales: En el sistema electoral proporcional, el número elegidos que obtiene un partido trata de ser lo más parecido posible al número de votos obtenidos. Esto es: si un partido obtiene el 20% de los votos, obtiene aproximadamente el 20% de los escaños. En casi ningún país se utiliza un sistema proporcional puro, sino modificaciones del mismo para hacer más fácil obtener mayorías. En Argentina se utiliza, concretamente, el método d’Hont.

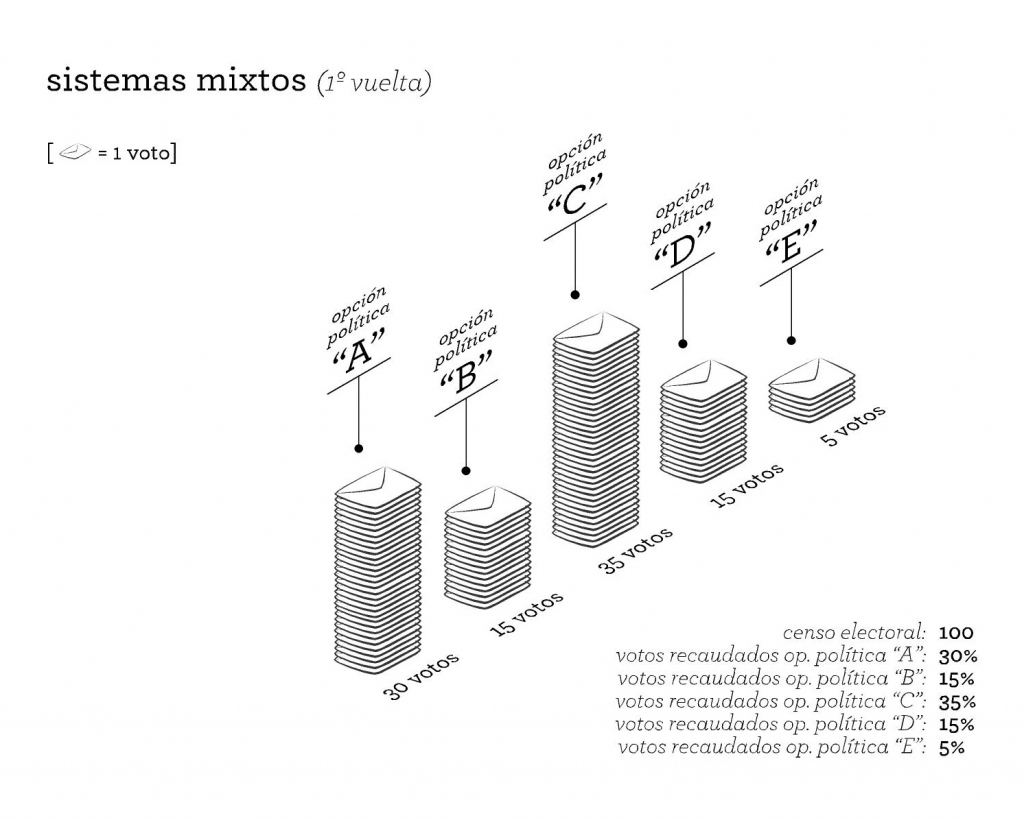
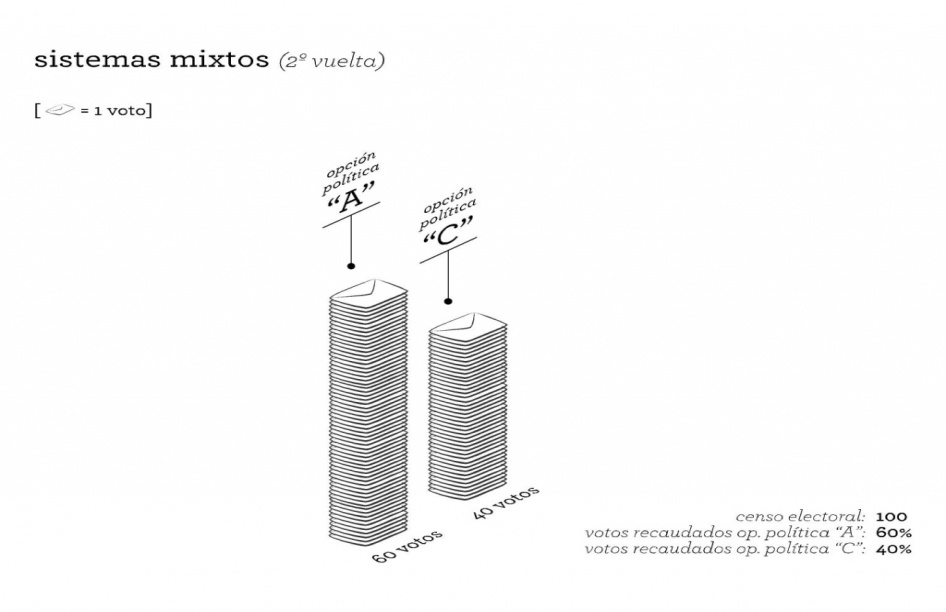
Las mayorías simples y absolutas tienen más o menos representación de la que deberían tener, ya que no asignan a cada partido tantos representantes como correspondan a su fuerza electoral. En teoría, el sistema proporcional es el método más justo de repartir los votos puesto que todos los que se presenten a unos comicios tendrán poder a la hora de tomar decisiones.

El problema del RP es que, generalmente en su aplicación, fija un límite mínimo para acceder al reparto de escaños quedando así, aquellos partidos que no lo alcancen, sistemáticamente eliminados o subrepresentados. Se trata de respetar el resultado electoral, sin tener en cuenta la gobernabilidad del sistema. No se busca un solo ganador y a diferencia de los dos anteriores, cada partido ejerce una decisión política proporcional al nº de votos conseguidos.

Los sistemas mayoritarios favorecen al bipartidismo y los proporcionales al pluripartidismo. Los Sistemas mayoritarios son: El de lista completa, lista incompleta, circunscripción uninominal y doble vuelta. Los sistemas proporcionales son los del cociente y sus variantes.

[](http://latrampadelaselecciones.files.wordpress.com/2011/04/abstencion_representacion-proporcional1.jpg)

* Sistemas mixtos: Los sistemas de elecciones que se aplican en todo el mundo suelen ser mezclas y/o variaciones de los tres sistemas básicos.

Estos combinan, por ejemplo, la mayoría simple en una primera vuelta y la mayoría absoluta en una segunda; o se emplea la mayoría simple en las provincias complementadas con diputaciones adicionales distribuidas por el método de representación proporcional o RP. Generalmente el reparto de los escaños en los modelos R.P. se hace entre las “demarcaciones” o “circunscripciones plurinominales” de cada nación (en el caso español, las provincias) y no directamente al % directo de votantes.[](http://latrampadelaselecciones.files.wordpress.com/2011/04/abstencion_sistemas-mixtos-1c2ba-vuelta1.jpg?w=1024)[](http://latrampadelaselecciones.files.wordpress.com/2011/04/abstencion_sistemas-mixtos-2c2ba-vuelta1.jpg)

En este ejemplo de sistema mixto, se realiza una 1ª vuelta “eliminatoria” en la que se reducen el nº de candidatos por medio de la “mayoría simple” y una 2ª vuelta mediante la “mayoría absoluta” que decide el vencedor de los partidos.

1. **Clases de sistemas electorales.**

Hay 6 métodos a través de los que se distribuyen cargos electivos de acuerdo con el voto del pueblo:

* Lista completa: No se vota por una persona, sino por la lista entera y la lista más votada entra con todos sus candidatos, que pasan a ser diputados. La crítica es que son todos de un mismo partido, y además, por querer que gane un candidato, se deben votar los demás de la lista aunque al votante no le gusten.
* Lista incompleta o Ley Saénz Peña: Los cargos que va a ocupar la lista ganadora son 2/3 de los totales, entonces la lista más votada ocupará esa fracción de vacantes y el 1/3 que falta lo ocupará la lista que salió segunda en las votaciones.
* Ley de Lemas: Un lema es un partido, un sublema es una fracción del partido.

Todas las fracciones internas de ese partido pueden presentarse a elecciones con candidatos propios, los cuales vienen a constituir los denominados sublemas.

El total de votos que se adjudica cada político (lema), corresponde a la suma de los votos que hayan recibido todos los sublemas de ese partido o lema. Esto determina el número de cargos que obtiene ese lema.

La asignación de cargos se distribuye en forma proporcional a los votos obtenidos por los sublemas. La asignación de bancas se realiza a través del sistema D´Hont de representación proporcional.

Tiene aplicación en algunas provincias solamente.

* Ballotage o doble vuelta (incorporado con la reforma del 94): este sistema se aplica en la elección del presidente y el vicepresidente. Establece una segunda vuelta donde solo participan partidos que más votos obtuvieron pero que no llegaron a obtener (ninguno de los dos) más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos (no se tiene en cuenta los votos en blanco o nulos). No se recurriría tampoco al ballotage si un partido obtiene en primera vuelta el 40% de los votos y le saca al segundo partido una diferencia de por lo menos 10 puntos.
* Circunscripción uninominal: El distrito se divide en tantas circunscripciones como vacantes haya y se vota por un diputado por cada circunscripción.
* Representación proporcional – Sistema D’Hont: Este sistema se usa para lograr que haya una representación de la mayoría de los partidos dentro de la Cámara. Se le da a cada partido un número de representantes según la cantidad de votos que obtuvo en la elección: si hay 5 puestos y 2 partidos, se divide la cantidad de votos de cada uno por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Se obtienen 5 resultados por cada partido y de esos 10 números se sacan los 5 mayores. El número más chico de esos 5 será para la cifra por la que se va a dividir la cantidad de votos que tuvo cada partido. El usado hoy en nuestro país es este sistema D’Hont.

1. **Régimen legal vigente.**

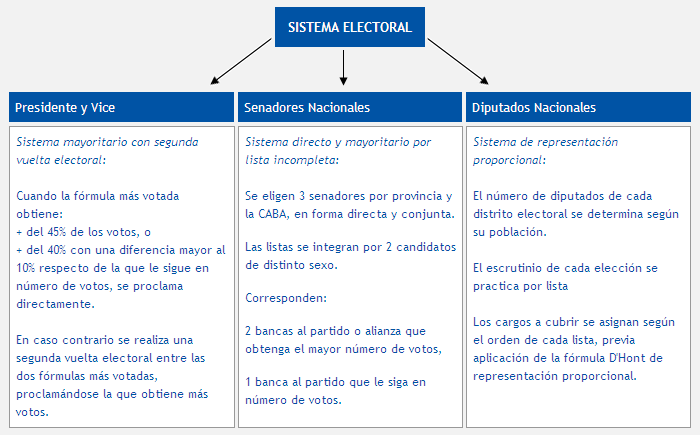
**RÉGIMEN ELECTORAL VIGENTE**

Cada dos años se llevan a cabo elecciones para cargos nacionales.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿QUÉ CARGOS SE ELIGEN?** | | **¿DE QUÉ MANERA SE ELIGEN?** | | **¿POR CUÁNTO TIEMPO SE ELIGEN?** |
| **Presidente y Vicepresidente de la Nación (cada 4 años)** | | Sistema mayoritario con segunda vuelta electoral | | 4 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo |
| **Senadores de la Nación** (la cámara se renueva por tercios cada dos años) | | Sistema mayoritario con lista incompleta | | 6 años, con posibilidad de reelección ilimitada |
| **Diputados Nacionales** (la cámara se renueva por mitades cada dos años) | | Sistema de representación proporcional | | 4 años, con posibilidad de reelección ilimitada |
|  |  | |  |  |

|  |
| --- |
|  |

En la Argentina, la forma en que los votos emitidos por la ciudadanía se traducen en cargos –es decir, el sistema electoral-, es diferente de acuerdo al cargo de que se trate. De este modo, coexisten tres fórmulas diferentes:



¿Cuándo son las elecciones?

A diferencia de ocasiones anteriores, a partir de la sanción de la Ley Nº 26.571, tendremos una mayor participación y deberemos votar al menos dos veces:

El segundo domingo de agosto de los años impares elegiremos, en Elecciones Primarias, entre los precandidatos presentados por los distintos partidos políticos y alianzas, para definir quiénes serán los candidatos en las Elecciones Nacionales

El cuarto domingo de octubre de año impar, elegiremos a nuestros representantes para distintos cargos electivos nacionales, entre los candidatos proclamados en las Elecciones Primarias.

¿Quiénes votan? Todos los ciudadanos que al cuarto domingo de octubre tengan 18 años o más, deben votar en las Elecciones Primarias y en las Elecciones Nacionales.

1. **Artículo 37 de la Constitución Nacional.**

**Art. 37.- [DERECHOS POLÍTICOS. IGUALDAD DE SEXO PARA LOS CARGOS PÚBLICOS].- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.**

**La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.**

A través de este artículo los derechos políticos dejan de ser implícitos y de esta forma el sufragio y sus características obtienen rango constitucional.

Las características del voto son las siguientes:

* **Universal:** Esto significa que todos los ciudadanos pueden votar. En el año 1947 se le permitió votar a la mujer por primera vez (aunque la provincia de San Juan lo admitió desde 1927). La edad mínima exigida para votar es de 18 años.
* **Igual:** Cada ciudadano tiene un voto, es decir que no hay votos calificados. Los votos calificados son aquellos en donde según la característica de la persona su voto podía valer 2, 3 o más votos que el de los demás.
* **Secreto:** Esto significa que no se puede obligar al votante a que diga a quién va a votar o votó. Esto se hace para evitar algo muy común en tiempos pasados en nuestro país: el fraude electoral, las presiones y amenazas para obtener los votos, etc. La votación se lleva a cabo en los denominados “cuartos oscuros”, que son habitaciones en donde están las boletas y no hay ventanas (o están tapadas) para evitar que el votante sea visto al momento de emitir su voto.
* **Obligatorio:** Porque además de ser un derecho es una obligación cívica y nadie puede abstenerse de votar (salvo casos puntuales como edad avanzada o si se está a más de 500 kms. De distancia del lugar asignado a votar).

Esto fue establecido por la Ley Saénz Peña de 1912.

En la segunda parte del artículo se vuelve al principio de igualdad (art. 16): La igualdad entre hombres y mujeres para acceder a cargos electivos y partidarios. Es lo que se llama una discriminación positiva: Se realizan acciones que dan preferencia al grupo que sufre la discriminación, para contrarrestarla o eliminarla. Lo óptimo es que la persona ocupe el cargo por su idoneidad y sin importar sexo, raza, religión, estado civil, etc.

1. **Los partidos Políticos: Concepto, Estatuto, Controles externos e internos.**

El partido político es una asociación cuyo objetivo principal es tener y ejercer el poder del Estado, por medio de sus dirigentes. A fin de cumplir ese objetivo, el partido político realiza diversas funciones, por ejemplo:

1. *Encauzar la voluntad política del pueblo* para posibilitar el ejercicio ordenado del sistema republicano y democrático, evitando los daños de la anarquía.
2. *Realizar la intermediación entre las demandas de la sociedad (es decir, de los ciudadanos) y los detentadores del poder.*
3. *Educar a los ciudadanos para la responsabilidad política.*
4. *Seleccionar a los cuadros de dirigentes que deben gobernar.*

El art. 2° de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23298) dispone que a los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos.

1. *Proyectar la política del gobierno (o de la oposición) y controlar su ejecución.*

Burdeau clasifica a los partidos políticos según los factores que motivan el reclutamiento de los afiliados en:

* Partidos de doctrina o de cuadros: Son partidos pequeños con una gran cohesión alrededor de una doctrina.
* Partidos de masas: No tienen una doctrina que los aglutine, sino que el elemento cohesionante es el carisma de un líder y en el interior del partido se observan variantes ideológicas de izquierda y de derecha, que muchas veces no tienen nada en común.

También se los puede clasificar en partidos del sistema y partidos antisistema. Los primeros son aquellos que se encuadran dentro del sistema democrático, pluralista y republicano. Los segundos, en cambio, tienen por objeto destruirlo, como, por ejemplo, el Partido Comunista.

Según el investigador de ciencias políticas italiano Sartori, en su libro Partidos y Sistemas de Partidos un partido es “cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos”

Los partidos políticos son instituciones fundamentales de un sistema democrático.

Los mismos son agrupaciones organizadas de ciudadanos que tiene un programa político y social y su objetivo es aplicarlo desde la conducción del Estado a través del voto de la sociedad.

Estos partidos son personas jurídicas de derecho público y hacen de intermediarios entre el Estado y la sociedad. Sirven para unificar ideas y soluciones a problemas sociales, ya sean partidos políticos del oficialismo o de la oposición.

Es el congreso Nacional el encargado de dictar leyes que regulan la actividad de estos partidos.

Los partidos políticos tienen estatutos o reglamentos que sus afiliados deben respetar, ya que es la ley que regula la actuación de los partidos políticos nacionales, provinciales y municipales. Un estatuto que violentase las normas constitucionales desconociendo el ejercicio de los derechos, es considerado inconstitucional, por lo tanto carecerá de validez. Sólo respetando los mismos podrán proponerse como candidatos del partido en un proceso de elecciones o participar de la toma de decisiones del partido. Dentro de los mismos se determinará cómo se eligen sus autoridades y fijando sus órganos. Al respecto, la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral ha elaborado como estándar el principio de “regularidad funcional” de donde surge la menor intromisión posible en la vida interna de los partidos, siendo sus órganos respectivos quienes interpreten su funcionamiento, con excepción de graves o flagrantes violaciones de las leyes.

* Control interno: Es a través del cual se establece la obligatoriedad para cada partido de adoptar un sistema determinado de gobierno. También integran este control las pautas que se fijan al partido con respecto al manejo patrimonial de sus fondos.
* Control externo: Puede tener 2 aspectos:

1- Control programático: se lleva a cabo exigiendo que los instrumentos normativos e ideológicos de cada partido se adecue por la Constitución o que no viole esta. También forman parte de este control las determinaciones sobre el nombre del partido, ya que este sintetiza la orientación ideológica del mismo.

2- Control ejecutivo: se efectúa sobre la actividad de las autoridades o candidatos partidarios, en especial se exige que dichos órganos no nieguen con su actuación los derechos humanos ni al sistema democrático, ni utilicen la fuerza como técnica de exteriorización política.

1. **Artículo 38 de la Constitución Nacional.**

**Art. 38.- [Partidos Políticos].- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.**

**Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas.**

**El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.**

**Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.**

A partir de este artículo se incorporan los partidos políticos a la Constitución. Los partidos políticos son agrupaciones organizadas de ciudadanos que tienen un programa político y social y su objetivo es aplicarlo desde la conducción del Estado a través del voto de la gente (logrando el poder público).

Estos partidos son personas jurídicas de derecho público no estatales y se dice que son los encargados de canalizar la opinión pública la opinión pública y hacer de intermediarios entre el Estado y la sociedad. Sirven para unificar ideas y soluciones a problemas sociales ya sean partidos políticos del oficialismo o de la oposición. El Congreso Nacional es el encargado de dictar las leyes que regulan la actividad de estos partidos.

Este artículo está expresando el **principio de libertad de creación de partidos políticos:** El Estado no se va a inmiscuir en su creación (ni en el ejercicio de sus actividades) siempre que se respete la Constitución. Es decir, que se cumplan con los derechos que ella garantiza y las obligaciones que ella exige. La Constitución garantiza:

* Que los partidos son los habilitados para postular candidatos a los cargos públicos electivos.
* Que los partidos tienen derecho a acceder a la información pública y a la difusión de sus ideas.
* En la parte final del artículo se menciona el **apoyo económico** que debe brindar el Estado a los partidos políticos, ya que ellos realizan una actividad de carácter público. A raíz de esto es que los partidos están obligados a dar a conocer en forma pública, tanto su patrimonio como el destino de sus fondos, para que la sociedad pueda tener un control de lo que gasta en campañas electorales.

**Régimen de “elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”** (Conforme a la Ley 26571 y Decreto 443/2011).- En Diciembre de 2009 se sancionó la Ley 26571 (“Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral””), la cual establece el régimen de “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”.

Se trata de un mecanismo de preselección de candidatos para cargo públicos nacionales (presidente, vicepresidente, diputados y senadores), que se efectúa previamente a las elecciones generales. De esta forma, se vota entre los precandidatos que los partidos políticos proponen y de eta elección surge cuáles serán los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales.

A continuación analizamos por qué se las denomina “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”:

1. **Primarias:** Ya que es la primera etapa del proceso de elección. Luego se efectúan las elecciones generales. Y más tarde (en caso que corresponda), se efectúa el ballotage o segunda vuelta.
2. **Abiertas:** Ya que todos los ciudadanos participan de la selección de candidatos, estén o no afiliados a un partido político.
3. **Simultáneas:** Ya que se celebran un mismo día en todo el país, en un mismo acto electoral.
4. **Obligatorias:** Son obligatorias para todos los ciudadanos que tengan 18 años o más, y para todos los partidos o alianzas que pretendan competir en las elecciones nacionales generales.

Por otro lado, para poder participar de las elecciones generales, los candidatos deberán superar el 1,5% de los votos emitidos en las elecciones primarias. Es decir, que aquellos que no lleguen al 1,5% en las primarias, no podrán presentarse en las elecciones generales. A través del Decreto 443/2011 se reglamenta el hilado fino de esta etapa electoral.

Unidad n° 9: Derecho Constitucional de Poder. Órgano Legislativo.

1. **La cámara de diputados:** Los diputados representan al Pueblo de la Nación.
   1. **Composición:** El artículo 45 de la Constitución fija los caracteres esenciales de la integración de la Cámara de Diputados de la Nación.

**Art. 45.- [COMPOSICIÓN.ELECCIÓN DIRECTA].- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.**

El número de Diputados se toma en base a la cantidad de habitantes que tenga cada provincia (distrito), lo cual surge de los censos que se realizan cada 10 años. De esta forma vemos que el número de diputados va variando: se elige como base 1 diputado por cada 33000 habitantes o fracción no menor a 16500 habitantes. Esta base puede ser aumentada por el Congreso luego de cada censo, pero nunca puede ser disminuida. Según la legislación electoral vigente se establece un mínimo de 5 diputados por provincia o distrito.

* 1. **Forma de elección:** Los Diputados representan al pueblo por eso es que son directamente elegidos por los ciudadanos en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de 1994 eran elegidos indirectamente por las Legislaturas Provinciales.

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado: Esto significa que la división en distritos (provincias) es solamente para determinar el número de diputados a elegir en cada provincia, pero no significa que representen a esa provincia, ya que los diputados representan a la Nación.

El fragmento del artículo 45 **“… A simple pluralidad de sufragios… ”** significa que las vacantes para diputados van a ser ocupadas por los candidatos más votados en cada distrito. La forma usada para computad los votos y distribuir cada vacante según los resultados se llama sistema electoral. Como nuestra Constitución no establece ningún sistema en especial, el Congreso es que va a decir cuál se usará.

* 1. **Censo.**

**Art. 47.- [LEGISLATURAS POSTERIORES: CENSO GENERAL].- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.**

Este artículo expresa que para saber el número de diputados que va a integrar la segunda cámara se deberá hacer el censo y a partir de éste se podrá realizar un nuevo censo cada 10 años.

* 1. **Condiciones para ser diputado.**

**Art. 48.- [REQUISITOS PARA SER DIPUTADO].- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.**

Este artículo expresa los requisitos para ser diputado:

* Tener 25 años cumplidos (se considera que es una edad en donde se alcanza la madurez para ser diputado).
* Ser argentino (nativo o naturalizado).

Tener 4 años de ciudadanía en ejercicio como mínimo. El fundamento es que la persona debe sentirse un verdadero argentino.

* Ser natural de la provincia que lo elija (es decir, haber nacido en ella) o vivir dos años en esa provincia inmediatos anteriores a la elección (para aquellos que no nacieron en esa provincia). El fundamento es sentirse como de la provincia que lo elija.

Es importante aclarar que estos requisitos se exijen al momento de asumir como diputado y no al momento de ser elegido, es decir que puede presentarse como candidato sin reunir estos requisitos, siempre que los alcance al asumir.

* 1. **Duración del mandato.**

**Art. 50.- [DURACIÓN.REELECCIÓN. RENOVACIÓN PARCIAL].- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer período.**

* Duración del mandato: 4 años y se pueden reelegir indefinidamente.
* Renovación: Cada dos años se cambia la mitad de la cámara de diputados a través de elecciones (esto es para que todos los partidos políticos tengan la posibilidad de participar).

El último párrafo nos indica que por única vez un grupo de diputados estará sólo dos años (por sorteo) para así poder seguir con la cadena de renovación de la mitad cada dos años. Ejemplo: Tenemos A,B,B,D. Se sortea y A,B debe salir en el primer período. Entonces pasados dos años se van A,B y entran E,F. Pasados 2 años más salen C,D (que ya cumplieron sus cuatro años) y entran G,H. Pasados otros dos años salen E,F con sus 4 años cumplidos y así sucesivamente.

* 1. **Vacantes.**

**Art. 51.- [VACANTES].- En caso de vacante, el gobierno de provincia, o de la Capital, hace proceder a elección legal de un nuevo miembro.**

Este artículo establece que en caso de quedar vacío un puesto por muerte, renuncia o destitución del diputado, se debe llamar a elecciones dentro del distrito al que pertenece el diputado.

El elegido no cumple un mandato nuevo de 4 años, sino que debe terminar el que dejó su antecesor.

En verdad esto quedó derogado ya que a través de las leyes electorales se establece que ante una vacante tienen prioridad los candidatos titulares que no fueron electos y luego aquellos suplentes elegidos al efectuar la elección.

* 1. **Atribuciones exclusivas.**

**Art. 52.- [INICIATIVA EXCLUSIVA].- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.**

Esto significa que, si bien tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores pueden ser Cámara Iniciadora (aquella en donde se empiezan a tratar los proyectos presentados por miembros del Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo) o Cámara Revisora (aquella que revisa el proyecto que viene de la Iniciadora), para algunos temas específicos, sólo la de Diputados podrá ser iniciadora: Para proyectos de ley sobre contribuciones o sobre reclutamiento de tropas.

**Art. 53.- [JUICIO POLÍTICO].- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.**

El presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte Suprema gozan todos de inamovilidad en sus funciones y inmunidad de jurisdicción penal.

De esa forma, mientras estén cumpliendo su mandato no pueden ser destruidos o procesados. Pero estos privilegios son relativos: hay una forma para destituirlos y procesarlos en caso de que no cumplan con su mandato o cometan algún delito: el llamado juicio político.

El juicio político es un sistema de control que ejerce el Congreso, respetando así el principio republicano de división de poderes. Su fin no es castigar al funcionario, sino simplemente separarlo del cargo, para que quede libre de privilegios para luego, si correspondiere, someterlo a proceso.

* **Es Cámara iniciadora en los proyectos de iniciativa popular.**
* **Ejerce la iniciativa para someter a consulta popular un proyecto de ley.**

1. **La cámara de senadores:** Los senadores representan a las provincias como entidades autónomas.
   1. **Composición.**

**Art. 54.- [COMPOSICIÓN].- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.**

Cada provincia (y la Ciudad de Buenos Aires) va a tener el mismo número de senadores, sin importar su población, porque los senadores representan a la provincia (y no al pueblo como ocurre con los diputados). El número de senadores es tres por provincia y tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 2 del partido que obtuvo más votos y 1 del que le sigue en cantidad de votos.

Esto es criticable porque en lugar de representar a la provincia parece que representan al partido. Antes de la reforma de 1994 la cantidad de senadores era de 2. Cada senador tiene 1 voto. Actualmente hay un total de 72 senadores (24 x 3).

* 1. **Forma de elección.**

Antes de la reforma los senadores se elegían en forma indirecta (eran elegidos por las Legislaturas Provinciales), pero ahora se eligen al igual que los diputados, en forma directa. Este cambio es favorable, ya que al ser el pueblo el que elige habrá más transparencia en la elección, evitándose casos de corrupción como cambiar cargos por favores.

Nuestra constitución siguió el modelo originario de los estados unidos , disponiendo también que los senadores nacionales fueran elegidos por la legislatura provinciales , también establecieron que los senadores de capital federal serian elegidos en la misma forma que el presidente y el vicepresidente de la nación .

El sistema indirecto de elección, también genero situaciones conflictivas en nuestro país, al igual que estados únicos que ejercía el sistema indirecto.

Ello motivó que tanto la reforma constitucional de 1949 (art47) como la enmienda transitoria de 1972 (art46) se inclinaran por el sistema de elección directa de los senadores.

La reforma de 1994 modifico el procedimiento de elección de senadores. El art 54 expresa “ el senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la cuidad de buenos aires , elegidos en forma directa y conjunta , correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor numero de votos y la restante al partido político que le siga el numero de votos cada senador tendrá un voto. La elección directa mejora el sistema representativo y evita ciertas manipulaciones electorales

La elección directa de los senadores nacionales debe esperar hasta el 2001.

Esto corresponde a partir de 10 de diciembre de 1995 hay tres senadores por provincia y tres por capital federal. La designación sigue correspondiendo a las legislaturas locales hasta el año 2001 en que entra definitivamente en vigor la designación por voto popular directo.

Estas designaciones por las legislaturas provinciales estarían lejos de mejorar el sistema actual, al cual le introdujeran nuevas complicaciones.

Cuando hay que designar un senador por minoría lo hace la respectiva legislatura por mayoría de votos. Esto quiere decir que el partido mayoritario virtualmente denominado la elección de senador designado en representación de la minoría.

La elección de los senadores se llevara una clausula donde informa con una anticipación no menor a setenta días ni mayor a noventas días al momento que el senador debe asumir su función.

* 1. **Condiciones para ser senador.**

**Art. 55.- [REQUISITOS PARA SER SENADOR].- Son requisitos para ser elegidos senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.**

Este artículo enumera los requisitos para ser senador:

* + Tener 30 años.
  + Ser argentino (nativo o naturalizado).
  + Haber sido – como mínimo – 6 años ciudadano de la Nación (este requisito se le exige sólo a los argentinos naturalizados, pero no a los nativos).
  + Tener una renta anual de 2000$ o entrada equivalente.
  + Ser natural de la provincia que lo elija (es decir, haber nacido en esa provincia) o vivir dos años en esa provincia inmediatos anteriores a la elección (para aquellos que no nacieron en esa provincia).

Es importante aclarar que estos requisitos (a diferencia de los exigidos para ser diputado) deben estar presentes al momento de ser elegido como senador, es decir que no alcanza con que estén presentes al asumir como senador.

* 1. **Juramento**

En el momento de incorporarse a sus respectivas cámaras, los senadores y diputados nacionales tienen que prestar juramento asumiendo compromiso de desempeñar debidamente su cargo.

* 1. **Duración del mandato.**

**Art. 56.- [DURACIÓN.** **REELECCIÓN. RENOVACIÓN].- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.**

Existen dos temas importantes reformados en la Constitución del 94: La duración del mandato y su renovación.

* + Duración del mandato: Duran 6 años en el ejercicio de su mandato (antes de la reforma la duración era de 9 años) y pueden ser reelectos en forma indefinida.
  + Renovación: La Cámara se renueva por tercios cada dos años (antes de la reforma se renovaba por tercios pero cada 3 años).

El mecanismo es el mismo que para diputados:

Ejemplo:

23 provincias más Ciudad de Buenos Aires= 24; 24 x 3= 72 senadores. 72 /3=24. Es decir que pasan dos años y se cambian 24 senadores, pasan dos años más y se cambian 24 de los viejos y pasados dos más, se renuevan los últimos 24. Pasados dos años más se cambian los primeros que entraron (que ya cumplieron sus 6 años) y entran 24 nuevos y así hasta que cumplen todo su mandato de 6 años. Al principio se va a sortear quienes van a estar en su cargo sólo dos años y quienes sólo cuatro (para facilitar el mecanismo de renovación en cadena) y el resto sí podrá cumplir los 6 años completos.

* 1. **Vacantes.**

**Art. 62.- [VACANTES. ELECCIÓN DE NUEVO MIEMBRO ].- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro.**

En verdad lo que se establece en este artículo quedó derogado, ya que a través de las leyes electorales se acordó que, ante una vacante tienen prioridad los candidatos titulares que no fueron electos y luego aquellos suplentes que deben ser elegidos al momento de elegir Senadores.

* 1. **Autoridades.**

**Art. 57.- [PRESIDENTE DEL SENADO].- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.**

El Vice, tiene la función de ser el presidente del Senado y solamente va a poder votar como un senador más, para desempatar ante una votación pareja. El vice no integra el Poder Ejecutivo, sólo reemplaza al Presidente cuando éste está ausente.

**Art. 58.- [PRESIDENTE PROVISORIO DEL SENADO].- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando éste ejerce las funciones de presidente de la Nación.**

Este presidente provisorio va a reemplazar al presidente del Senado (es decir, al vice de la Nación) cuando éste esté ausente (en forma transitoria o definitiva) ya sea por motivos de enfermedad, viajes, renuncia, muerte, etc.; o porque debe ocupar el cargo de Presidente.

Es nombrado por el propio Senado y es un cargo importante ya que puede llegar a ocupar el cargo de presidente.

* 1. **Dietas**

**Art. 74.- [DIETAS].- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la Nación, con una dotación que señalará la ley.**

Se llama dieta al sueldo que reciben los legisladores. Ese dinero sale del Tesoro Nacional y la suma se la fijan ellos mismos a través de una ley, lo cual puede dar lugar a abusos y complacer intereses personales.

* 1. **Atribuciones exclusivas.**

**Art. 59.- [FUNCIÓN DEL SENADO EN EL JUICIO POLÍTICO].- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto.**

**Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.**

En el art. 53 se expresa que la Cámara de Diputados actúa en el juicio político como fiscal acusando a determinados funcionarios ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores actúa, en cambio, como juez, como tribunal.

Cuando se esté acusando al Presidente, el Senado no va a ser presidido por el vice (presidente del Senado), sino por el presidente de la Corte Suprema: Esto es para evitar que la decisión sea subjetiva o imparcial, ya que puede ser que el vice quiera que se saque al presidente para sustituirlo.

En el caso que el propio vicepresidente sea acusado, tampoco podrá presidir dicho tribunal. El juicio debe hacerse cumpliendo los requisitos del debido proceso, explícitos en el artículo 18.

El senado dicta sentencia: condenando al acusado sólo si por lo menos 2/3 partes de los senadores presentes votan por eso; caso contrario deberá ser absuelto.

**Art. 60.- [JUICIO POLÍTICO: EFECTOS DEL FALLO].- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.**

Efectos de la sentencia de Juicio Político:

El efecto principal del fallo, en caso de que el acusado sea condenado, es de sacarlo, removerlo del cargo público que ocupaba. El efecto secundario puede ser inhabilitarlo para ocupar cargos públicos.

Además, si el motivo de este juicio político fue que el acusado cometió algún delito, luego de destituirlo será sometido a los tribunales ordinarios, como una persona común.

**Art. 61.- [DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO].- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.**

Autorización para declarar Estado de Sitio:

Si el Presidente, a raíz de un ataque del exterior quiere declarar estado de sitio en algún sector del país, debe ser autorizado por el Senado (ya que necesita de su acuerdo para suspender garantías constitucionales).

**3) Es Cámara de origen de la ley-convenio sobre coparticipación.**

**4) Es Cámara de origen en las leyes en que el Congreso ejerce la facultad de “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”**

**5) Presta el acuerdo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, en sesión pública convocada al efecto y por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.**

**6) Presta el acuerdo para la designación de los demás jueces federales, tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.**

**7) Presta el acuerdo para un nuevo nombramiento de los jueces federales.**

**8) Presta el acuerdo para el nombramiento y la remoción de embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios a propuesta del Poder Ejecutivo.**

**9) Presta acuerdo al Poder Ejecutivo en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas.**

1. **Disposiciones comunes a ambas cámaras. Sesiones**

Se denomina sesión a la reunión plenaria que realizan las cámaras en ejercicio de sus potestades constitucionales. Las sesiones del Congreso se dividen en tres categorías previstas en la Constitución: Sesiones Ordinaria – Sesiones Extraordinarias y Sesiones de Prorroga. Hay una última categoría que no esta prevista en la Constitución sino en los reglamentos internos de las Cámaras: las Sesiones Preparatorias.

**Art. 63.- [SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS].- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.**

Este Artículo habla de las sesiones del Congreso.

Existen cuatro clases de sesiones:

1. De inicio o preparatorias: Son aquellas que se llevan a cabo antes del inicio de las ordinarias y son las primeras en orden de tiempo. Su fin es realizar todos los trámites administrativos previos (ejemplo: recibir a los diputados y senadores nuevos, tomarles juramento, fijar días y horarios de sesión, nombrar a los integrantes de las comisiones asesoras permanentes, etc.). No se encuentran en la Constitución Nacional sino en los reglamentos internos de las Cámaras. Surgen de la necesidad funcional que tienen los cuerpos legislativos de organizar su tarea.
2. Ordinarias: Son las sesiones a las que se autoconvoca cada Cámara, desde el 1 de marzo y hasta el 20 de noviembre. Este lapso solía durar tan solo 5 meses, pero con la reforma de 1994 se amplió a 9 meses. En ellas el Congreso sesiona sin que intervengan los demás poderes, haciendo total uso de sus funciones legislativas y parlamentarias. Trabaja con “agenda abierta”. La apertura de las sesiones le corresponde al presidente de la República, es un deber constitucional. Si se presentara la ausencia del mismo, el Congreso tiene el derecho y la obligación de sesionar de igual manera. A su vez, el presidente al momento de inaugurar las sesiones, debe dar cuenta del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
3. Extraordinarias: Son aquellas que sólo puede convocar el presidente (artículos 63, y 99 inciso 9), y siempre que el Congreso esté en receso y ante un grave interés de orden, progreso, emergencia que amerite tomar importantes decisiones. En ellas el Congreso no puede usar libremente sus funciones legislativas y parlamentarias, sino que se limita a tratar los temas puntuales por los que se convocó a dichas sesiones. Es decir que trabaja con “agenda cerrada”.
4. De prórroga: Son aquellas que puede convocar el Presidente o el Congreso. Son un apéndice del período ordinario y se desarrolla inmediatamente después de terminado éste. En ellas el Congreso se limita a terminar lo que quedó inconcluso en las ordinarias. En la realidad si al Congreso le quedó un tema pendiente convoca a extraordinarias. Durante estas, que no tienen un límite de tiempo establecido, el Congreso sigue ejerciendo la plenitud de sus funciones, al igual que durante el período ordinario.

La reforma de 1994 extendió el plazo de las sesiones ordinarias: Antes iban desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre y la razón era que antiguamente el transporte de todos los integrantes del Congreso a la Capital Federal era complicado y costoso.

Cada Cámara se autoconvoca el 1 de marzo, pero el presidente puede convocarlas para sesiones extraordinarias y es quien realiza la solemne inauguración del período ordinario.

1. **Quórum.**

Con este término se hace referencia a la cantidad mínima de miembros presentes que un cuerpo de naturaleza colegiada necesita para funcionar como tal. En este caso, la cantidad mínima de legisladores que deben estar presentes para que cada Cámara pueda reunirse en forma válida.

**Art. 64.- [CONTROL DE DESIGNACIONES.QUÓRUM].- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.**

REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS DOS CÁMARAS:

**“…Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, en cuanto a su validez…”:** Es el privilegio colectivo que tiene cada Cámara, de decidir sobre la validez o no de las elecciones, derechos y títulos de sus integrantes (Ejemplo: Si el título o diploma que presentó el diputado es válido o no, si se cumplen las formalidades exigidas para ocupar el cargo, etc.). No puede ser controlado por la Justicia Nacional y esto es así para defender al principio de división de poderes en un gobierno republicano.

QUÓRUM PARA SESIONAR: Es la cantidad mínima de legisladores que deben estar presentes para que cada Cámara pueda reunirse (sesionar) en forma.

Clases de quórum:

1. Normal: Esa cantidad mínima es la mayoría absoluta (es decir que alcanza con tener más de la mitad y no la mitad más uno). Ejemplo: Si la Cámara de Diputados cuenta con 281 miembros, más de la mitad es 141, es decir que para sesionar se necesita un mínimo de 141 diputados. En cambio si fuera la mitad más uno sería 142. En general se sesiona con este quórum aunque puede aumentarse. Si no puede sesionarse porque no se llegó al quorum hay medios coercitivos para lograr que los ausentes se presenten y así poder sesionar.
2. Agravado: Cuando se exige una cantidad mínima para sesionar mayor que el quórum normal (ejemplo: 2/3 miembros totales de cada Cámara)
3. **Simultaneidad.**

**Art. 65.- [SESIONES SIMULTÁNEAS].- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente.  
Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días, sin el consentimiento de la otra.**

Este artículo indica que, si bien las Cámaras se reúnen en forma separada una de la otra, las funciones de ambas están relacionadas y es por eso que funcionan a la vez (Ejemplo: para convertir un proyecto en ley se necesita la intervención de las dos cámaras). De todas formas hay casos excepcionales en donde se reúnen en forma conjunta (se la llama Asamblea Legislativa), para tratar temas especiales:

* Inauguración del período de sesiones ordinarias;
* Recibir el juramento del Presidente y vice;
* Escuchar el informe que el Presidente debe rendirles;
* Homenajear a jefes de Estados extranjeros;
* Elegir al remplazante del Presidente en caso de acefalía;
* Etc.

1. **Corrección, remoción y exclusión y renuncia de sus miembros.**

**Art. 66.- [REGLAMENTO. SANCIONES. RENUNCIAS].- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.**

Cada Cámara dicta su propio reglamento interno, el cual contiene las reglas de funcionamiento de cada Cámara, sus sesiones, debates y votaciones, el ingreso de sus miembros, etc. Además cuentan con el privilegio del poder disciplinario para con sus miembros:

* Corrección disciplinaria durante la labor parlamentaria: Es decir corregirles alguna conducta indebida (Ejemplo: Insultos, interrupciones, faltas de respeto). La sanción puede ir desde un llamado de atención, privarles la palabra en la sesión, suspenderlo o aplicarles una multa.
* Remoción: Se lo remueve del cargo cuando por problemas físicos o morales es imposible que continúe ejerciendo el cargo correctamente (Ejemplo: enfermedades físicas, problemas mentales que le impidan ejercer el cargo con aptitud e idoneidad o por tener una vida inmoral o escandalosa que lo hago indigno del cargo). Para algunos autores el tema de la inhabilidad física o mental no tiene que ser causa de sanción.
* Exclusión: Para todo esto se necesitan 2/3 de los votos (es decir de los presentes). Para aceptar la renuncia de un miembro, alcanza con la mayoría simple.

1. **Inmunidad de expresión y de arresto.**

Ambos son privilegios individuales con los que cuentan los legisladores, cuyo fin es proteger la función que cumplen como legisladores, permitiendo que ejerzan libremente sin ningún tipo de presión o amenaza.

**INMUNIDAD DE EXPRESIÓN**

**Art. 68.-[INMUNIDAD DE EXPRESIÓN] Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.**

La inmunidad de expresión significa que el legislador no va a poder ser acusado, procesado penalmente o molestado por las opiniones o cosas que diga durante el ejercicio de su función. Si su trabajo se viese condicionado por sus expresiones, no podría ejercerlo en total independencia. Entre las expresiones protegidas se incluyen aquellas hechas en sesiones de la Cámara, en reuniones para redactar un proyecto de ley, en informes o escritos, en publicaciones en la prensa sobre su opinión; al emitir su voto en la Cámara, etc. Por esos discursos y opiniones no cabe:

a) proceso judicial ni administrativo: pero si el ejercicio de la facultad disciplinaria de la propia Cámara para corregir por desorden de conducta

b) citación para comparecer en juicio: ni como parte, ni como testigo

c) situación que origine molestia al legislador: implica que ni el propio partido del legislador puede incomodarlo por opiniones impartidas en el ejercicio de su función

**INMUNIDAD DE ARRESTO**

**Art. 69.- [INMUNIDAD DE ARRESTO].- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.**

La inmunidad de arresto es la garantía que tienen los legisladores de que no serán arrestados o detenidos (por personal policial o por orden de un juez) sin importar cual sea el delito del que lo acusen. Existe una única excepción a esta inmunidad: no regirá esta protección a la libertad física del legislador cuando éste sea detenido en el mismo momento en que esta cometiendo el delito y que sea doloso y grave (y no un delito cometido por negligencia, imprudencia o impericia). También abarca el momento de la tentativa, y después de cometido el delito si se descubre al legislador cuando huye o se oculta, o con los instrumentos, armas o efectos que permiten presumir la comisión del delito inmediatamente después de consumado. Si se llega al arresto, la autoridad que lo detuvo debe comunicárselo a la Cámara a la que corresponda el arrestado, para que ella decida si le saca la inmunidad o no.

La norma extiende el privilegio en el tiempo desde la elección (y no desde la incorporación como corre para la inmunidad de declaración) hasta el cese. Concluido el período de mandato, el privilegio de la inmunidad de arresto termina, a diferencia de la inmunidad de expresión, que es vitalicio.

La inmunidad de arresto no evita el inicio de acciones penales contra el legislador, siempre que no se afecte su libertad física, y salvo que se proceda a su desafuero.

1. **Desafuero.**

**Art. 70.- [DESAFUERO].- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.**

El desafuero significa suspender en sus funciones al legislador acusado, para ponerlo a disposición del juez que deba juzgarlo por el delito del que se lo acusa. El desafuero no es una sanción: Se le aplica al legislador para que el juez pueda privarlo de su libertad y sea tratado como una persona normal: que vaya a declarar, que pueda ser arrestado, etc. Se realiza a través de una serie de pasos:

a) El juez, a través de un oficio le pide a la Cámara correspondiente el desafuero del legislador en cuestión y junto con el oficio manda también un informe (expediente o sumario sobre el caso)

b) La Cámara analiza el informe en juicio público, donde el acusado puede intervenir, presentar pruebas, etc, y va a decidir sobre la gravedad o no del hecho del que acusan a su integrante.

c) Con el voto de 2/3 partes de los miembros de la Cámara puede ordenar el desafuero, caso contrario el juez no podrá dictar sentencia.

La puesta del legislador a disposición del juez competente procura que solo el juez requirente, cuyo sumario fue examinado por la Cámara, pueda llevar adelante el proceso judicial. Una vez que la Cámara ha dispuesto el desafuero de un legislador, el privilegio queda allanado para la causa penal que da origen a la medida. Se necesita un desafuero para cada proceso.

1. **Interpelación de Ministros.**

**Art. 71.- [INTERPELACIÓN A MINISTROS].- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.**

“interpelar” es la facultad de las Cámaras de hacer ir a sus salas a los ministros del Poder Ejecutivo, para que éstos les den explicaciones de los que ellas les pidan, o les rindan informes.

La interpelación debe estar motivada y justificada. Estos ministros deben presentarse personalmente (no pueden mandar un escrito en reemplazo) y su negativa puede dar lugar al pedido de juicio político.

Los informes tratan sobre la actividad que desarrolla en Poder Ejecutivo y que pueden interesar al Congreso.

1. **Incompatibilidades.**

**Art. 72.- [INCOMPATIBILIDADES].- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.**

Incompatibilidad con el empleo del Poder Ejecutivo: A través de este artículo se prohíbe a los senadores y diputados ser empleados (o recibir algún tipo de comisión) del Poder Ejecutivo, salvo que las Cámaras a la que pertenece y lo acepten expresamente.

Su fundamento es asegurar la división de poderes y que el legislador realice mejor su trabajo al dedicarse exclusivamente al mismo.

Aunque el artículo habla del Poder Ejecutivo, consideramos que se extiende también al Poder Judicial.

Entonces, con acuerdo de la Cámara es posible acceder a estos empleos. También pueden acceder a los empleos de escala, es decir, a aquellos empleos de carrera como maestro, profesor, etc.

1. **El Juicio Político: Funcionarios pasibles del mismo, causas, función de cada cámara, quórum, efectos.**

**Art. 53.- [JUICIO POLÍTICO].- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.**

El Juicio político es un sistema de control que ejerce el Congreso, respetando así el principio republicano de división de poderes. Su finalidad no es castigar al funcionario sino simplemente separarlo del cargo, para que quede libre de privilegios para luego, si correspondiere, someterlo a proceso.

Este tipo de juicio sólo se hace al presidente de la Nación, el vice, el jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte Suprema.

Para realizarlo se necesita que 2/3 partes de los miembros presentes (en la sesión en donde se decide hacerle juicio político a tal funcionario) voten a favor de dicho juicio. La Cámara de Diputados es la que acusa al funcionario ante el Senado y aporta pruebas hasta el dictado de la sentencia. Por lo tanto la cámara de Senadores actúa como fiscal frente a este proceso y la cámara de Diputados como acusador.

Las causas que permiten indicar juicio político son:

• Mal desempeño de las funciones: Realizar su trabajo sin idoneidad, con ineptitud. Hasta por enfermedad el funcionario puede realizar mal sus tareas o en forma ineficaz y ser entonces pasible de juicio político.

• Cometer un delito en el ejercicio de sus funciones: Por ejemplo cohecho o prevaricato (para jueces) o incumplimiento de los deberes de funcionario publico.

• Por crímenes comunes: Se lo llama así porque son aquellos que comete cualquier persona (y no los privatarios de funcionarios públicos, como el prevaricato)

**Art. 60.- [JUICIO POLÍTICO: EFECTOS DEL FALLO].- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.**

El efecto principal del fallo en caso de que el acusado sea condenado, es el de sacarlo, removerlo del cargo publico que ocupa. El efecto secundario puede ser inhabilitarlo para ocupar cargos públicos.

Además, si el motivo de este juicio político fue que el acusado cometió algún delito, luego de destituirlo será sometido a los tribunales ordinarios, como una persona común.

1. **Comisiones parlamentarias.**

**Art. 79.- [DELEGACIÓN EN COMISIONES].- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario.**

Las comisiones internas o legislativas, son nombradas por cada cámara y sus integrantes pertenecen a ella. Su fin es alivianar el trabajo de las Cámaras. Sus objetivos son:

o Asesorar al cuerpo en materias especializadas, o sea en temas especiales.

o Fiscalizar funciones administrativas de la rama parlamentaria.

o Investigar hechos y circunstancias que el cuerpo ha considerado para adoptar medidas o dictar resoluciones.

Los detalles sobre su funcionamiento están en el reglamento interno de cada Cámara.

Cada Cámara puede aprobar el proyecto en forma general y dejarle la tarea de la aprobación en particular, a sus comisiones internas o legislativas. También pueden retomar esa facultad que han delegado, pero no pueden delegar en estas comisiones la aprobación general del proyecto.

Se necesita del voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de:

* La cámara, para delegar o para dejar sin efecto dicha delegación.
* La comisión interna, para hacer la aprobación particular.

Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario: esto significa que luego de ser aprobado el proyecto en su cámara, va a pasar a la otra para su sanción definitiva o al Poder ejecutivo para su promulgación.

1. **Atribuciones del órgano legislativo.**

**Art. 75.- [ENUMERACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES].- Corresponde al Congreso:**

**Inc.1.- [ADUANAS. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN].- Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.**

Este inciso establece dos funciones importantes del Congreso:

1. Dictar leyes sobre aduanas: Recordemos (art. 9) que en nuestro país sólo hay aduanas exteriores o nacionales (entre los países limítrofes), pero nunca interiores (es decir entre provincias).
2. Dictar leyes sobre importación y exportación: Recordemos (art. 4) que el Congreso es el que crea en forma exclusiva estos impuestos indirectos externos.

**Inc.2.- [CONTRIBUCIONES INDIRECTAS Y DIRECTAS].- Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.**

**Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.**

**La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.**

**La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.**

**No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.**

**Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.**

*Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables:* Se habla sobre las contribuciones indirectas, que son facultad concurrente del Congreso y de las provincias, mientras que las contribuciones directas son facultad de las provincias y excepcionalmente del Congreso. Entonces, las directas por tiempo limitado e indirectas (salvo las contribuciones que tengan asignación específica) son coparticipables: es decir que pasan a formar parte del fondo de participación tributaria que será repartido entre la Nación y las provincias.

*La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional:*

La distribución de lo recaudado por impuestos entre Nación, Provincias y Ciudad de Buenos Aires se realiza así:

Debe hacerse en reparto objetivo en proporción con:

- Los servicios y funciones que presta cada uno.

- Con lo que recaudan.

- Por la cantidad de población que tienen (a mayor recaudación o cantidad de habitantes, más será lo que destinado a ella) en forma objetiva y con igualdad de oportunidades en todo el país. Recordemos que el Gobierno Federal le ha sacado a las provincias el derecho a recaudar los impuestos directos. A cambio le da un porcentaje a cada una del producto de esos impuestos.

*“Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”:* La coparticipación entre el Estado y las provincias se lleva a cabo a través de una ley-convenio hecha teniendo en cuenta los acuerdos entre el Estado y las provincias. Esta ley indica cómo se van a repartir los fondos. En general las provincias con más desarrollo atienden sus presupuestos fiscales en un 50% con recursos propios y el resto provienen del Tesoro Nacional, mientras que para las otras provincias el porcentaje es 10% y 90% aproximadamente.

*“La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias”:* La ley –convenio tiene al senado como cámara de origen (esto es para asegurarle a las provincias que van a tener representación igualitaria en la confección de esta ley) y se necesita para su aprobación la mayoría absoluta de cada Cámara. No puede ser reglada ni modificada (salvo con el acuerdo de las provincias) y por último debe ser aprobada por todas las provincias.

*“No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”:*

* Competencia: Ámbito de validez jurídica que habita a crear o a aplicar el derecho.
* Servicios: Actividad de bien público.
* Funciones: Rol previsto dentro de una organización.

Este párrafo nos indica que cuando el Estado o las provincias entre sí, transfieran o reasignen competencias, funciones o servicios, la provincia que los recibe debe tener recursos suficientes para ello.

*“Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición”:* Este órgano de control es determinado por ley y fiscaliza la ejecución de las previsiones de este inciso 2 (ejemplo: DGI).

**Inc.3.- [RECURSOS COPARTICIPABLES].- Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.**

Esto surge porque antes de la reforma, el Congreso podía crear unilateralmente sistemas de coparticipación paralelos, beneficiando a determinadas provincias y perjudicando de ese modo a otras (ya que sacaban plata de la masa coparticipable sin necesidad de tener el consentimiento de las demás provincias).

Hoy para hacer asignaciones específicas se debe modificar la ley convenio para lo cual se necesita la aprobación de las provincias (inc. 2).

**Inc.4.- [EMPRÉSTITOS].- Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.**

El Congreso puede contraer empréstitos para urgencias o para la realización de obras costosas pero importantes para el país (como construir una autopista). En la práctica el que se ocupa de esto es el Poder Ejecutivo y no sólo para casos excepcionales sino para temas comunes, como el pago de sueldos.

**Inc.5.- [TIERRAS PÚBLICAS].- Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.**

El Congreso puede decidir con respecto a las tierras nacionales: Como y para qué usarlas; Venderlas o alquilarlas.

**Inc.6.- [BANCO FEDERAL.EMISIÓN DE MONEDA. BANCOS NACIOANLES].- Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.**

El Congreso deberá crear un Banco Federal, que emitirá moneda y cuyas reglamentaciones y control de emisión se harán por ley del Congreso. El banco federal crea la moneda de curso legal válida como medio de pago, según el sistema monetario impuesto por la Constitución Nacional, pero el tema del cambio en moneda extranjera es una cuestión que dispone el Congreso libremente. Además del Banco federal el Congreso establece otros bancos nacionales, pero también pueden existir bancos privados (considerados empresas financieras o comerciales) o provinciales (creados por las provincias pero sin facultad de emitir billetes sin previa autorización del Congreso nacional).

**Inc.7. [DEUDA INTERNA Y EXTERNA].- Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.**

Este inciso nos dice que el Congreso es el que se encarga de pagar estas deudas y de negociar todo lo relativo a ellas (aunque en la práctica es el Poder Ejecutivo el que hace la negociación, siendo el Congreso quien se encarga de aprobarla o no).

Deuda interna: Es la deuda que contrae el país con acreedores dentro del país.

Deuda externa: Es la deuda que contrae el país con acreedores del extranjero. Como suele ser tan grande esta deuda externa, en general sólo se llegan a pagar en término los intereses y así la deuda sigue aumentando día a día.

**Inc.8.- [PRESUPUESTO].- Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.**

Ley de presupuesto anual de gastos y recursos: la atribución más importante del Congreso es dictar esta Ley de Presupuesto de la Nación, la cual va a decir cuanto está autorizada a gastar y recaudar en el año. El presupuesto es un cálculo previo y exacto que fija el poder legislativo en base a los ingresos y egresos que va a realizar el país durante el próximo año.

**Inc.9.- [SUBSIDIOS A LAS PROVINCIAS].- Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.**

**Inc.10.- [NAVEGACIÓN FLUVIAL; PUERTOS; ADUANAS].- Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.**

**Inc.11.- [EMISIÓN DE MONEDA.PESOS Y MEDIDAS].- Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.**

**Inc.12.- [CÓDIGOS Y LEYES GENERALES].- Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.**

**Inc.13.- [COMERCIO EXTERIOR E INTERPROVINCIAL].- Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.**

**Inc.14.- [CORREOS].- Arreglar y establecer los correos generales de la Nación.**

**Inc.15.- [LÍMITES TERRITORIALES DE LA NACIÓN Y DE LAS PROVINCIAS].- Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.**

**Inc.16.- [FRONTERAS].- Proveer a la seguridad de las fronteras**

**Inc.17.- [PUEBLOS INDÍGENAS].- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.**

**Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.**

**Inc.18.- [PROSPERIDAD].- Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.**

**Inc.19.- [DESARROLLO HUMANO, CRECIMIENTO.EDUCACIÓN. CULTURA].- Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.**

**Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.**

**Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.**

**Inc.20.- [TRIBUNALES, EMPLEOS, PENSIONES, HONORES Y AMNISTÍAS].- Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales.**

**Inc.21.- [RENUNCIA DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA].- Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.**

**Inc.22.- [TRATADOS Y CONCORDATOS. TRATADOS CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL].- Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.**

**La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.**

**Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.**

**Inc.23.- [IGUALIDAD DE OPORTUNIDADES.PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DE LA MADRE].- Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.**

**Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.**

**Inc.24.- [TRATADOS DE INTEGRACIÓN].- Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.**

**La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.**

**La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.**

**Inc.25.- [GUERRA Y PAZ].- Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.**

**Inc.26.- [REPERSALIAS Y PRESAS].- Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas.**

**Inc.27.- [PODERES MILITARES].- Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno.**

**Inc.28.- [ENTRADA Y SALIDA DE FUERZAS ARMADAS].- Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él.**

**Inc.29.- [DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO].- Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.**

**Inc.30.- [LEGISLACIÓN EXCLUSIVA EN CAPITAL FEDERAL. ESTABLECIMIENTOS DE UTILIDAD NACIONAL].- Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.**

**Inc.31.- [INTERVENCIÓN FEDERAL].- Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires.**

**Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo.**

**Inc.32.- [FACULTADES IMPLÍCIAS RELACIONADAS CON DICTAR LEYES Y REGLAMENTOS].- Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.**

1. **Formación y sanción de las leyes. Procedimiento.**

**Art. 77.-[INICIATIVA].-Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución.**

**Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.**

-Cámara iniciadora: Es aquella a la que le presentaron el proyecto de ley y se encarga de iniciar su tratamiento y aprobarlo. Esta aprobación se llama “media sanción” ya que, para que sea sanción completa, necesita la aprobación de la revisora también.

-Cámara revisora: Es aquella que recibe el proyecto de ley que viene aprobado desde la cámara de origen.

Ambas cámaras pueden ser cámara iniciadora, salvo para los actos excepcionales establecidos en la Constitución Nacional, en donde se establecen que ciertas leyes deben iniciarse puntualmente antes el Senado o Diputados:

Deben iniciarse en la Cámara de Diputados:

* Proyectos de leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas (Art. 52)
* Proyectos de leyes presentados por los ciudadanos a través de la iniciativa popular (Art. 39)
* Proyectos de leyes que el Congreso somete a consulta popular (Art.40)

Deben iniciarse en la Cámara de Senadores:

* La ley de coparticipación federal: las leyes-convenio entre el Estado y las provincias en materia impositiva.
* Leyes con contenido demográfico: tendientes a lograr el doblamiento del país o tendientes a lograr el crecimiento y desarrollo equilibrado de todo el país (Art. 75 ins.19)
* Pueden presentar los proyectos de ley a la cámara de origen los miembros del Poder Legislativo; del Poder Ejecutivo; los ciudadanos en forma colectiva a través de la iniciativa popular.

**Art. 78.- [TRÁMITE NORMAL].- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.**

Aprobación Expresa:

Una vez que el proyecto fue aprobado por la cámara de origen (es decir que tiene media sanción), pasa a la Cámara revisora para ser estudiado por ella. Si es aprobado también, se dice que esta sancionado y va a pasar al Poder Ejecutivo, en donde el Presidente va a estudiarlo: puede observarlo, aprobarlo, convirtiéndolo en ley por medio de un decreto (Art.99 ins.3). De esta forma promulga la ley.

Luego de la aprobación (expresa o tacita) deben publicarse dicha ley según el Art.2 del Código Civil. Si la ley no se publica sigue existiendo pero se vera afectada su obligatoriedad.

1. **El veto: Concepto y efectos.**

**Art. 80.- [APROBACIÓN TÁCITA. VETO PARCIAL].- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.**

Antes de la reforma de 1994 era inconstitucional promulgar la parte vetada del proyecto: si el Poder Ejecutivo vetaba (prohibía) parcialmente un proyecto sancionado por el Congreso, todo el proyecto volvía a éste para que estudiara las observaciones hechas por aquel. En este caso se toma la ley como algo indivisible. A partir de la reforma de 1994 aunque se rescata el mismo principio surge una excepción ya que podrán aprobarse sus partes no desechadas cuando:

• Tengan autonomía normativa, es decir que las partes que se convierten en ley osea que son aprobadas no dependen o estén sometidas a la vigencia de las vetadas osea las desechadas.

• Siempre que su aprobación parcial no altere la unidad del proyecto aprobado por el Congreso es decir que, al aprobar una parte del proyecto no se dañe su unidad ni lo que quería reflejar su autor, porque transformaría en inútil la actividad de revisión del congreso. De no tener en cuenta este punto le estaríamos dando al Poder Ejecutivo un medio para que legisle, una que puede corregir aquellos proyectos que elabora el Congreso sin necesidad de que luego esas correcciones sean aprobadas por este.

**Art. 81.- [RECHAZO TOTAL. ADICIONES. CORRECCIONES].- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.**

Los proyectos pueden ser:

* Aprobados por ambas cámaras (la ley queda sancionada).
* Desechado totalmente por alguna de las cámaras y no puede repetirse hasta el próximo periodo de sesiones ordinarias.
* Desechado parcialmente, es decir aprobarlo pero haciéndole modificaciones o acciones que deben ser votadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de estos.

Cuando una de las Cámaras hace modificaciones respecto de un proyecto de ley, este hace el siguiente recorrido: Cámara de origen, cámara revisora y vuelta a la cámara de origen, la cual recibe el proyecto de ley enmendado por la revisora y puede:

* Aprobarlo con las adiciones o correcciones introducidas: alcanza la mayoría absoluta de los miembros presentes de dicha cámara (la de origen).
* Insistir en la redacción originaria: es decir como ella se la mando a la revisora, sin enmiendas, y para ellos se necesita la mayoría absoluta de los presentes, si la revisora voto esas correcciones por mayoría absoluta pero se exige un poco mas (2/3 de los presentes de la cámara de origen) si la revisora las voto por 2/3.

Si no se logran esos votos, el proyecto pasa con las correcciones al Poder Ejecutivo.

En otras palabras:

1. Si las dos Cámaras aprueban los textos del proyecto (una el original y la otra el modificado) con mayoría absoluta, predomina el texto original (sancionado por la cámara de origen).
2. Si una Cámara aprobó el proyecto con mayoría y la otra con el voto de las 2/3 partes, predomina ésta última.
3. Si las dos aprueban el proyecto con 2/3 partes, predomina el de la Cámara de origen, es decir el original.

La cámara de origen no puede agregar nuevas adiciones o correcciones solo puede pronunciarse sobre las que hizo la cámara revisora.

Este artículo favorece a la cámara de origen y achica el número de reenvíos entre las Cámaras por adiciones o correcciones, haciendo más ágil la labor legislativa.

**Art. 83.- [VETO DEL PODER EJECUTIVO: CONSECUENCIAS].- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.**

Veto Presidencial: Es el que se produce cuando el Poder Ejecutivo desecha el proyecto sancionado por ambas Cámaras, entero o en parte. En este caso el proyecto vuelve al congreso para ser tratado nuevamente.

Primero pasa a la cámara de origen, si rechaza lo observado por el Presidente, con mayoría de 2/3 de votos.

Luego pasa a la cámara revisora, y si también rechaza lo observado con 2/3 de votos, queda sancionado el proyecto que veto el Presidente.

Pasa al Poder Ejecutivo para su aprobación, en este caso el Poder Ejecutivo está obligado a probarla; no puede vetarla de nuevo.

Ambas cámaras solo podrán vetar por si o por no respecto a las objeciones del Poder Ejecutivo sobre el proyecto y deberán publicarse en la prensa dichas objeciones, las votaciones y sus fundamentos. Si las cámaras no están de acuerdo sobre las objeciones del Poder ejecutivo el proyecto recién pobra repetirse en las sesiones del próximo año.

Antes de l reforma el Presidente no podía promulgar la parte no vetada del proyecto. Hoy puede hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3) que luego el Congreso revisará y controlará. Esto significa que lo promulgado parcialmente produce efectos de ley desde su promulgación pero sometido a la condición resolutoria de no ser aprobado por el Congreso.

1. **Iniciativa popular. Articulo 39 de la Constitución Nacional.**

**Art. 39.- [INCIATIVA POPULAR PARA PROYECTOS LEGISLATIVOS].- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.   
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.**

**No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.**

* Formas semidirectas de democracia: Son aquellas que le permiten al pueblo (que es el soberano y que delega ese poder en sus representantes) participar un poco en la toma de decisiones del Estado, a través de la presentación de un proyecto de ley.

Su objetivo es lograr que los gobernadores puedan saber qué opina el pueblo, de los deberes que ellos le imponen a éste. Básicamente las formas de democracia indirecta son dos: Iniciativa popular (artículo 39) y consulta popular (artículo 40).

A través de la **iniciativa popular** un ciudadano presenta un proyecto de ley sobre un tema específico y el Congreso tiene un plazo de un año para tratarlo. El Congreso dicta la ley que reglamenta este derecho de iniciativa, el cual tiene algunos **límites:**

1. No se puede exigir que el número de firmas que deba acompañar al proyecto sea mayor al 3% del padrón electoral (es decir de la gente que está en las litas para ir a votar). Esto es para evitar que al exigir mucha gente se torne imposible lograr ejercer derecho.
2. No puede someterse a iniciativa popular determinados temas: la reforma constitucional; los tratados internacionales; tributos y presupuestos; todo lo relativo a lo penal (delitos, penas, etc.).
3. **Consulta popular vinculante y no vinculante. Artículo 40 de la Constitución Nacional.**

**Art. 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.**

**El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.**

**El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.**

En este artículo se trata la forma semidirecta de democracia llamada consulta popular, que consiste en preguntarle al pueblo qué opina de determinado proyecto de ley. Esta consulta puede ser de dos clases:

* Consulta popular vinculante (o decisoria): La Cámara de Diputados somete un proyecto de ley a consulta popular y es obligatorio votar (por si o por no). Se excluye al poder ejecutivo tanto de la iniciativa de la medida como de la posibilidad de ejercer su facultad de veto respecto de la ley que convoca a la consulta y de la ley que haya recibido el beneplácito popular. Si la consulta dio a favor del proyecto, éste se convierte en ley y se promulga en forma automática.
* Consulta popular no vinculante (o consultiva): El Congreso o el Presidente someten un proyecto a consulta y en este caso el voto no es obligatorio. El resultado de la consulta puede ser dejado de lado por el Estado (se usa para tener una noción de lo que el pueblo opina).El carácter no vinculatorio de la consulta implica que la decisión del electorado no es obligatoria y pueden, los órganos estatales, proceder en forma contraria al resultado de dicha competencia.

Se deriva al Congreso de la Nación la facultad de reglamentar, mediante una ley dictada con la mayoría de aprobación, el procedimiento, la oportunidad y las materias que pueden ser objeto de estas dos formas de participación popular.

**Plebiscito:** Es similar a una consulta popular, pero sobre un determinado acto político y no sobre una norma jurídica, como por ejemplo un plebiscito sobre si se debe ratificar o no un determinado tratado.

1. **Defensor del Pueblo. Auditoría General de la Nación.**

**Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.**

**El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.**

**La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.**

Defensor del pueblo u Ombudsman (que significa persona que da trámite): Es una institución creada por la reforma de 1994 y sus características son:

* Adquiere rango constitucional con la reforma de 1994 (pero ya existía a través de la ley 24284).
* Tiene autonomía funcional (es decir que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, no integra ningún poder).
* Tiene los mismos privilegios e inmunidades que los legisladores.
* **Función que cumple:**

Defiende a la sociedad y a los ciudadanos de las amenazas o lesiones, que la administración pública o empresas privadas que prestan servicios públicos puedan causarles por actos (como abusos o excesos de poder) u omisiones (ineficacias) arbitrarias, en los derechos y garantías amparadas en la Constitución y en los tratados internacionales. Es el “Abogado del pueblo”.

Controla y evita la corrupción logrando que el pueblo tenga participación activa en defender sus derechos.

Forma de actuar: Recibe denuncias y las investiga; le avisa a la sociedad en forma pública y masiva cualquier clase de irregularidad que haya detectado; etc. Su actividad no se interrumpe durante el receso del Congreso.

Duración: Su mandato dura 5 años y puede ser reelegido una sola vez.

Requisitos: Ser argentino (nativo o por opción); Tener como mínimo 30 años; No ejercer cargos electivos, políticos o judiciales; No realizar actividades políticas o sindicales.

Legitimación procesal: Esta autorizado para estar en juicio y promover acciones con el fin de cumplir sus funciones. También, puede iniciar la acción de amparo para defender los derechos del medio ambiente (art. 41) y del consumidor (art. 42).

Organización: El Congreso dicta una ley especial donde resulta la organización y actividad del Defensor, teniendo en cuenta que es fundamental asegurar la libertad en sus actos para que su actividad sea objetiva e imparcial.

Designación y remoción: Es nombrado o removido por el Congreso (pero no recibe órdenes de él) y se necesita para ello el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de cada Cámara. Aunque como representa al pueblo creemos que tendría que elegirlo él por voto directo.

**AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN**

**Art. 85.- [AMBITO DEL ORGANISMO. AUTONOMÍA FUNCIONAL. PRESIDENTE: FUNCIONES].- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.**

**El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.**

**Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.**

**Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.**

**Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.**

La Auditoria General de la Nación es una institución creada por la reforma de 1994 y sus características son las mismas que el Defensor del pueblo:

- Adquiere rango constitucional con la reforma de 1994, pero igual ya existía a través de la ley 24.156

- Tiene autonomía funcional, es decir que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, tampoco integra ningún poder.

Esta integrada por 7 auditores que deben ser argentinos y tener titulo universitario de abogado o contador: 3 son elegidos por la cámara de Diputados, 3 por la de Senadores y el 7mo será el presidente y será elegido por el partido político opositor que tenga mas legisladores en el congreso (para lograr mayor transparencia dentro del organismo)

La duración en el cargo es de 8 años y puede ser reelecto. Y debe desarrollar sus actividades en todo el sector público nacional.

Su función es:

o Controlar el sector público nacional en lo relacionado con su aspecto económico, financiero y operativo.

o Controlar la actividad de la administración pública: su legalidad, gestión, etc.

o Intervenir en la aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

o Asesorar a través de informes al Poder Legislativo sobre el control en la actividad que desempeña la administración publica.

1. **Organización del órgano legislativo en la provincia de Buenos Aires.**

Constitución de la Provincia de Buenos Aires

**Artículo 68.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por los electores, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia.**

**Artículo 69.- Esta Cámara se compondrá de ochenta y cuatro diputados. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo a cada censo nacional o provincial, debidamente aprobado, el número de habitantes que ha de representar cada diputado.**

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires bajo la lógica unicameral de 60 (sesenta) diputados, elegidos por voto directo no acumulativo según los artículos 68° y 69º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Cada diputado dura cuatro años en sus funciones, y la Legislatura se renueva por mitades cada 2 (dos) años.

UNIDAD N° 10: El órgano Ejecutivo. La Organización Administrativa.

El órgano ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con la legislativa y la judicial). Este consiste en dictar y hacer cumplir las leyes. El poder ejecutivo es el órgano encargado también de llevar a cabo la administración general del país, este es un órgano unipersonal (compuesto por una persona) basándose en el Art. 87 de la CN.

1. **El Presidente de la Nación:**

**Art. 87.- [PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA].- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina".**

Este artículo nos indica que nuestra forma de gobierno es de tipo presidencialista, ya que hay un solo integrante llamado “Presidente de la Nación Argentina”.

Forma de gobierno: Es la forma en que se estructura el poder político estatal de un país. Las clases de formas de gobierno básicamente son:

1. Presidencialismo: Es la forma de gobierno aplicada en América en general, y sus características son:

* El poder Ejecutivo es unipersonal: Lo ejerce el Presidente de la República quien es el jefe de Estado y de Gobierno. Ni los ministros (que son asistentes del presidente), ni el vicepresidente (que actúa sólo en caso de acefalía del presidente) integran este poder.
* El Presidente y el Vice son elegidos directamente por el pueblo a través del voto universal (en cambio a los ministros los elige y remueve el presidente).
* El presidente, vice, y ministros no pueden ser removidos de su mandato salvo que sean sometidos a juicio político.

1. Parlamentarismo: Es la forma de gobierno aplicada en Europa en general y sus características son:

* El Poder Ejecutivo es colegiado:
  + Por un lado está el Presidente, monarca o rey como jefe de Estado. Esta figura es de tipo simbólico: actúa como árbitro y tiene derecho a estar informado, a aconsejar al jefe de gobierno, etc.
  + Por el otro está el Primer Ministro como jefe de gobierno. Esta figura tiene un gran poder: Preside al consejo de ministros y le informa al jefe de Estado la voluntad del pueblo.
* Gobierno: Está compuesto por el Primer Ministro y el Consejo de Ministros y es elegido por el Jefe de Estado (Presidente, rey o monarca) y por el Parlamento. Si el parlamento le retira su confianza (a través de la aprobación de la moción de censura) se interrumpe su mandato.
* Parlamento: Es elegido por el voto del pueblo. Puede ser disuelto. Puede hacer responsable al Consejo de los actos del gobierno y recordemos que no pueden gobernar sin la confianza del parlamento.

Podemos entonces ver que en el Parlamentarismo el Poder Ejecutivo tiene una estructura dualista:

* + Por un lado está el Jefe de Estado quien permanece inamovible (de por vida, si es rey o por un período determinado, si es presidente) aunque caiga el Primer Ministro y el Consejo de Ministros;
  + Por el otro está el Jefe de Gobierno (Primer Ministro) y el Consejo de Ministros, responsable frente al Parlamento.
  1. **Condiciones para ser Presidente.**

**Art. 89.- [REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE].- Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.**

La reforma de 1994 suprime un requisito que era exigido para ser elegido presidente o vice: El pertenecer a la religión católica. Antes esto era imprescindible, porque el Presidente era el que se encargaba de ejercer el Patronato, pero en 1996 Argentina firma un concordato con la Santa Sede por el cual suprime dicho ejercicio, haciendo que aquél requisito quede infundado. Hoy ya no importa la religión a la que pertenece el candidato y su fundamento es que este requisito va en contra de 2 principios: El de libertad de cultos y el de igualdad.

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE:

* Nacionalidad: Ser argentino nativo (es decir nacer en Argentina) o hijo de argentinos nativos. El objetivo de esto último fue permitirle a los hijos de argentinos emigrados durante la época de Rosas aspirar a los cargos.
* Tener 30 años.
* Ciudadanía: Mínimo haber sido 6 años ciudadano de la Nación.
* Tener una renta anual de $2000 o entrada equivalente.
  1. **Duración del cargo, Reelegibilidad.**

**Art. 90.- [DURACIÓN DEL MANDATO. REELECCIÓN].- El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.**

Este artículo fue modificado por la reforma de 1994 en cuanto a dos temas:

1. Se reduce el período del mandato de Presidente y Vice de 6 a 4 años (art. 91).
2. Se acepta la relección: Al terminar su mandato de 4 años el Presidente o Vice pueden ser reelectos. También puede ser elegido el Presidente como vice o el vice como Presidente. Luego de este período, deben dejar pasar un período de 4 años para volver a postularse.

**Art. 91.- [CESE DEL MANDATO].- El presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.**

Improrrogabilidad: Este artículo nos está indicando que bajo ningún punto de vista el período de cuatro años puede prorrogarse. Su finalidad es que se cumpla con el tiempo que el pueblo quiso para que sus representantes estén en el poder: evitando que con diferentes maniobras se queden en el gobierno los mismos individuos sin que puedan ingresar nuevos candidatos. Esta prohibición se aplica también al mandato de 4 años del vice.

* 1. **Retribución y juramento.**

**Art. 92.- [RETRIBUCIÓN. INCOMPATIBILIDADES].- El presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.**

Este artículo trata dos temas de suma importancia respecto al Presidente y del Vicepresidente:

1. Tienen un sueldo: Fijado por una ley del Congreso y pagado por el Tesoro Nacional que no puede ser alterado. Esto es así para evitar que el Congreso amenace al Presidente con su reducción. De todas formas en épocas de inflación el sueldo nominal puede modificarse a través de un reajuste periódico. Es decir que no puede ser alterado pero sí actualizado para mantener su valor real ante la devaluación de la moneda.
2. No pueden tener otro empleo (sea nacional, provincial o de tipo privado) aunque no sea remunerado. Esto es así porque se requiere que ellos pongan toda su dedicación en tan altos e importantes cargos para todo el país.

**Art. 93.- [JURAMENTO: FÓRMULA].- Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".**

Juramento del Presidente y Vice: Este artículo establece la fórmula del juramento que tienen que decir ellos al asumir a sus cargos. Es una fórmula ética cuyo fin es lograr el buen desempeño en el cargo de quien lo presta. El juramento es un requisito indispensable para que el título tenga validez. Antes de la reforma ellos debían jurar: “Por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios”, pero ahora se suprimió la fórmula religiosa y sólo se hace mención a que, quien preste el juramento, debe hacerlo “respetando sus creencias religiosas”.

Aunque en nuestra cultura, crudamente materialista, el juramento parezca un recaudo anacrónico y vacío de sentido, tiene un significado trascendental. Significa poner a Dios por testigo de la rectitud y honradez de las promesas que se formulan y en depositario de la eventual condena y reproche si no se las cumple. Hasta el siglo pasado el perjurio era un crimen grave, porque implicaba tomar el nombre de Dios en vano.

* 1. **Acefalía.**

**Art. 88.- [ACEFALÍA].- En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo.**

Este artículo trata un tema importante: la acefalía (latín: falta de cabeza) del Poder Ejecutivo, es decir la ausencia de su titular (Presidente) o suplente (Vice).

La ley 20972 de Acefalía nos indica que hay dos clases de ésta:

* Parcial: Cuando falta el Presidente. En este caso es reemplazado por el vice, quien asume la función, pero no el cargo. El vicepresidente, en tanto no ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo, no tiene funciones propias en éste. Es un funcionario de reserva, cuya principal misión es reemplazar al presidente en caso de vacancia transitoria o definitiva de éste.
* Total: Es conocida como acefalía de la República o acefalía del Poder Ejecutivo. Y se produce cuando faltan el Presidente y el Vice. En este caso, es el Congreso quien decide qué funcionario público lo reemplazará, ya que representa la voluntad de las provincias y del pueblo.

Según el tiempo de duración, puede ser:

* Transitoria: Por viaje, enfermedad o inhabilidad. El vice va a asumir sólo la función del Presidente hasta que termine esa causal y éste vuelva. Esto significa que nunca va a dejar de ser vice.
* Definitiva o permanente: Por muerte, destitución, inhabilidad permanente o renuncia. El vice va a asumir también el cargo de Presidente (para lo cual tendrá que jurar como presidente y dejar vacante el puesto de vice) hasta que elijan uno nuevo.

La presidencia de De la Rúa es un caso de acefalía permanente total: El vice renunció y el presidente hizo lo mismo un año después.

En la primera presidencia de Menem hubo desde 1991 vacancia permanente de la vicepresidencia.

Si el Vice no puede remplazar al presidente, la Ley 20972 da una lista de sucesores:

* Transitoria: Presidente provisorio del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Corte Suprema, hasta que vuelva el Presidente.
* Definitiva: Presidente provisorio del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Corte Suprema, hasta que el Congreso reunido en Asamblea Legislativa elija (por mayoría absoluta de los presentes) al remplazante, que debe ser diputado, senador o gobernador.
  1. **Residencia.**

La [Quinta Presidencial de Olivos](http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_Presidencial_de_Olivos) es actualmente la residencia oficial del Presidente de la Nación, a la que mientras permanezca en el cargo, tiene derecho al uso de sus instalaciones. También dispone de una residencia de verano en la localidad de [Chapadmalal](http://es.wikipedia.org/wiki/Chapadmalal). Mientras tanto, la sede del gobierno es la [Casa Rosada](http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Rosada).

* 1. **Prerrogativas.**
  2. **Responsabilidad.**

El Presidente de la Nación Argentina es el jefe de Estado, jefe de Gobierno, responsable político de la administración general del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina.1 El presidente encabeza el poder ejecutivo del gobierno argentino y es elegido junto con el vicepresidente en una misma fórmula.

1. **Elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación.**

El procedimiento para la elección de presidente y vicepresidente pertenece al tipo de los denominados directos, ya que dichos funcionarios son elegidos directamente por los ciudadanos, por el sistema de doble vuelta o ballotage a partir de la reforma de 1994. La reforma constitucional de 1994 modificó sustancialmente el sistema para la elección del presidente y vicepresidente. Se ha reemplazado el sistema anterior de elección indirecta (mediante juntas o colegios electorales) por el de la elección directa con doble vuelta conocido como ballotage, el que está reglamentado por los artículos 94 a 98 de la Constitución Nacional.

La elección directa significa que el pueblo, en un solo distrito electoral que abarca a todo el país, vota directamente por el candidato de su preferencia para ocupar el Poder Ejecutivo, sin intervención de terceros mediadores (juntas electorales o colegios). Por otra parte, la elección indirecta (llevada a cabo en Argentina en el período 53-60), usa el sistema de colegios electorales, que consiste en que el pueblo vota en cada distrito electoral (provincias y Capital Federal) por los candidatos miembros de los colegios electorales, para que éstos a su vez elijan luego al Presidente y vice por una mayoría importante.

**Art. 94.- [ELECCIÓN DIRECTA].- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin el territorio nacional conformará un distrito único.**El artículo 94 establece el principio general de la elección directa y el distrito único. La elección directa es la que realiza directamente el pueblo, a través de su voto al candidato que desea que ocupe dichos cargos. Si el candidato electo no obtuvo la mayoría absoluta de los votos (más del 45%) se debe realizar la segunda vuelta o ballotage.

Segunda vuelta o ballotage: Consiste en volver a hacer la votación, pero esta vez solamente entre los dos candidatos más votados pero que no llegaron a obtener (ninguno de los dos), más del 45% de los votos.

Este sistema presenta dos ventajas:

1. Logra que el candidato electo cuenta con una mayor legitimidad (al hacer que obtenga el cargo a través del voto de una cantidad importante de gente).
2. Logra que se reduzca la cantidad de partidos políticos y que sólo los más sólidos y con ideologías bien marcadas puedan llegar. Evitando así que cualquier agrupación, especulando, postule a sus candidatos, sólo con la intención de ganar para obtener beneficios políticos, ya que sabe que no podrá ganar porque nunca llegará a la doble vuelta.

Renuncia del candidato: Si bien durante la elección algún integrante de la fórmula a votar puede renunciar, no puede ser reemplazado por otro candidato.

Votos nulos: Son aquellos que están impugnados por diferentes causales. Como los votos que se computan son los afirmativos válidamente emitidos, los nulos no serían computados.

Votos en blanco: Para algunos es afirmativo sólo el voto que tiene nombre y apellido del candidato, mientras que para oros el voto en blanco también es afirmativo y no debe ser tomado como un voto nulo.

El voto en blanco está demostrando la opinión del pueblo y sirve para poner en alerta a los candidatos de que no se está de acuerdo con ninguna de las propuestas ofrecidas. Pero, al igual que los votos nulos, no tiene consecuencias para el cómputo de los votos afirmativos. Los votos en blanco y los nulos van a desaparecer el día que la votación deje de ser obligatoria, como proponen algunos políticos (Menem, Carrió, etc.).

**Art. 95.- [OPORTUNIDAD].- La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio.**

El artículo 95 establece que la elección del presidente podría ser efectuada el día anterior a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio.

Momento en el que se hace la votación de la formula "presidente-vice"

\* 2 meses antes de que termine su mandato el Presidente de ese momento.

\* Plazo para registrar y oficializar la formula: desde que se publica la convocatoria. Y hasta 50 días antes de la elección. Las formulas se presentan ante el juez federal competente.

\* Campaña electoral: actividades para promover o desalentar la captación del sufragio a favor, o en contra. Podrá iniciarse 60 días antes de la votación para elegir legisladores. Y 90 días antes para Presidente y vice.

\* Publicidad en medios de comunicación: cuando falten 32 días para la elección.

\* Acto de proselitismo: prohibidos antes de las 48hs antes de la votación.

\* Boca de urna: no se puede publicar o difundir sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta 3hs después de su cierre.

**Art. 96.- [SEGUNDA VUELTA].- La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior.**

El artículo 96 establece el plazo mínimo (dentro de los treinta días) en el que debe realizarse la segunda elección entre las dos fórmulas más votadas, si correspondiere.

La segunda vuelta se hace cuando:

* No se obtiene el 45% de los votos o
* No se obtiene el 40% de los votos, con una diferencia de más del 10% sobre el total de votos de la fórmula que salió en segundo lugar.

**Art. 97.- [PROCLAMACIÓN AUTOMÁTICA].- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.**

El artículo 97 establece que cuando la fórmula que haya reunido más votos haya alcanzado más del 45% del total de los votos válidos emitidos (no se cuentan los votos en blanco, ni los anulados), sus integrantes (candidatos a presidente y vicepresidente) directamente serán proclamados como presidente y vicepresidente, sin pasar por la segunda vuelta.

**Art. 98.- [PROCLAMACIÓN AUTOMÁTICA: DIFERENCIA MÍNIMA].- Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.**

El artículo 98, establece una segunda excepción a la segunda ronda electoral. Cuando la fórmula más votada hubiera obtenido el 40% de los votos válidos emitidos y la segunda fórmula más votada no hubiera llegado al 30% de los votos válidos emitidos también se proclamará directamente a los candidatos de la primera, sin pasar por la segunda vuelta electoral.

1. **Facultades del Órgano Ejecutivo.**

La Reforma de 1994 hizo algunas modificaciones sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo:

* Se suprimió la jefatura de la Capital.
* Se suprimió el ejercicio del Patronato (derogado por el Concordato de 1996).
* Se agregó la facultad de decretar la intervención federal.

**Art. 99.- [ENUMERACIONES].- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:**

**Inciso 1.- [JEFATURA SUPREMA. ADMINISTRACIÓN DEL PAÍS].- Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.**

Este artículo nos indica que el Presidente es:

* “Supremo”, en cuanto a que es el único Jefe de Estado (pero no está por encima de los otros dos poderes).
* Jefe del gobierno (no hay diferentes jefe de gobierno y de estado, como pasa en los sistemas parlamentarios).
* Comandante en jefe de todas las fuerzas armadas del país.
* Representa al país en el exterior y ante organismos internacionales.

Decretos del Poder Ejecutivo: Clases.

**Inciso 2.- [FACULTAD REGLAMENTARIA].- Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.**

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar en forma exclusiva los decretos reglamentarios de las leyes que sanciona el Congreso. Estos decretos tienen la función de aclarar y explicar en detalle el contenido de las leyes completas que reglamenta (y el fin que se propuso el autor).

Nunca pueden modificar o alterar el espíritu de esas leyes (es decir que se subordinan a ellas) las cuales entran en vigencia aunque no se haya dictado su correspondiente reglamento. Hasta la reforma de 1994 existía solamente esta clase de decretos, pero ahora se incorporan expresamente tres clases más:

1. Decretos reglamentarios o de ejecución: Ya existían con anterioridad.
2. Reglamentos delegados (art. 76): El Congreso dicta leyes marcos y le suele delegar al Poder Ejecutivo la facultad de completarlas por medio de los reglamentos delegados (sin los cuales esa ley marco no puede entrar en vigencia).
3. Decretos de necesidad y de urgencia (art. 3).
4. Reglamentos autónomos: Son aquellos por medio de los cuales el Poder Ejecutivo regula temas privativos de su competencia, no regulados por una ley (limitando sus propias facultades discrecionales).

Decretos de Necesidad y Urgencia.

**Inciso 3.- [FUNCIONES LEGISLATIVAS. DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA].- Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.**

**El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.**

**Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.**

**El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.**

Este artículo se divide en tres párrafos:

1. Establece la función básica del Poder Ejecutivo de promulgar las leyes: participa de la formación de las leyes (controlando al Congreso) a través de su promulgación y haciéndola publicar. Con la reforma, el Poder Ejecutivo puede participar en la confección de la ley:

* A través de los reglamentos delegados (art. 76): Son los decretos que dicta el Poder Ejecutivo ante los casos que le delega el Congreso.
* A través de los reglamentos de necesidad y urgencia.
* Promulgando parcialmente los remanentes de leyes que fueron vetadas.

1. Establece que el principio general es la división de poderes.
2. Nos da las excepciones a ese principio general: El Poder Ejecutivo puede dictar reglamentos de necesidad y urgencia ante casos excepcionales donde:

- Fuera imposible aplicar el mecanismo de la Constitución Nacional para sancionar leyes; y

- Siempre que los temas de esos reglamentos no sean sobre materia: penal, tributaria, electoral y de partidos políticos.

- Pero para que un reglamento de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo tenga validez, deberá: Ser aprobado por los ministros, conjuntamente con el jefe de gabinete. Pasados 10 días de la emisión del decreto, el Jefe de Gabinete de Ministros deberá someterlo a una Comisión Bicameral Permanente, quien tendrá 10 días para analizarlo expidiéndose sobre su validez o invalidez, elevando un dictamen al plenario de cada Cámara, para que lo traten expresamente. El Congreso debe dictar una ley especial que diga si el decreto es válido o no. El artículo 82 dice que no se acepta la sanción tácita del Congreso.

**Inciso 4.- [NOMBRAMIENTO DE JUECES].- Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.**

**Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.**

**Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.**

Nombramiento de los jueces: El Presidente tiene la facultad compartida junto con el Senado, de nombrar a los Jueces de la Corte Suprema y a los demás jueces federales.

Para nombrar a los jueces de la corte suprema:

* El Presidente necesita el acuerdo de 2/3 de los miembros presentes del Senado…
* … En sesión pública: Esto significa que los antecedentes del candidato no se analizan en privado y…
* … Convocada a ese efecto: La sesión se hace para este tema previsto.

Para nombrar a los demás jueces de tribunales federales inferiores:

* El Presidente debe elegirlos de una terna que le debe presentar el Congreso de la Magistratura; dicha elección debe luego ser aprobada por el Senado y en sesión pública. La base para dicha elección será la idoneidad de los candidatos.

Entonces, para hacer este nombramiento intervienen:

1. Consejo de la Magistratura: Elabora la terna de candidatos surgida a través de un concurso público.
2. Presidente de la Nación: Elige a los jueces de la terna que le propone el Consejo. Como l a terna es vinculante el Presidente no puedo proponer a otro candidato, debe elegir esa terna.
3. Senado: Aprueba la elección de los jueces hecha por el Presidente según su idoneidad. Si no la aprueba, no hay designación.

Estabilidad de los nombramientos de los jueces: Antes de la reforma, los jueces eran vitalicios y sólo eran destituidos ante un juicio político. Hoy, con la reforma de 1994, los nombramientos caducan cuando el juez en cuestión cumple la edad de 75 años. Pero hay una excepción: Que se le renueve su cargo con acuerdo del Senado, cada 5 años. Esto es para evitar que una persona mayor siga en funciones cuando ya sus aptitudes han disminuido.

**Inciso 5.- [INDULTO Y CONMUTACIÓN].- Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.**

Indulto: Es el perdón absoluto de una pena impuesta a una persona por sentencia firme de tribunal competente. Cesan los efectos de la sentencia condenatoria, s decir que el delito, la sentencia y la pena siguen existiendo sólo que no se aplicará la pena al condenado.

Conmutación de penas: Es el cambio de una pena mayor (impuesta por sentencia judicial) por una menor, es decir que se reduce el monto de la sanción. Es como un perdón parcial.

Tanto el indulto como la conmutación son de carácter particular, es decir que se dictan y aplican para beneficiar a una persona en particular, a diferencia de la amnistía que es de carácter general y la dicta el congreso.

**Inciso 6.- [SEGURIDAD SOCIAL].- Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.**

**Inciso 7.- [OTRAS ATRIBUCIONES].- Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.**

**Inciso 8.- [APERTURA DE SESIONES DEL CONGRESO].- Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.**

**Inciso 9.- [PRÓRROGA Y CONVOCATORIA A SESIONES DEL CONGRESO].- Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.**

**Inciso 10.- [CONTROL DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE RENTAS].- Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.**

**Inciso 11.- [POLÍTICA EXTERIOR].- Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.**

**Inciso 12.- [PODERES MILITARES].- Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.**

**Inciso 13.- [NOMBRAMIENTO DE PERSONAL MILITAR].- Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de batalla.**

**Inciso 14.- [ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS].- Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.**

**Inciso 15.- [PODERES DE GUERRA].- Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.**

**Inciso 16.- [DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO: REQUISITOS].- Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.**

**Inciso 17.- [INFORMES ADMINISTRATIVOS].- Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos.**

**Inciso 18.- [AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN].- Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.**

**Inciso 19.- [NOBRAMIENTOS EN COMISIÓN].- Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.**

**Inciso 20.- [INTERVENCIÓN FEDERAL DURANTE RECESO DEL CONGRESO].- Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.**

De manera resumida podemos destacar de este Artículo que el Presidente:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del Gobierno, responsable político de la administración general del país, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.
2. Cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes.
3. Dirige la acción del Gobierno.
4. Nombra y remueve al vicepresidente, ministros, magistrados de la corte suprema, embajadores, y encargados de negocios con acuerdo del Senado en algunos casos, y aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la Constitución y la Ley.
5. Convoca la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
6. Declara la guerra, declara Estados de Sitio en la Nación, decreta intervención federal en provincias o en la Ciudad de Buenos Aires en caso de receso del congreso.
7. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso.
8. Reglamentar total o parcialmente las leyes.
9. Concluye y firma tratados, concordatos y convenios internacionales.
10. **Ministros del órgano Ejecutivo. El Jefe de Gabinete: Atribuciones y Competencia. Artículos 100 al 107 de la Constitución Nacional. Los Ministros del Órgano Ejecutivo Nacional: Caracteres, atribuciones y responsabilidad.**

Tanto ministros como jefe de gabinete son nombrados y removidos por el Presidente, de quien son colaboradores inmediatos (recordemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal), es decir que se ocupan de la parte administrativa delegada por el Presidente para poder desarrollar con dedicación sus funciones políticas.

Además tienen la función de controlar al presidente, lo cual es muy difícil de lograr, porque es éste quien nombra o remueve a estos funcionarios que deben controlarlo, y así si un ministro intenta frenar su voluntad desaprobándole un acto, es muy posible que se vea removido de su cargo y que su lugar sea ocupado por una persona decidida a cumplir con sus peticiones.

**Art. 100.-[INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES, INCOMPATIBILIDAD].- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.  
Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:**

A través del artículo 100 junto con sus 13 incisos vamos a conocer la figura del Jefe de Gabinete (incorporada con la reforma de 1994) y a las características de los demás ministros:

El Jefe de Gabinete de Ministros no ejerce potestades propias, ya que todas sus facultades están condicionadas a la voluntad del presidente. A raíz de esto, el Presidente dictó el decreto 977/95 que reglamenta al artículo 100.

Mediante el decreto n° 2082/2011 el número de ministros del PEN asciende a 12, modificándose así la ley de ministerios 22520, cuyo artículo 1 establece:

*Artículo 1.- El Jefe de Gabinete de Ministros y QUINCE (15) Ministros Secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes:*

*- Del Interior.*

*- De Relaciones Exteriores y Culto.*

*- De Defensa De Economía y Finanzas públicas.*

*- De Industria.*

*- De Agricultura, Ganadería y Pesca.*

*- De Turismo.*

*- De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.*

*- De Justicia y Derechos Humanos.*

*- De Seguridad.*

*- De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.*

*- De Desarrollo Social.*

*- De Salud.*

*- De Educación.*

*- De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.*

El Jefe de Gabinete y los ministros:

1. No integran ninguno de los 3 poderes del Estado.
2. Son nombrados y removidos por el Presidente de la Nación.
3. Tienen la función de refrendar y legalizar los actos del Presidente (los cuales no tendrán eficacia si falta dicho requisito).

- Refrendar: Autorización que se hace de un documento a través de una firma.

- Legalizar: Acto de comprobar y certificar si una firma o documento es auténtico.

1. Los actos personales del Presidente no necesitan ser refrendados y legalizados.
2. Son responsables de sus actos en forma individual y colectiva frente al Presidente y al Congreso.
3. Con respecto al Congreso:

- Deben presentar al Congreso un informe sobre lo realizado en su departamento correspondiente.

- El Congreso puede pedirles explicaciones o informes cuando quiera.

- El Congreso puede someterlos a juicio político.

g) Intervenir en al promulgación y ejecución de las leyes y decretos.

h) Participar de los acuerdos de gabinete.

i) Resolver los temas económicos y administrativos de sus ministerios.

j) Intervenir en la celebración de convenios representando al estado nacional.

k) Asesorar al presidente, realizar estudios y proponer proyectos relacionados con sus respectivos ministerios

**Los 13 incisos del artículo 100 y el artículo 101 se refieren a las atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros:**

**Inciso 1.- Ejercer la administración general del país.**

**Inciso 2.- Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.**

**Inciso 3.- Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente.**

**Inciso 4.- Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.**

Clases de atribuciones:

1. Las atribuciones que le delegue el presidente (básicamente depende de la voluntad presidencial).
2. Las atribuciones que le da la Constitución expresamente.

**Inciso 5.- Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente.**

Otra de sus tareas es convocar, preparar y coordinar al gabinete a reuniones. Y ante la ausencia del Presidente, que es quien debe presidirlas, el Jefe de Gabinete puede tomar su lugar en dichas reuniones.

Podemos separar a estas reuniones en tres clases:

1. Reuniones de gabinete obligatorias para el Presidente llevadas a cabo para:

* Dictar los decretos de necesidad y urgencia;
* Dictar los decretos que promulgan parcialmente leyes (100 inc. 3);
* Tratar los proyectos de ley de presupuesto y de ministerios (100 inc. 6)

1. Reuniones obligatorias para el Jefe y los ministros y facultativas para el presidente:

* Cuando el Presidente le indica al jefe de gabinete que trate en dicha reunión los temas que le delegó (100 inc. 4)
* Reuniones que preside el Presidente o Jefe de Gabinete de Ministros, ante su ausencia (100 inc. 5)

1. Reuniones obligatorias para los ministros y facultativas para el Jefe:

* Convocadas por el Jefe para tratar temas propios de su competencia (art 100 inc. 4)

**Inciso 6.- Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.**Debe enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ministerios y de Presupuesto Nacional, una vez aprobados por todos los ministros y por el Presidente. **Inciso 7.- Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto nacional.**

Tarea que antes realizaban organismos especiales (DGI, Dirección Nacional de Aduanas, etc.)

**Inciso 8.- Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.**

Tiene la función de refrendar (autorizar) determinados actos del Presidente: Discretos reglamentarios, de prórroga de sesiones ordinarias, de convocatoria a extraordinarias, los mensajes. Estos actos no tendrán eficacia si falta dicho requisito.

**Inciso 9.- Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.**

**Inciso 10.- Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.**

**Inciso 11.- Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.**

**Inciso 12.- Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.**

**Inciso 13.- Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.**

El Jefe de Gabinete de ministros y los ministros deben refrendar (autorizar) juntos, los decretos (que dicta el Presidente) de necesidad y de urgencia y los que promulgan parcialmente las leyes. Pasados 10 días de la sanción de estos decretos, el Jefe los presentará a la Comisión Bicameral Permanente para su consideración.

**Art. 101.- [CONCURRENCIA AL CONGRESO.INFORMES.INTERPELACIÓN.REMOCIÓN].- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.**

Como se expresó anteriormente, el Jefe de Gabinete es responsable de sus actos frente al Congreso: Es así que debe ir mensualmente a una de las dos Cámaras para dar su informe de la marcha del gobierno.

En esa oportunidad podrá ser interpelado para ver si corresponde aplicarle la moción de censura: procedimiento que tiene el Congreso para remover al Jefe de Gabinete con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Es decir que luego de ser interpelado, si el Congreso lo considera correcta le aplica la moción y lo remueve.

* El art. 71 le permite a las Cámaras del Congreso, hacer ir a sus salas a los ministros, para que les den explicaciones e informes sobre lo que ellas les pidan. Es decir que en ambos casos se estaría informando sobre la marcha del Gobierno: En el art. 101 s para el Jefe y en el art. 71 es para los ministros.

**Art. 102.- [RESPONSABILIDAD].- Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.**

Los ministros tienen responsabilidad política por los actos del Presidente, que ellos mismos autorizan:

* Si esta autorización la hizo sólo: la responsabilidad es individual.
* Si la autorización la hizo en conjunto con otros ministros: la responsabilidad es solidaria.

Ante el Congreso esa responsabilidad política se efectiviza por medio del juicio político y ante el Presidente con la remoción que él hace de sus ministros por sí solo. Esto es independientemente de la responsabilidad jurídica (sea penal, civil o administrativa) que puedan tener.

**Art. 103.- [COMPTENCIA].- Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.**

Según este artículo los ministros nunca podrán tomar resoluciones privativas del Presidente o del Jefe (ni siquiera ante casos de emergencia o estados de necesidad); solamente podrán tomar resoluciones de tipo económicas o administrativas relacionadas con su departamento (ejemplo: control de oficinas, instrucciones a empleados, fijar sueldos, licencias, horarios de trabajado, etc.).

**Art. 104.- [MEMORIA AL CONGRESO].- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.**

* Memoria: Como ya vimos, los ministros deben presentarle al Congreso, una vez que abra sus sesiones ordinarias, un resumen o informe detallado (llamado memoria) de cómo marchan los negocios de la Nación en sus departamentos respectivos.

**Art. 105.- [INCOMPATIBILIDADES].- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleos de ministros.**

Este es el único requisito exigido para ser ministro: no ser miembro del Congreso. Esto es para respetar el principio de división de poderes, ya que el ministro es elegido por el Presidente.

Si siendo ministros son elegidos como legisladores, deben renunciar al cargo de ministro antes de ingresar al Congreso.

**Art. 106.- [INTERVENCIÓN EN SESIONES LEGISLATIVAS].- Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, pero no votar.**

Es la facultad que tienen los ministros de concurrir en forma espontánea a las reuniones del Congreso y hasta participar en los debates, con la única prohibición de votar. Como ya vimos (art. 71), tienen la obligación de concurrir a la Cámara que los llame para dar las explicaciones que ella les pida (es la interpelación parlamentaria).

**Art. 107.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.**

El sueldo de los ministros se fija por ley, según la jerarquía del cargo. Está prohibido todo tipo de amenazas sobre su reducción, para evitar así, que el ministro actué presionando, sin libertad.

De todas formas al igual que en los sueldos del Presidente y vice, vemos que sí puede ser actualizado en épocas de inflación, en donde por la desvalorización de la moneda este sueldo estaría siendo disminuido en la realidad.

1. **El control de la Administración Pública: Sindicatura General de la Nación y Unidades de Auditoría Interna. Ley 24156**

Sindicatura General de la Nación: Es una entidad autárquica que depende directamente del Presidente de la Nación. Se ocupa de la auditoría contable y financiera del sector público. Se integra con "sucursales", las unidades de Auditoría Interna, que son las encargadas de reunir información, detectar irregularidades e informar a la SGN.

Otra función de la SGN es la de fijar las normas de la contabilidad pública. Trabaja monitoreando coetáneamente la actividad administrativa. Cuando detecta una irregularidad que afecta al erario, tiene que informar dentro de los 15 días al Presidente. Si además sospecha de un funcionario, debe comunicarlo a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Procuración del Tesoro Nacional: Órgano de asesoramiento jurídico del PEN; su titular es el jefe de todos los abogados del Estado.

Entes reguladores: Monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Son entidades autárquicas, que además reciben las quejas y sugerencias de los consumidores, en audiencias públicas.

*Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas: Es una dependencia del Ministerio Público que sustancia sus investigaciones mediante sumarios administrativos. Es un organismo híbrido ya que, además de estos sumarios administrativos, lleva a la justicia las sospechas comunicadas por la SGN con respecto a la conducta delictuosa de los funcionarios públicos.*

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la República Argentina es el órgano rector del sistema de control interno que coordina actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de gobierno, mediante un empleo adecuado de los recursos dentro del marco legal vigente.

Entre sus diversas funciones se hallan las de dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser respetadas por las Unidades de Auditoría Interna (UDAI) que funcionan en cada Ministerio y organismo autárquico de la Administración Pública Nacional. Fue creada en el año 1992 a partir de la ley 24.156.1

**"ARTICULO 7º.- La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente."**

Es un poder dependiente directamente del Presidente de la Nación Argentina y un ente autárquico, según lo establecido en el artículo 97 de la ley 24.156.

**ARTICULO 96.- Créase la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.**

El Síndico General que será el responsable de la entidad posee el rango de Secretario de la Presidencia de la Nación (artículo 108). Es ayudado por 3 Síndicos Generales Adjuntos.

**FUNCIONES**

Se encuentran establecidas en la ley 24.156, artículo 104:

1. Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación;
2. Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de auditoría interna;
3. Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;
4. Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Nación;
5. Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación;
6. Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna;
7. Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado;
8. Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los respectivos responsables;
9. Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría;
10. Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;
11. Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;
12. Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus servicios;
13. Ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley 23.696 en materia de privatizaciones, sin perjuicio de la actuación del ente de control externo.
14. Ejercer todas las funciones de control derivadas de las Leyes nº 23.696 y 23.982 y sus reglamentaciones.
15. Realizar tareas correspondientes a la auditoría de juicios ordenada por el artículo 31 del Decreto nº 2.140/91.
16. Efectuar en las jurisdicciones y entidades un seguimiento adecuado de las registraciones de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, vigilando el estricto cumplimiento de dichas obligaciones.
17. Verificar la efectiva adopción, en las jurisdicciones y entidades sujetas a su control, de las medidas tendientes a la prosecución oportuna en sede judicial del resarcimiento de los daños patrimoniales causados por los responsables, realizando un seguimiento permanente de las respectivas causas.

En los artículos 104 al 106 de la ley se determina el modo en el que se alcanzarán los objetivos.

**Unidad De Auditoria Interna**

La Unidad de Auditoria Interna es un órgano de control interno que tiene como fin entender en la planificación, programación y ejecución de las tareas de auditoría, teniendo fundamentalmente presente los "objetivos" de la auditoría interna.

La unidad de auditoría interna es parte integrante del sistema de control interno, dependiendo de la máxima autoridad de la jurisdicción y siguiendo los lineamientos emanados de la **Sindicatura General De La Nación**, en su condición de órgano rector del sistema.

En ese marco, sus actividades estarán orientadas al análisis de la gestión institucional con un enfoque contributivo de asesoramiento y asistencia técnica a la administración activa, en especial a sus máximos responsables.

**Acciones:**

   • Elaborar el Plan General y Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna.

   • Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos estipulados por la conducción superior de la Jurisdicción.

   • Colaborar mediante la sugerencia de todas aquellas medidas de control interno que estime pertinentes, en el diseño de los distintos circuitos administrativos.

   • Tomar conocimiento integralmente de los actos y evaluar, en especial, todos aquellos de significativa trascendencia económica.

   • Formular todas las recomendaciones de control interno que estime pertinentes.

   • Promover la eficiencia en la gestión operativa de la Jurisdicción.

   • Evaluar la aplicación de los controles operativos, contables, de legalidad y financieros.

   • Evaluar si en las erogaciones de la Jurisdicción se da cumplimiento a los principios contables y niveles presupuestarios de la normativa legal vigente.

   • Evaluar las medidas de resguardo adoptadas para la protección de los activos.

   • Emitir informes periódicos sobre los trabajos de auditoría desarrollados.

   • Informar a las autoridades superiores y a la Sindicatura General de la Nación, de los desvíos que se detecten.

   • Efectuar el seguimiento de las recomendaciones formuladas.

   • Brindar a la Sindicatura General de la Nación toda la información que ésta requiera.

**La Ley 24.156: Ley De Administracion Financiera Y De Los Sistemas De Control Del Sector Público Nacional**

Fue sancionada el 30 de Setiembre de 1992 y promulgada el 26 de Octubre 26 de 1992

La Ley 24156 establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional.

* En el caso de la administración financiera establece y regula las disposiciones generales de la misma y la de sus sistemas componentes, a saber:
  + - Sistema de Presupuesto
    - Sistema de Crédito Publico
    - Sistema de Tesorería
    - Sistema de Contabilidad
* En el caso de los Sistemas de Control, establece y regula:
  + - Sistema de control interno
    - Sistema de Control Externo.

La Ley N º 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece en su Título VI–Del Sistema de Control Interno, artículo 100: "El sistema de Control Interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo de supervisión y coordinación y por las Unidades de Auditoría Interna que serán creadas en cada Jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas Unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General".

En su artículo 101, la citada norma menciona: "la autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de la organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna".

El artículo 102 menciona: "la Auditoría Interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por los auditores integrantes de las Unidades de Auditoría Interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen".

 El artículo 103 de la norma especifica: "el modelo de control que aplique y coordine la Sindicatura General deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones, y estar fundado en criterio de economía, eficiencia y eficacia".

En lo que hace específicamente a la Unidad de Auditoría Interna el Decreto Nº 624/2003 establece que es su función verificar permanentemente la vigencia en la Jurisdicción de un satisfactorio grado de control interno, promoviendo en la gestión operativa la aplicación de principios de eficiencia, eficacia y economía.

1. **Organización del Órgano Ejecutivo en la Provincia de Buenos Aires.**

La provincia de Buenos Aires es, al igual que las demás provincias argentinas, autónoma respecto del gobierno nacional en la mayoría de los temas, exceptuando aquellos de alcance federal. Esto está reconocido por el artículo 121 de la Constitución de la Nación Argentina que establece que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por actos especiales al tiempo de su incorporación. “

La provincia tiene su propia Constitución. La primera se redactó en 1854 y reformó en 1868. Una nueva Constitución se dictó en 1873, con reformas tratadas en la convención que sesionó entre1862 y 1889. La Constitución Provincial vigente se remonta a 1934, con las reformas de 1994.

Las autoridades del gobierno tienen su sede en la ciudad de La Plata, la cual es la capital provincial.

Poder ejecutivo

El poder ejecutivo provincial es ejercido por un ciudadano bonaerense con el titulo de gobernador. De acuerdo al artículo 122 de la constitución provincial, el gobernador y el vice ejercen mandatos de cuatro años. Según el artículo 123, pueden ser reelectos por períodos consecutivos una única vez. El gobernador y el vicegobernador electos tomarán posesión de sus cargos el primer día hábil posterior a la integración de las Cámaras con la incorporación de los legisladores electos en la misma elección.

El actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires es Daniel Scioli.

Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:

1- Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero.

2- Tener treinta años de edad.

3- Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella.

En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, las funciones de Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el vicegobernador.

Si la inhabilidad temporaria afectase simultáneamente al gobernador y al vicegobernador, el vicepresidente primero del Senado se hará cargo del Poder Ejecutivo, hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho funcionario también se hará cargo del Poder Ejecutivo, cuando en el momento de producirse la enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, no exista vicegobernador.

Si la vacante tuviere lugar en la primera mitad del período en ejercicio se procederá a elegir gobernador y vicegobernador en la primera elección de renovación de la Legislatura que se realice, quienes completarán el período Constitucional correspondiente a los mandatarios reemplazados.

En los mismos casos en que el vicegobernador reemplaza al gobernador, el vicepresidente del Senado reemplaza al vicegobernador.

La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario que deberá desempeñar el cargo provisoriamente para los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente del Senado no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.

El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia y no podrán ausentarse del territorio provincial por más de treinta días sin autorización legislativa.

Gozan de un sueldo que está fijado por la ley, siendo este inalterable en el periodo de sus nombramientos. No pueden contraer otro empleo que no sea el de funcionario público obtenido por el sufragio.

El Órgano Ejecutivo de Buenos Aires puede movilizar o quitar a sus ministros, dictar leyes, informar a la legislatura el estado administrativo y financiero y también la recaudación de impuestos y rentas. El Poder Ejecutivo Provincial no puede expedir ordenes sin la firma del ministro correspondiente, pero en un caso de acefalía del ministro si.

1. **La organización administrativa del Estado Nacional: Nociones generales. Sistemas de estructuración de la organización administrativa: centralización y descentralización (concepto y clases).**

La organización administrativa del Estado Nacional

El estado, en su carácter de persona jurídica, actúa a través de órganos y entes para cumplir sus funciones específicas. Por ello, para el cumplimiento de las funciones administrativas, asume distintas formas de organización.

Entendemos por organización administrativa el conjunto de normas jurídicas que regulan la competencia, las relaciones jerárquicas, situación jurídica, formas de actuación y control de los órganos y entes en ejercicio de la función administrativa.

La Argentina ha adoptado como forma de organización política la Representativa, Republicana y federal. Esta declaración implica:

El ejercicio de la soberanía le corresponde al gobierno federal.

En virtud de tal facultad las provincias delegan a través de la Constitución.

Las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal. Surge de la Ley Suprema que las provincias se han reservado para sí.

Dictar su propio texto constitucional.

Determinar sus propias instituciones locales y regirse por ellas

Existen poderes que son concurrentes de los gobiernos federales y provinciales.

Se da un juego de relaciones interprovinciales que es pautado por la Constitución.

Principios jurídicos

- Competencia: conjunto de atribuciones, facultades y deberes que ejercen en forma obligatoria los órganos estatales.

- Jerarquía: es el vínculo de la interrelación que guardan los órganos administrativos, en relación de subordinación, coordinación y supra ordenación. La administración se organiza piramidalmente por vía de diferentes líneas que conducen a un mismo centro.

Sistemas de estructuración de la Organización Administrativa

La organización administrativa es el conjunto de normas jurídicas que regulan la competencia, relaciones jerárquicas, situaciones jurídicas, la actuación y control de estos órganos y entes en ejercicio de la función administrativa.

Tiene 4 elementos fundamentales:

- Coordinación: según la doctrina es la esencia de toda organización.

- Finalidad.

- Vínculo asociativo.

- Acción común de dos o más personas.

Se destacan 3 sistemas:

- Escala, piramidal o lineal puro: basado en la jerarquía lineal, se parte desde el superior al inferior. (CENTRALIZACIÓN)

- Funcional: con base en la división de trabajo. (DESCENTRALIZACIÓN)

- Mixto: que toma un poco de cada uno de los dos anteriores.

El Presidente es el jefe de la Administración Pública y los ministros son sus más inmediatos colaboradores en el manejo de ésta. Cabe preguntarse, entonces, en qué consiste la Administración Pública. Puede definírsela, muy sintética y superficialmente, como el conjunto de recursos humanos y materiales que utiliza el Poder Ejecutivo nacional para prestar los servicios públicos a su cargo. La Administración Pública está formada, en primer lugar, por personas físicas, que tienen a su cargo el desempeño de tareas de las más diversas características. También por bienes, que son utilizados por esas personas (útiles, edificios, vehículos, etc.) para el cumplimiento de sus funciones y fines específicos.

La Administración Pública es una organización jerárquica y tiene una estructura piramidal. En su cúspide se halla el presidente de la República, que es su jefe. Inmediatamente debajo de él están los ministros del Poder Ejecutivo. A su vez, de cada ministro depende un conjunto de oficinas, centralizadas unas, descentralizadas otras, que podemos resumir así:

1. Administración Central: Para la satisfacción del interés general, el Estado puede actuar en forma centralizada. En este supuesto, las facultades de decisión están otorgadas a los órganos superiores de la Administración. Se dice, entonces, que hay centralización administrativa cuando la atención de los fines del Estado es directamente realizada por el ente o entes centrales. La centralización implica reunir todas las atribuciones en el ente central, lo que trae apareada la subordinación jerárquica entre los distintos órganos de este ente. En ese sentido se ha dicho que la centralización es un ordenamiento jerarquizado.

¿Quiénes son órganos de la administración pública centralizada?

* + El poder ejecutivo nacional
  + El jefe de gabinete de Ministros (de acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 100, C.N.).
  + Los ministerios
  + Los directores generales de la administración, etc.
  + Tipos de centralización.
  + La centralización del desempeño: se refiere a la concentración geográfica.
  + La centralización departamental: se refiere a la concentración de actividades especializadas, por lo general en un departamento.
  + La centralización como aspecto de la administración: es la tendencia que tiende a restringir la delegación de la toma de decisiones. En la jerarquía organizacional, los administradores mantienen un elevado grado de autoridad al más alto nivel o cerca del mismo.

1. Administración Descentralizada:

Ciertos servicios públicos del Estado son prestados por entidades que tienen – no obstante pertenecer al Estado – personería jurídica propia, y son dirigidas por administradores, directorios, consejeros, etc. El objetivo de esta ficción legal de tener personería jurídica propia es evitar la lentitud burocrática de la administración central, a la vez que dotar al órgano directivo de mayor independencia en la decisión de los asuntos confiados a él.

Estos servicios públicos son prestados por organismos que tienen personería jurídica propia, poseen recursos propios y son creados por ley (una parte de la doctrina sostiene que deben ser creados por decreto del Poder Ejecutivo). Podemos mencionar, por ejemplo, a las universidades nacionales, los organismos del sistema previsional, el Banco Central, la Aduana, etc.

Incluso, el Estado ha llegado a delegar funciones propias de la Administración Pública en personas jurídicas que no forman parte de ella: Así, se ha delegado el poder de policía sobre la matrícula de ciertas profesiones liberales reglamentadas a los respectivos colegios profesionales, que no forman parte de la Administración Pública. Estos entes son denominados genéricamente “personas jurídicas públicas no estatales”.

Todos los entes estatales descentralizados (entes autárquicos, empresas del Estado, etc.) tienen algunas características básicas comunes. Ellas son:

* Su patrimonio es estatal. Estas entidades son de “propiedad” del Estado, en el sentido de que el Estado central puede eventualmente suprimir el ente y establecer el destino de sus fondos como desee. Si bien, el ente aparece formalmente como el “propietario” de sus propios bienes resulta ser que el Estado lo es en general. Esta es la nota distintiva entre las entidades estatales y no estatales; en las últimas el Estado no puede disponer de los fondos como le plazca en caso de disolución, sino que ellos deben reintegrarse a sus respectivos propietarios.
* Tienen facultad de administrarse a sí mismos. Es la competencia para resolver sus problemas, sin recurrir a la administración central más que en los casos expresamente previstos.

**Tipos de descentralización:**

* Descentralización por región:

Consiste en el establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses comunitarios de una población asentada en un determinado territorio. Los organismos descentralizados por región son aquellos que atienden y satisfacen las necesidades públicas de una región, como es el municipio.

* Descentralización por servicio:

El Estado tiene encomendada la satisfacción de necesidades de orden general, que requiere procedimientos técnicos sólo al alcance de funcionarios que tengan una preparación especial. La forma de conseguir ese propósito es dar independencia al servicio y constituirle un patrimonio que sirva de base a su economía, sin que por ello se rompan sus vínculos con la entidad administrativa. Los organismos descentralizados por servicio son aquellos que prestan determinados servicios públicos. Ej: Banco Central de la República Argentina, UBA.

* Descentralización por colaboración:

Ocurre cuando existe una insuficiencia de recursos o de incapacidad financiera, técnica u organizacional por parte de la administración pública para la realización de algunas actividades que tiene atribuidas, como son algunos servicios públicos. En tales casos, se impone o autoriza a organizaciones privadas su colaboración, haciéndolas participar en el ejercicio de la función administrativa. De esta manera, la descentralización por colaboración es una de las formas de ejercicio de las funciones públicas por parte de organizaciones privadas. Ej: Trenes de Buenos Aires (TBA).

* Descentralización Funcional:

Tanto la concentración como la desconcentración constituyen principios organizativos que se dan en el marco de una misma persona pública estatal, por lo que pueden tener lugar tanto en la administración central como dentro de algunas entidades descentralizadas.

1. **Descentralización funcional: concentración y desconcentración (concepto y clases).**

CONCENTRACIÓN:

Hay concentración cuando las facultades de decisión se reúnen en los órganos superiores de la Administración Central, o cuando ese conjunto de facultades se encuentra a cargo de los órganos directivos de las entidades descentralizadas.

DESCONCENTRACIÓN:

Existe desconcentración cuando el ordenamiento jurídico confiere, de forma regular y permanente, atribuciones a órganos inferiores dentro de la misma organización de una entidad pública. El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica y patrimonio propios y está jerárquicamente subordinado a las autoridades superiores del organismo. Por ejemplo, organismos recaudadores, fuerzas de seguridad, entes que cumplen con la función administrativa de policía.

La desconcentración está dentro del cuadro de la centralización, que sólo se distingue por la forma periférica en que desarrolla sus funciones. Los órganos desconcentrados son parte de la centralización administrativa cuyas atribuciones o competencia la ejercen en forma regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el poder central supremo.

**Tipos de desconcentración:**

* Desconcentración vertical o por materia:

En este caso la competencia conferida al desconcentrado, está integrada por asuntos cuyo responsable anteriormente era el superior jerárquico, quien ve así reducidas sus facultades de ejercicio directo en determinado ámbito competencial. Ese “desplazamiento de carga” ha de ser de un órgano a otro, de lo contrario, si fuera de funcionario a funcionario, estaríamos en presencia de la delegación de facultades y no ante la desconcentración.

* Desconcentración regional:

En esta categoría, el ente desconcentrado ejerce competencia sobre un determinado territorio, para atender los asuntos que inicialmente correspondían al órgano central; por ejemplo, las delegaciones de diversas secretarías en los estados.

* Desconcentración horizontal o territorial:

En este tipo de desconcentración, el órgano centralizado, por disposición jurídica, traslada a entes con igual jerarquía, asuntos de su competencia original, para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. Tal sería el caso de las distintas oficinas regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como las delegaciones regionales de la tesorería de la federación y las administraciones fiscales regionales.

1. **Nociones de autonomía y autarquía administrativa.**

AUTONOMÍA: La entidad autónoma es la que se da sus propias normas y se rige por ellas; estas normas deben dictarse dentro del marco normativo general dado por un ente superior. Así las provincias, de acuerdo al art. 5 de la Constitución Nacional, son entes autónomos porque se dictan sus propias constituciones siempre que aseguren su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria, en cuyo caso la el Gobierno federal garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Después de la reforma constitucional de 1994, la Constitución Nacional (art. 123) establece que todos los municipios argentinos son autónomos, debiendo observarse si ello es en forma plena o semiplena.

La carta orgánica es un conjunto de normativas desarrolladas para regir la vida institucional, política y económica del municipio que es autónomo, por ello se transforma en la Ley fundamental del municipio, ya que declara los principios que regirán el sistema, su modelo de organización de crecimiento y de distribución de recursos, de tal manera que se constituye en el instrumento político y jurídico que posibilita la fijación de una serie de derechos, organizando los poderes y determinando las atribuciones y funciones de los órganos municipales.

Un Ente es autónomo cuando además de ser políticamente independiente, también lo es económicamente, como podría ser el Poder Judicial.

Autarquía: Las entidades autárquicas reciben la ley de afuera, es decir no se dan sus propias normas, como ocurre con los entes autónomos pero son capaces de darse su propio estatuto quedando éste sujeto, por supuesto, a lo que disponga la ley de su creación respecto a la aprobación por el órgano central. Goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de una finalidad pública en sus funciones. Los entes autárquicos nacen por ley o por decreto y dependen del Estado Nacional.

Parte de la doctrina considera que la distinción entre autonomía y autarquía es una cuestión de grado, ya que siempre habría un mínimo de facultades normativas aun en los supuestos de autarquía.

La autarquía puede ser:

- Territorial: supone una base geográfica en la cual el ente desarrolla su actividad (municipios).

- Funcional o por servicios: supone una diferencia con base técnica (BCRA, AFIP, UBA).

- Administración Pública descentralizada. (autoridades autárquicas).

Un ente es autárquico cuando es independiente políticamente, como por ejemplo puede serlo un municipio.

Unidad n° 11: Órgano Judicial

1. **La función jurisdiccional: Concepto.**

Consiste en la aplicación de las leyes para resolver los conflictos de intereses, llamados también pleitos, litigios o “causas”, como genéricamente los denomina el artículo 116 de la Constitución Nacional.

Causa es todo litigio, pleito o controversia, choque de dos o más intereses enfrentados, que debe ser resuelto aplicando el derecho vigente. La función jurisdiccional se diferencia de la ejecutiva o administrativa en que, si bien ambas consisten en aplicar la Ley, el administrador no resuelve conflictos, sino que lo hace para administrar los servicios públicos. Ésta es la esencia del sistema republicano: La ley se puede aplicar de dos maneras:

* Para administrar un servicio público.
* Para resolver un conflicto o causa. Esta es monopolio del Poder Judicial.

El término "jurisdicción" denota el poder o la autoridad que se tiene para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio.

La función jurisdiccional es la facultad de todos los jueces de administrar la justicia, de resolver las controversias interpretando la ley y aplicándola al caso concreto. Actúa como árbitro y modelador respecto de los actos de los restantes poderes, cuidando que su funcionamiento se desenvuelva con sujeción a los principios y normas constitucionales.

El Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad garantizando la supremacía de la Constitución Nacional, lo cual implica tanto la tutela de la primacía del derecho federal sobre el derecho local como el aseguramiento de los derechos y garantías previstos en la ley fundamental. Tienen atribuciones relevantes y amplias pero limitadas.

1. **La competencia: Concepto.**

Hace referencia a la atribución legítima que tiene un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Presupone la existencia de la jurisdicción a la cual limita. Determina los márgenes dentro de los cuales se puede ejercer la jurisdicción. La competencia de los jueces resulta de la combinación de diversos principios, que establecen entre ellos una división de tareas específicas por diversas razones:

* Por razón de materia: Puede haber jueces o tribunales facultados para intervenir exclusivamente en asuntos de carácter civil, comercial, penal, laboral, etcétera. Esto se denomina fuero. La competencia por razón de materia es de orden público, de modo que no puede extenderse o modificarse de modo alguno.
* Por razón de territorio: Los jueces son competentes en el distrito dentro de cuyos límites se extiende su jurisdicción. Las personas se encuentran sometidas al juez de su domicilio.
* Por razón de grado: Los tribunales están organizados con un orden jerárquico, en inferiores o de primera instancia, y superiores, estos últimos tienen la facultad de revisar los fallos de los tribunales inferiores, en los casos que le son sometidos por medio de alguno de los recursos legales.
* Por razón de turno: Se establece el orden en que deben intervenir en los distintos casos que se van presentando. Se sortea el juzgado al azar.
* Por razón de valor o cuantía: Así hay juzgados de “mayor cuantía” o de “menor cuantía”, según su competencia se encuentre por encima o por debajo de un límite determinado (primera instancia, segunda instancia y tercera instancia o Corte). Cuantía es el dinero que se reclama por ejemplo al pasar a segunda instancia.
* Por razón de las personas: Puede ocurrir que el tribunal tenga competencia exclusiva para atender en las causas en que sean parte ciertos funcionarios.
* Por razón de ámbito constitucional: La justicia puede ser ordinaria (provincial) o federal (nacional).

1. **El Órgano Judicial: Composición, nombramiento y remoción de sus miembros.**

Se compone de una serie de órganos que forman parte del gobierno federal y que ejercen una función del poder del Estado, cual es la denominada "administración de justicia", "jurisdicción" o "función jurisdiccional". A ello se añade el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

Requisitos para ser juez: La Constitución no establece requisito alguno y deja todo librado a la reglamentación legal: las leyes exigen el título de abogado; la ley sobre carrera judicial 17.455, que estableció la formación de ternas de magistrados y funcionarios para cubrir los cargos de jueces de la Nación, las que serían elevadas al Poder Ejecutivo a fin de que entre los propuestos, el Presidente eligiera los nombres a elevar al Senado.

Procedimiento para el nombramiento: Las cámaras de apelaciones y los jueces de primera instancia deben comunicar a la Corte Suprema las vacantes que se producen en sus respectivos tribunales y pueden mencionar los nombres de las personas que, a su juicio, sean aptas para llenarlas. Las cámaras de apelaciones designan y promueven a su personal, y la designación o promoción del personal de los juzgados y del Ministerio Publico se practican por las cámaras respectivas a propuesta de los jueces y funcionarios titulares.

Nombramiento de los miembros: Según el artículo 99 inciso 4 el Presidente de la Nación tiene la atribución de:

• Nombrar los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión publica, convocada al efecto.

• Nombrar los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Según el artículo 114 que regula al Consejo de la Magistratura, dispone:

"... tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial."

Incompatibilidad: La Constitución prevé en forma expresa, la prohibición para los jueces federales de integrar los tribunales de provincia (Art. 34), e implícitamente la de ser Presidente de la Nación, al prohibírsele a este desempeñar funciones judiciales (Art. 75 y 95). La forma republicana de gobierno, la independencia propia de la función judicial, y el control que deben ejercer los jueces sobre los restantes poderes del Estado, fundamentan la prohibición para los jueces de integrar las Cámaras del Congreso y desempeñarse en relación de dependencia del Poder Ejecutivo.

- Presentación de la renuncia. Ante el poder ejecutivo, previo a cuenta a la Corte Suprema, por intermedio de la Cámara respectiva, según lo dispone el artículo 9 bis, de Reglamento para la Justicia Nacional.

- Cese en sus funciones. En virtud de principio de estabilidad en su cargo, los jueces gozan de inamovilidad mientras dure su buena conducta (Art. 96) y por lo tanto no cesan sino por juicio político en caso de mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones (Art. 45).

Juramento: Art.112.-“ En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el Presidente de la misma Corte.”

La ley fundamental requiere, en este caso, un juramento. Los jueces deben presentarlo, comprometiéndose a administrar justicia “bien y legalmente”, lo que significa desempeñar sus obligaciones y a administrar justicia correctamente teniendo en cuenta los valores superlegales.

Remoción: Art. 115. “Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.

En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado”.

Art. 53. “Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

La remoción de los jueces nacionales procede por mal desempeño, por crímenes comunes o por delitos específicos de la función. Si transcurren 180 días desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción y no se dicta el fallo, la actuación se archiva y se repone al juez suspendido.

Para los jueces de la Corte Suprema persiste el “juicio político”, mientras que los jueces de tribunales inferiores son removidos mediante un Jurado de Enjuiciamiento con las siguientes pautas:

a- Antes de ser sometido el caso a dicho jurado, el consejo de la Magistratura debe haber decidido la apertura del procedimiento de remoción del juez inferior a la corte. De hacerlo, el consejo puede suspenderlo al cargo.

b- El consejo de la Magistratura debe acusar al juez ante el jurado.

c- El congreso dicta una ley especial con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros de cada cámara.

El proceso de destitución de los jueces inferiores es oral y publico. Se indica con la acusación formulada por plenario del consejo de la magistratura, de la que se corre traslado por 10 días al magistrado acusado. Después se abre la causa por 30 días, eventualmente prorrogarte por la decisión de la mayoría del jurado. Este podrá desechar las pruebas inconducentes o dilatorias. Concluida la producción de pruebas o vencido el periodo, las partes producen en un plazo no mayor a 30 días, un informe oral, y el jurado resolverá dentro de los 20 días siguientes.

1. **Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.**

**Art. 114.- [CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES].- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.**

**El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones:**

**1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.**

**2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.**

**3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.**

**4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.**

**5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.**

**6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.**

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que entre sus principales funciones, selecciona las ternas de los candidatos a magistrados de los juzgados y las cámaras nacionales, y acusa a los mismos ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El Consejo de la Magistratura es un organismo creado por la reforma de 1994, integra al Poder Judicial (aunque una minoría considera que es un órgano extrapoder) y es regulado por una ley especial del Congreso (que debe ser aprobada por mayoría absoluta de todos los miembros de cada Cámara). Está regulado por ley 24937 (y 24939) y por **ley 26080 de febrero de 2006:**

Atribuciones: El Consejo se encarga de:

* **Seleccionar** a través de concurso público a los candidatos a cargo de jueces inferiores: Hace una terna y se presenta al Presidente para que él elija entre ellos quien ocupará el cargo; luego de esta elección le presenta el elegido al Senado, para que lo apruebe.
* **Administrar** los recursos del poder judicial a través del dictado de reglamentos económicos y ejecutar su presupuesto.
* **Ejercer** facultades disciplinarias sobre los jueces: apercibimiento, multas, etc.
* **Decidir** que se abra el procedimiento para remover a los jueces (es decir que actúa como fiscal, al acusar) o suspenderlos.
* **Dictar** los reglamentos sobre la organización judicial de los jueces inferiores.
* **Dictar** los reglamentos necesarios para asegurar la independencia de los jueces y efectiva administración de justicia.
* **Características de los miembros:** Para ser miembro se requieren las condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
* Los miembros están sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para los jueces mientras dure su desempeño en el Consejo.
* No pueden ejercer simultáneamente los cargos de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.

Composición: Está integrado por veinte miembros de acuerdo a la siguiente manera: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación; ocho legisladores, designados por los Presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados cuatro por cada Cámara, dos por cada bloque; cuatro representantes de los abogados de la matricula federal, elegidos por profesionales matriculados; un representante del Poder Ejecutivo; dos representantes del ámbito científico y académico: un profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales, y una persona de reconocida trayectoria y prestigio con menciones especiales en el ámbito académico y/o académico.

Los miembros del Consejo, en el acto de su incorporación, prestan juramento de desempeñar debidamente el cargo ante el Presidente de la Corte Suprema de Justica de la Nación.

Por cada miembro titular se elige un suplente, por igual procedimiento, para remplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.

Duración: Los miembros del Consejo de la Magistratura duran 4 años en sus cargos (pudiendo ser reelectos con intervalo de un período). Los legisladores o el representante del Poder Ejecutivo cesan en su cargo (debiendo ser reemplazados) si cambian las calidades en función de las que fueron seleccionados. El presidente y el vice del Consejo de la Magistratura son designados por mayoría absoluta del total de sus miembros y duran un año en sus funciones.

Se divide en cuatro comisiones:

1. De Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
2. De Disciplina y Acusación.
3. De Administración y Financiera.
4. De Reglamentación.

Plenario: El Consejo de la Magistratura reunido en sesión plenaria, puede dictar su reglamento general, y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la debida ejecución de esas leyes, y toda normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestación de la administración de justicia. Además realiza las observaciones que considere necesarias al ante proyecto del presupuesto anual del Poder Judicial.

El plenario del Consejo de la Magistratura designa a su vicepresidente y determina el número de integrantes de cada comisión, además, designa al administrador general del Poder Judicial de la Nación.

Decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, previo dictamen de la Comisión de Acusación, y formula la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Dicta las reglas de funcionamiento de la Secretaria General y de la oficina de Administración Financiera, organiza el funcionamiento de la Escuela Judicial, y así como también dicta su reglamento, aplica sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina.

Se reúne en sesiones Plenarias ordinarias con la regularidad que establece su reglamento interno. El quórum para sesionar es de trece miembros y adopta sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes.

**Jurado de Enjuiciamiento**

Es el órgano del Poder Judicial de la Nación que, desde la reforma constitucional de 1994 está a cargo de juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores. Su ámbito de acción non alcanza a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben ser removidos de sus cargos mediante juicio político.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se constituye cada cuatro años al inicio del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Actúa en cada caso que se formule acusación a un magistrado y sus miembros con excepción del ministro de la corte mientras mantenga dicho cargo pueden ser reelectos en forma inmediata, solo una vez.

Remoción: Los miembros pueden ser removidos de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de sus miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño, o la comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.

Incompatibilidad: Están sujetos a las incompatibilidades que rigen para los jueces mientras dure su desempeño en el Jurado de Enjuiciamiento. No pueden ejercerse simultáneamente los cargos de miembro del Consejo de la Magistratura y de Jurado de Enjuiciamiento.

Composición: Está integrado por nueve miembros de acuerdo a: *tres jueces* que son: un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elegido por sus partes, en carácter de presidente, dos jueces de cámaras elegidos por sus partes; *tres legisladores*, dos por la Cámara de Senadores, elegidos uno por la mayoría y otra por la primera minoría, y un legislador perteneciente a la Carama de Diputados de la Nación, elegido por mayoría de votos; y *tres abogados de la matricula federal* elegidos, dos en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, debiendo al menos uno de ellos pertenecer a la matricula federal del interior de país, y el restante en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por el mismo sistema, utilizado para elegir los miembros del Consejo.

Por cada miembro titular se elige un suplente por igual procedimiento para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.

Procedimiento de acusación

*Disposiciones generales:*

El fallo que decida la destitución del magistrado debe emitirse con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. El procedimiento ante el jurado de Enjuiciamiento de magistrados es oral y público, y debe asegurar el derecho de defensa del acusado.

Quórum:

El jurado sesiona válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros, excepto para la audiencia de debate, que requiere la presencia de seis de sus miembros.

Acusación:

Es formulada por el Plenario del Consejo de la Magistratura, y sostenida por un representante de este.

Presentación de pruebas y audiencia de debate:

Participan en esta etapa las partes, el defensor, peritos e intérpretes.

El presidente del jurado fija la audiencia de debate, en la que se recibe la prueba, ordenando la citación de las partes, del defensor oficial y de los auxiliares.

Las audiencias son orales y públicas. El jurado puede, por resolución fundada de la mayoría absoluta del total de sus miembros, a pedido de parte o de oficio, limitar el acceso durante el tiempo necesario, cuando la publicidad pueda afectar la moral, el orden público, la seguridad o la garantía del debido proceso. La resolución no se puede apelar.

Para la apertura del debate se comprueba la presencia de las partes y luego da lectura de la acusación y de la defensa. Luego se inician los interrogatorios.

Informe final:

Una vez terminada la recepción de pruebas o vencido el plazo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado producirán el informe final en forma oral.

Deliberación y fallo:

El jurado de Enjuiciamiento se reúne para deliberar debiendo resolver en un plazo no superior a veinte días, debe ser fundado y contar con 6 votos concurrentes para disponer la remoción. El fallo se publica en el Boletín Oficial.

Pronunciado el fallo, el jurado cita dentro de las veinticuatro horas al representante del consejo de la Magistratura, al magistrado acusado y a la defensa a una audiencia en la que se leen los fundamentos de aquel, y se entrega una copia íntegra a las partes. Esa copia vale como notificación para quienes intervinieron en el debate.

Cuando se pronuncia el fallo, el jurado comunica lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Justicia de la Nación.

Contra el fallo del jurado, sólo se puede realizar un pedido de aclaración, el que debe interponer ante el jurado dentro de los 3 días notificado.

1. **Requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.**

La Constitución, en su artículo 40, al expresar que "ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser Senador" ha establecido las condiciones de capacidad y experiencia necesaria para formar parte de tan elevado tribunal. Según los artículos 47, 97 y 98, los requisitos para ejercer el cargo de Miembro de la Corte Suprema son:

* Titulo profesional de abogado, expedido por Universidad Nacional u otra autoridad o tribunal competentes, lo que constituye la capacidad científica o técnica para la interpretación de las leyes, debiendo haber desempeñado esa profesión por ocho años.
* Edad: Debe haber cumplido la de treinta años.
* Nacionalidad: Se requiere ciudadanía nativa, o adquirida, con seis años de ejercicio, lo que es sin duda bastante para ejercer facultades menos políticas que la de los Senadores.

**Art. 111.- [REQUISITOS PARA SER JUEZ DE LA CORTE SUPREMA].- Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador.**

El artículo 111 determina las condiciones necesarias para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Éste es el único tribunal que requiere, por imposición constitucional, la calidad de abogados de sus integrantes. Exige también ocho años de ejercicio, esto significa que no basta esa antigüedad en el título, sino que se debe acreditar el ejercicio efectivo de la profesión de abogado, que no se suple por el desempeño de tareas judiciales. En efecto: La importancia institucional que tiene la Corte Suprema de Justicia exige que sus integrantes tengan experiencia profesional.

Los otros requisitos exigidos son los mismos que para ser senador: Tener 30 años y una renta de $2000. Para algunos autores el requisito de idoneidad está implícito.

**Incompatibilidades de los jueces de esta Corte:**

* No pueden ser jueces a la vez de tribunales provinciales.
* No pueden desarrollar actividades políticas, administrativas, profesionales, etc.
* No pueden tener empleos públicos o privados.

Excepciones: Pueden ejercer la docencia y realizar tareas de estudio e investigación.

1. **Juramento.**

**Art. 112.- [JURAMENTO].- En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte.**

Este artículo nos indica cómo será el juramento que deben prestar los jueces: deben comprometerse a desempeñar sus funciones administrando justicia correctamente, sin apartarse de la ley ni de la Constitución. El juramento es una fórmula ética y formal cuyo fin es asegurar el buen desempeño en sus funciones, de quien lo realiza. Con la reforma de 1994 se suprimió todo lo relacionado con la religión católica, es por eso que este juramento ya no es “Por Dios y por los santos evangelios”.

Este juramento se presta ante el presidente de la Corte (uno de los 5 jueces que la integran, elegido por sus compañeros). De todas formas, cada vez que se renueva íntegramente la Corte, sus miembros juran ante el Presidente de la Nación.

1. **Composición y organización del órgano judicial de la Nación y de las Provincias.**

**Art. 108.- [COMPOSICIÓN].- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.**

El artículo 108 de la Constitución Nacional se refiere expresamente a una Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial de la Nación. El único tribunal del Poder Judicial que tiene rango constitucional es la Corte Suprema de Justicia, los restantes quedan subordinados a lo que dispongan las leyes del Congreso Nacional. La constitución no fija el número de miembros que componen la Corte Suprema de Justicia.

La organización judicial responde al carácter federal del Estado Argentino. De este modo, existe por un lado una Justicia Federal, que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la república, con respecto a los asuntos mencionados en el artículo 116 de la Constitución Nacional (competencia federal), y sin esa limitación en los lugares sometidos a la potestad del gobierno nacionales decir, que tiene competencia en todo el país, atendiendo en materia de estupefacientes, contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, y otros delitos que afectan a la renta y a la seguridad de la Nación. Por otro lado, cada una de las 23 provincias argentinas cuenta con una Justicia Provincial que entiende en el tratamiento de los delitos comunes (también denominada justicia ordinaria), y que se encuentra constitucionalmente facultada para organizar sus propios órganos judiciales y legislación procesal (arts. 5, 121 y 123 de la Constitución Nacional).

Justicia Federal de la Nación o Poder Judicial Nacional

Se encuentra conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, los Juzgados de Primera Instancia, las Cámaras de Apelaciones y el Jurado de Enjuiciamiento

Corte Suprema de la Nación

Es la instancia superior dentro del Poder Judicial y se encuentra compuesta por 7 miembros: un presidente y 6 ministros. Entiende sobre los recursos extraordinarios en todos aquellos puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación, y posee competencia en forma originaria y exclusiva en todos los asuntos que conciernen a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte. Tiene a su cargo, conjuntamente con el Consejo de la Magistratura, la administración del Poder Judicial.

1. **Competencia de la Justicia Federal. Características. Análisis de los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.**

La Constitución se encarga de fijar los casos en que debe intervenir el Poder Judicial de la Nacional, por oposición a la regla general de que las provincias conservan todo el poder no delegado (Art. 121).

Características:

- Excepcional: se encuentra limitada por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

- Limitado: no puede versar sino sobre los asuntos contemplados en las citadas normas constitucionales.

- Privativo: excluye a los órganos judiciales provinciales.

- Improrrogable: salvo en caso de distinta nacionalidad o vecindad de los litigantes.

Excepcional (art. 116 y 117):

**Art. 116.- [COMPETENCIA FEDERAL].- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.**

Definiciones:

* Jurisdicción: Función de administrar justicia a través de órganos estatales específicos, por medio de un proceso adecuado. Cada tribunal ejerce su función de administrar (jurisdicción) dentro de un espacio determinado y dentro del fuero que está atribuido.
* Competencia: Es la porción o medida de jurisdicción dada a un juez para determinar genéricamente los asuntos en que debe conocer, según su categoría o la etapa en que esté el proceso.

Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para ejercer dicha jurisdicción en determinado proceso. El género sería la jurisdicción, mientras que la especia sería la competencia. Es decir que la competencia de los tribunales inferiores se clasifica a través de la distribución de las causas según:

* Las personas que intervienen.
* La materia que tratan.
* La etapa en que se encuentre el proceso.
* El territorio.

Este artículo nos indica las causas que debe resolver el Poder Judicial de la Nación (Corte y Tribunales inferiores):

1. Causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación: Resuelven los conflictos que surgen entre las personas aplicando las leyes federales o la Constitución Nacional, que es la ley suprema.
2. Causas que versen sobre puntos regidos por tratados internacionales: Los tratados son actos complejos que necesitan de la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los celebra el Gobierno con los demás países o persona internacional.
3. Causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros.
4. Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: esto tiene que ver con los actos y contratos sobre comercio marítimo. Es admisible la competencia federal para todo lo relacionado con buques: su propiedad; choques; gastos por reparaciones; hipotecas; cobro de salarios; cumplir con contrato de flete; etc. No es admisible para todo lo relacionado con embarcaciones menores: botes, canoas, lanchas.
5. Causas regidas por el derecho aeronáutico: los jueces federales son competentes para conocer sobre actos y contratos regidos por el Código aeronáutico.
6. Causas en que el Estado (como demandante o demandado) o alguna de sus entidades (como una universidad, banco o empresa estatales) sea parte.
7. Causas que susciten entre:
   1. Provincias.
   2. Una provincia y los vecinos de otra.
   3. Los vecinos de diferentes provincias (siempre que sean argentinos).
   4. Una provincia o sus vecinos, contra un Estado extranjero (siempre que los vecinos sean argentinos y que el Estado extranjero renuncia a la inmunidad aceptando litigar ante el Poder Judicial de otro Estado).
   5. Una provincia o sus vecinos, contra un ciudadano extranjero que esté en nuestro país o fuera, pero litigando ante nuestros tribunales (siempre que los vecinos sean argentinos): los extranjeros tienen “fuero de nacionalidad” es decir que pueden demandar o ser demandados ante el Poder Judicial de otro país. En litigios entre extranjeros no es competente el Poder Judicial Nacional.

El poder judicial provincial debe resolver sobre todas las demás causas que no están detalladas en este artículo. De todas formas los tribunales provinciales pueden interpretar y aplicar normas federales, siempre que esto sea para decidir cuestiones relacionadas con leyes locales; los tribunales federales pueden interpretar y aplicar normas provinciales en determinados casos.

**Art. 117.- [COMPETENCIA POR APELACIÓN Y ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA].- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.**

Competencia exclusiva de la Corte (es decir que dentro de los casos del art. 116 hay algunos exclusivos de la Corte):

La Corte va a tener dos clases de competencia según cada caso:

1. Originaria: Son aquellos casos que provienen de la Constitución Nacional y en donde el juicio se inicia, se tramita y termina en la Corte sin que intervenga ningún otro tribunal y son:
   1. Causas en donde una provincia es parte. Si el litigio es entre una provincia y un ciudadano suyo, el caso lo resolverá el Poder Judicial de esa provincia.
   2. Causas en donde intervienen embajadores, ministros o cónsules extranjeros.
2. Apelada: Para los restantes casos enumerados en el art. 116 la Corte va a tener competencia apelada en forma ordinaria o extraordinaria:
   1. Ordinaria: La Corte actúa como tribunal de tercera instancia revisando las sentencias definitivas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones (casos: extradición de criminales reclamados por países extranjeros, cuando la Nación es parte y el monto del juicio es de más de dos millones de pesos.
   2. Extraordinaria: Ante un recurso extraordinario (remedio impugnativo cuyo fin es asegurar la supremacía constitucional).

Este recurso extraordinario tiene tres clases de requisitos:

* + - Comunes: Deben existir en todo recurso judicial: a) Actuación anterior de un tribunal de justicia; b) Existencia de un juicio o proceso; c) Existencia de una cuestión justiciable; d) Existencia de gravamen; e) Subsistencia de todos los requisitos al momento de fallar.
    - Propios del recurso extraordinario: a) Existencia de cuestión federal; b) Relación directa e inmediata de la cuestión federal con la cuestión debatida; c) Decisión contraria al derecho federal invocado; d) El recurso debe estar interpuesto contra una sentencia definitiva; e) Dicha sentencia debe haber sido dictada por el superior tribunal de la causa.
    - Formales: a) Que la cuestión federal sea oportunamente introducida en el proceso; b) Que sea mantenida en todas las instancias; c) Que el recurso se funde por escrito y se baste a sí mismo.

Otras competencias:

* De los recursos de aclaratoria contra sus propias resoluciones;
* De los recursos de revisión previstos en los artículos 2 y 4 de la ley 4055;
* De los recursos de queja por retardo de justicia que produjeran las Cámaras Nacionales de Apelaciones;
* De las cuestiones de competencia entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano jerárquico común que deba resolverlas;
* Cuando su intervención fuera indispensable para evitar una efectiva privación de justicia;
* Atribución apelada en materia de superintendencia.

1. **El juicio por jurados: Artículo 118 de la Constitución Nacional.**

**Art. 118.- [JUICIOS CRIMINALES POR JURADOS].- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.**

Establece que todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la cámara de diputados, se terminaran por jurado, luego que se establezca en la republica esta institución. Estos se llevaran a cabo en la misma provincia donde se hubiese cometido el delito y en el caso de que se hubiese cometido fuera de los limites de la Nación, el congreso establecerá mediante una ley el lugar en el que haya que seguirse el juicio.

El juicio por jurados consiste en que un cuerpo popular dé su veredicto durante el juzgamiento de ciertos delitos. Durante el mismo, el abogado tendrá que imponer su postura a un grupo de 12 ciudadanos comunes que no son magistrados judiciales, elegidos por sorteo, ajenos al conflicto que se intenta resolver. Bajo la dirección de un juez tiene que expedirse, según su conciencia, acerca de los hechos que deben servir de fundamento a la aplicación de la ley penal, dando a conocer su veredicto en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado, con posterior remisión de causa a un juez o magistrado judicial para que después del veredicto, y respetando este aplique la pena, si corresponde.

Estos se excluyen para las causas de juicio político.

De todas formas en nuestro país no se reguló todavía dicho sistema.

1. **Ministerio Público.**

**Art. 120.- [MINISTERIO PÚBLICO: INDEPENDENCIA; FUNCIÓN].- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.**

El Ministerio Público se define en el nuevo artículo 120 de la Constitución reformada. La función del Ministerio Público, fundamentalmente, consiste en la titularidad de la acción penal, representando a la sociedad agraviada por el delito. En otras palabras, su función es promover la actuación del Poder Judicial; es decir, hacer que la justicia actúe cuando la sociedad se vea perjudicada por algún delito.

Sin perjuicio de ello, puede también actuar en los fueros no penales, aunque debe cuidarse de no convertirse en un mero elemento burocrático que sólo retarda el procedimiento judicial. Además del procurador general (que actúa ante la Corte Suprema de Justicia) y del defensor, debió incluirse a los fiscales de todos los fueros e instancias, como miembros del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público 24946 reglamenta la organización e integración así como las funciones y la actuación del mismo.

Características:

* Tiene autonomía funcional: No recibe instrucciones de ninguna autoridad.
* Tiene autarquía financiera: Administra sus propios fondos.
* Sus miembros tienen dos garantías: inmunidad funcional e intangibilidad de sueldos.

Integración: El Ministerio Público está integrado por:

* 1 procurador general de la Nación.
* 1 Defensor General de la Nación.
* Los demás miembros que la ley establezca, surgidos de concurso público.

Designación y remoción: Tanto el Procurador como el Defensor son designados por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo de 2/3 de los miembros del Senado, mientras que su remoción es a través del juicio político. La ley será la que determine la duración de su mandato.

Requisitos: Para ser miembro del Ministerio Público:

* Ser ciudadano argentino.
* Tener título de abogado con 8 años de antigüedad.
* Los demás requisitos para ser senador (tener 30 años de edad y una renta anual de 2000$ fuertes).

Estructura: El Ministerio Público se divide en dos cuerpos:

1. El Ministerio Público Fiscal, cuya jefatura corresponde al Procurador General de la Nación.

Tiene como función actuar ante los jueces durante todo el procedimiento judicial, planteando acciones pertinentes y los recursos. En materia penal, les corresponde instar la acción penal pública.

1. El Ministerio Público de Defensa, cuya jefatura corresponde al Defensor General de la Nación.

Tiene a su cargo la representación y defensa de pobres y ausentes, proveyéndoles defensa pública y asistencia legal requerida, no sólo a las personas de bajos ingresos, sino también a aquellas que se niegan a tener un abogado particular. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa en juicio.

Funciones: El Ministerio Público tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y delos intereses generales de la sociedad.
2. Representar y defender el interés público.
3. Promover y ejercer la acción pública en las causas penales (salvo cuando para intentarla fuese necesario requerimiento de parte).
4. Intervenir en los procesos de nulidad del matrimonio y divorcio; de filiación y en todos los relativos al estado civil y nombre de las personas.
5. Promover causas o asuntos conducentes a la protección de persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando carecieren de asistencia o representación legal.
6. Velar por la observancia de la constitución nacional, y las leyes de la República; el efectivo cumplimiento del debido proceso legal y la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el debido respeto.

Unidad N° 12: El tesoro nacional

1. **El Tesoro Nacional: Concepto**

El Tesoro nacional, también es conocido como erario público, y es el patrimonio del Estado, con el cual éste cuenta para afrontar los gastos a su cargo, que son la atención de la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Estos son los gastos ordinarios, a los que deben sumarse gastos extraordinarios en caso de guerra o calamidades públicas. También sirve el Tesoro nacional para otorgar subsidios a las provincias, cuando no puedan cubrir sus gastos ordinarios con sus propias rentas (art. 75 inc. 9 CN).

1. **Recursos del Tesoro Nacional**

Los recursos económicos del Estado son los aportes de índole económica y financiera que éste se halla habilitado a percibir para sufragar sus gastos y cumplir su finalidad. Son, en consecuencia, todos aquellos valores económicos que el Estado puede incorporar a su Tesoro o caja.

El “recurso” se diferencia del “ingreso”: En tanto éste se refiere a lo efectivamente incorporado a la caja del Estado, aquél es más genérico, y también comprende lo que el Estado podría potencialmente incorporar a su Tesoro.

Los recursos económicos estatales no tienen como única finalidad costear los gastos del Estado en cuanto a su administración, sino que serán, conforme a su utilización, un instrumento de relevancia en el desarrollo de la política económica.

La Constitución especifica en el artículo 4 cómo se forma el Tesoro Nacional: Éste puede ser definido, sencillamente, como la “caja” donde ingresan y son depositados los recursos económicos obtenidos.

**Enumeración y análisis del artículo 4° de la Constitución Nacional.**

**Art. 4.- [RECURSOS DEL TESORO NACIONAL].- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formando del producto de derechos de importación y exportación; renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.**

Este artículo es producto de las reformas de 1860 y 1866. Tiene su fuente más inmediata en el artículo 8 del Proyecto de Constitución para la Confederación Argentina de Alberdi, aun cuando éste era mucho más escueto y sólo mencionaba los impuestos. También resulta innegable la influencia de la Constitución de los Estados Unidos, cuyo artículo 1, sección 8, cláusula 1, le otorga al Congreso norteamericano la más amplia concesión de atribuciones fiscales.

Según el artículo 4 de la Constitución nacional, configuran recursos económicos del Estado:

1. Los derechos de importación y exportación: Los derechos de importación son los aranceles o tarifas que el Estado percibe como consecuencia del ingreso de mercadería extranjera a nuestro país. Los derechos de exportación son aquellos que gravan la salida de mercadería del territorio nacional. Ambos participan de la naturaleza del impuesto.

Los derechos de importación y exportación constituyen un ingreso relevante para las arcas del Estado, pero son, además, instrumentos de gravitación en el diseño de la política económica. Así, conforme sean establecidos estos impuestos, se podrá alentar determinadas exportaciones e importaciones, crear una economía abierta o cerrada, controlar la balanza comercial, etcétera.

1. La venta o locación de tierras de propiedad nacional: El Estado federal tiene bienes, que conforme a su naturaleza pueden pertenecer al dominio público o al privado. Los primeros no son pasibles de apropiación privada; por lo tanto, no podrían ser enajenados por el Estado. Los bienes de dominio privado, en cambio, pueden, en general, ser vendidos y locados (es decir, alquilados). Ello también constituye un recurso económico, según lo especifica el artículo 4 de la Constitución Nacional.

En consonancia con esta disposición, el artículo 75 inciso 5 establece que corresponde al Congreso “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

Desde la perspectiva del ingreso, su importancia es relativa. Se trata, en principio, de un recurso no renovable – en especial, la venta -, que con el tiempo, si es utilizado con reiteración, puede producir la descapitalización del Estado.

En ocasiones, la propiedad de éste sobre tales bienes puede producirle también pesadas cargas si es ineficaz en su administración. En los últimos años ha tenido lugar en nuestro país la venta de numerosos bienes del Estado, como consecuencia del proceso de privatización, especialmente relevante en el ámbito de las empresas de servicios públicos.

1. La renta de correos: El artículo 4 menciona, entre los recursos que conforman el Tesoro Nacional, la “renta de correos”. Ello es consecuencia de la facultad que tiene el Congreso para “arreglar y establecer los correos generales de la Nación”.

La referencia a las ganancias que el Estado podría obtener como consecuencia de la prestación del servicio postal ha quedado desvirtuada en la práctica.

El servicio público de correos ha sido tradicionalmente deficitario; ello no significa que debe descalificárselo. Los servicios públicos, en general, no tienen como propósito obtener rentas para las arcas del Estado, sino, más bien, satisfacer necesidades primordiales de la población.

La importancia del servicio postal y sus posibilidades de desarrollo, en la época de sanción de nuestra ley fundamental, hicieron pensar a nuestros constituyentes que además de eficiente sería rentable; ello no siempre se cumplió en la realidad.

1. Las demás contribuciones impuestas por el Congreso: Es en esta categoría de recursos donde reside una de las claves de todo el sistema económico y financiero del Estado. El término “contribución” es sinónimo de “tributo”, como expresión de la capacidad que se le atribuye al Estado para exigirles prestaciones económicas a sus habitantes, por medio de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En la doctrina constitucional, Bielsa se enrola en esta posición, en tanto que Bidart Campos y Bianchi entienden que contribuciones son sólo los impuestos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado, en los últimos años, por el primero criterio.

Lo expuesto no implica desconocer que los impuestos constituyen una verdadera columna vertebral de las finanzas del Estado, tanto en relación con la cobertura de sus gastos como en cuanto a su política global.

Como se podrá apreciar, el artículo 4 requiere que esas contribuciones sean impuestas por el Congreso, siguiendo un tradicional principio que ya estaba reflejado en la Carta Magna inglesa de 1215.

1. Los empréstitos y las operaciones de crédito: Dentro de esta categoría de recursos destinados a allegar fondos al Estado podemos distinguir:
   1. Los empréstitos, que son préstamos de origen interno o externo, generalmente pagaderos a largo o mediano plazo. La doctrina moderna considera que la utilización de empréstitos es un medio ordinario y casi habitual de financiamiento, que deben ser necesariamente empleados con extrema prudencia, y en consonancia con las posibilidades de ahorro interno que tenga el Estado. En muchos casos, las constituciones exigen, para su aprobación, mayorías legislativas calificadas. No fue éste el criterio que establecieron nuestros constituyentes: el artículo 75 inciso 4, se limita a señalar que le corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.
   2. Los anticipos o bonos de Tesorería, que tienden a satisfacer necesidades económicas concretas o inmediatas; y
   3. Los procedimientos monetarios, que incluyen la emisión de moneda.
2. Otros recursos: El artículo 4 de la Constitución no es una norma cerrada que sólo permita las clases de ingresos allí especificadas. Una de esas categorías, incluso, es lo bastante flexible como para admitir interpretaciones amplias (“las demás contribuciones”). Hay otras que son, además, consecuencia de la función relevante que el Estado ha ido adquiriendo en el campo económico y social.

La emisión monetaria (derivada de la atribución otorgada al Congreso por el Artículo 75, inciso 6 y 11) constituye un recurso de evidente magnitud económica y financiera. Su uso discrecional y sin respaldo suficiente es promotor primario de la inflación.

Las utilidades que pueden aportarle al Estado las empresas que éste mismo administra, aunque no son un medio habitual de ingresos, configuran también recursos posibles. La concesión de servicios o la explotación de juegos importan, asimismo, ingresos.

Una especie particular, en esta mención amplia de los otros recursos no previstos especialmente en el artículo 4 de la Constitución, es la de los denominados “ingresos parafiscales”. Se trata de contribuciones exigidas obligatoriamente con fines de solidaridad social (aportes previsionales, a cajas de subsidios, a colegios profesionales, etc.). Esta recaudación adquiere una importancia económica muy apreciable y en no pocas ocasiones se la ha utilizado como herramienta relevante de la política económica.

Estos recursos se clasifican en:

1. Ordinarios: Para gastos comunes, como ser sueldos. Son los puntos 1, 2, 3 y 4.
2. Extraordinarios: Usados para situaciones de emergencia como inundaciones, guerras. Son los puntos 4 creados por la Nación y excepcionalmente 5.
3. **Impuestos**

Los impuestos son los tributos más típicos. Puede definírselos como las prestaciones económicas exigidas coactivamente por el Estado para satisfacer necesidades de índole general, sin que medie contraprestación determinada por parte de éste.

Tradicionalmente, se ha sostenido que la característica peculiar del impuesto es la de carecer de una asignación a la finalidad determinada. El impuesto, una vez pagado, engrosa los recursos del Tesoro de la Nación y le corresponde al gobierno de turno, conforme a las pautas previstas por la Constitución, utilizar esos fondos con arreglo a su plan de gobierno, reflejado en el presupuesto de la Nación. En realidad, cuando pagamos el impuesto inmobiliario o el impuesto a las ganancias, no sabemos si ese dinero va a ser empleado específicamente para salud, educación, pago de beneficios sociales, gastos de mantenimiento de la estructura estatal, etc.

**Los impuestos se clasifican en:**

1. Directos (al patrimonio y la renta) o Indirectos (al consumo).
2. Ordinarios (los periódicos) o extraordinarios (ante crisis económicas excepcionales).
3. Internos (son los directos e indirectos) y externos (son los impuestos a la importación - aranceles – y a la exportación – retenciones).

Las **tasas** son las prestaciones económicas coactivamente requeridas por el Estado como contraprestación de servicios públicos de afectación obligatoria. Se diferencian del impuesto en cuanto éstos no media la contraprestación de un servicio público.

Las **contribuciones** son prestaciones económicas, por lo general en dinero, requeridas compulsivamente por el Estado como consecuencia del mayor valor adquirido por los bienes de los habitantes, a quienes se les exige el pago por haber sido beneficiados económicamente por la realización de una obra pública.

**Impuestos directos e indirectos**

* Directos: Son aquellos en donde el contribuyente no puede trasladar el valor del impuesto a otra persona, sino que debe pagarlo él. Son creados por las provincias salvo que excepcionalmente y por tiempo limitado se encargue el Estado Nacional (Ejemplo: Impuesto a las ganancias, beneficios extraordinarios, etc.).
* Indirectos: Son aquellos en donde el contribuyente traslada el valor del impuesto a otra persona. Se encarga de recaudarlos el Estado Nacional (junto con los impuestos directos recaudados excepcionalmente); son coparticipables con las provincias en los porcentajes correspondientes. Corresponde aclarar que es importante, a los efectos de esta distinción, que la traslación tenga origen legal y no meramente convencional. Es la propia ley la que debe autorizar la traslación del tributo.

**Impuestos externos e internos**

1. Impuestos externos: Son aquellos que gravan el comercio internacional y son el producto de derechos de importación y exportación, surgidos de las Aduanas Nacionales (ya que no hay provinciales). Las provincias no tienen competencia para crear aduanas interiores ni exteriores.
2. Impuestos Internos (directos e indirectos): Son contribuciones que equitativa y proporcionalmente impone el Congreso a la población y el Estado los percibe como consecuencia de hechos imponibles propios de la actividad interna del país.
3. **Facultades del Estado federal y de las provincias en materia.**

La distribución del poder tributario en un Estado federal plantea situaciones de difícil resolución. Hay que armonizar convenientemente las atribuciones del poder central con las de los Estados miembros o provincias, y también con las de los municipios.

Para comprender nuestro régimen constitucional de competencias tributarias, es preciso diferenciar con claridad las distintas categorías de impuestos que antes hemos estudiado. Así, se legisla de manera diversa si los impuestos son directos o indirectos. En este último caso, habrá que diferenciar además, entre los externos e internos.

Con relación a los impuestos directos, se los ha considerado, en principio, de competencia provincial, aun cuando la Constitución no lo dice expresamente. Ello es consecuencia de la interpretación del artículo 75 inciso 2, que establece que es facultad del Congreso “imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, la seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Si en circunstancias excepcionales la atribución le es conferida al Congreso, se entiende que ordinariamente les corresponde a las provincias; y por excepción, al Estado federal.

Respecto a los impuestos indirectos, habrá que considerar separadamente la distribución de competencias según sean externos o internos. Nuestra ley fundamental preceptúa con claridad que no hay aduanas interiores y las exteriores son exclusivamente federales. Le incumbe al Congreso establecer los derechos de importación y exportación (artículos 4, 9 y 75, inciso 1). Los impuestos indirectos externos son, por lo tanto, exclusivamente federales.

Los impuestos indirectos internos no tenían prevista, con anterioridad a la reforma de 1994, una regulación específica. Ello provocó dudas y situaciones conflictivas entre el Estado federal y las provincias, que se reflejaron en diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. Estos impuestos indirectos internos son, entonces, de naturaleza concurrente y pueden ser fijados tanto por el Estado federal como por las provincias, conjunta o alternativamente.

En conclusión, en nuestro régimen constitucional los impuestos directos son de competencia provincial; como excepción, pueden ser establecidos por el Congreso por tiempo determinado y en los casos autorizados por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución. Los impuestos indirectos externos son de competencia exclusiva del Estado federal, en tanto que los indirectos internos son de competencia concurrente entre el Estado federal y las provincias.

En la práctica, sin embargo, se ha producido una evidente distorsión de estos principios. El gobierno federal ha abusado de los impuestos directos, alegando un permanente estado de necesidad. Por ejemplo, el impuesto a los réditos (ahora llamado a las ganancias) fue creado como impuesto nacional en 1932, mediante la ley 11586, por un período de diez años, y aún subsiste en tal carácter.

1. **Atribuciones el Congreso Nacional respecto al Tesoro Nacional.**

Art. 75.- Corresponde al Congreso:

1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.

2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.

3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

5. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.

6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.

7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.

13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.

1. **Los principios de la tributación y la libertad fiscal.**

Se denomina “principios constitucionales de la imposición” al conjunto de pautas básicas e interrelacionadas consagradas por la Constitución con el propósito de establecer ciertas y determinadas exigencias para el ejercicio, por parte del Estado, de su poder de imposición.

Joaquín V. González, en su *Manual de la Constitución*, afirmaba: “teniendo por efecto apropiarse para el gobierno de una porción de la fortuna o patrimonio del individuo, este poder ha sido en todo tiempo, y es siempre, el más peligroso para la libertad civil y política, por lo mismo que es discrecional, amplio e indeterminado en sus especies. Fácilmente puede convertirse en arma de la tiranía cuando la Constitución no lo limita, y los particulares perjudicados por el abuso no se apresuran a evitarlo o a pedir reparación”.

Los principios constitucionales de la imposición están expresamente previstos con esa finalidad de proteger a los habitantes frente al poder del Estado. Entre estas pautas básicas, cabe reconocer en la Constitución los principios jurídico – impositivos de la legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, finalidad fiscal y razonabilidad.

1. Legalidad Fiscal: El principio de legalidad está claramente enunciado por la Constitución, en la segunda parte del Artículo 19: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En materia impositiva, este principio adquiere características especiales, que potencian aún más su existencia. En nuestro ordenamiento jurídico no puede haber impuesto sin ley que lo establezca.
2. Igualdad Fiscal: Todo contribuyente de una misma categoría debe soportar el mismo gravamen, sin discriminación (art. 16: la igualdad es la base del impuesto).

La igualdad, en materia impositiva, debe ser entendida no como identidad, sino como proporcionalidad: Respetará el principio de igualdad aquel impuesto que tenga en consideración la capacidad tributaria del contribuyente y sea proporcional a su riqueza.

1. No confiscatoriedad: Los tributos no deben ser excesivos o arbitrarios. La Corte dijo que es confiscatorio un impuesto cuando absorbe una parte sustancial de la renta o capital gravado.
2. Finalidad Fiscal: La finalidad fiscal de los impuestos debe satisfacer al bien común, al interés general y no a una parte de la población.
3. Razonabilidad: El materia tributaria, el artículo 4 exige que las contribuciones que imponga el Congreso de la Nación sean equitativas. Ello quiere significar que en ejercicio de su facultad de imposición, el poder público no puede prescindir de un mínimo de justicia.

Este principio cobra especial importancia en su relación con el postulado de igualdad. Para asegurar la aplicación de éste, el legislador realiza, habitualmente, una categorización de los contribuyentes, a los efectos de someter al mismo tratamiento tributario a quienes estén en similares condiciones.

1. Libertad fiscal: Cuando hay un conflicto de intereses entre el contribuyente y el Estado, ante una situación ambigua, se beneficia al contribuyente, protegiendo de esta manera a la parte más débil.
2. **La coparticipación federal.**

Concepto: La palabra “coparticipación” alude a la acción de participar, a la vez, con otro en alguna cosa. En materia tributaria, se ha utilizado esta denominación para referirse al régimen de colaboración acordado entre el Estado federal y las provincias, en virtud de leyes – convenio por medio de las cuales las provincias delegan en el poder central el ejercicio de determinadas facultades impositivas, con la condición de participar en un sistema de reparto de los impuestos incluidos en ese régimen.

Antecedentes: El sistema tiene su primer antecedente con la ley – convenio 12139, que estableció un régimen de unificación de impuestos internos al consumo, cuya aplicación comenzó en 1935 y que las provincias aceptaron. En 1954, el sistema caducó, ante la denuncia formulada por la provincia de Corrientes con respecto al régimen de la ley 12139. Luego fueron sancionadas las leyes 14390 y 14788, que estuvieron en vigencia hasta 1972.

La coparticipación cobró notoria importancia a partir de la sanción de la ley 20221, que unificó los distintos regímenes de participación tributaria. Dicha ley rigió hasta 1984, cuando caducó su vigencia formal, pero prolongó sus efectos, por medio de convenios transitorios con las provincias hasta 1988, en que comenzó a regir la ley 23548.

La ley 23.548

La nueva ley de coparticipación federal fue sancionada el 7 de enero de 1988, con vigencia hasta diciembre de 1989 y prorrogable automáticamente si a esa fecha no se hubiera sancionado un régimen sustitutivo. La misma define que formarán parte de la masa coparticipable el producido de la recaudación de todos los impuestos existentes o a crearse, a excepción de los derechos de importación y exportación (Constitución Nacional), los impuestos cuya distribución prevean otros sistemas especiales de coparticipación, y aquellos impuestos nacionales con afectación específica vigentes al momento de la promulgación.

La distribución primaria prevista en el artículo 3 es la siguiente:

- 42,34 % en forma automática a la Nación,

- 54,66 % en forma automática a las provincias adheridas;

- 2,00 % distribuido para "el recupero del nivel relativo" entre:

- Buenos Aires 1,5701 %

- Chubut 0,1433 %

- Neuquén 0,1433 %

- Santa Cruz 0,1433 %

- 1,00 % para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.

La distribución secundaria del 54,66 % se realiza de acuerdo a los porcentajes que fija el artículo 4.

Buenos Aires 19,93%

Catamarca 2,86%

Córdoba 9,22%

Corrientes 3,86%

Chaco 5,18%Chubut 1,38%

Entre Ríos 5,07%

Formosa 3,78%

Jujuy 2,95%

La Pampa 1,95%

La Rioja 2,15%

Mendoza 4,33%

Misiones 3,43%

Neuquén 1,54%

Rio Negro 2,62%

Salta 3,98%

San Juan 3,51%

San Luis 2,37%

Santa Cruz 1,38%

Santa Fe 9,28%

Santiago del Estero 4,29%

Tucumán 4,94%

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias fue creado para atender las situaciones de emergencia y los desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Estos fondos son manejados por el Ministerio del Interior, quien debe informar a las provincias los montos y los criterios seguidos para su asignación.

El Banco de la Nación Argentina, transferirá automáticamente a cada provincia y al

Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el monto de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente Ley.

El artículo 7 de la ley establece un piso en el monto a distribuir entre las provincias, al decir que "no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley".

Respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, el artículo 8 aclara que "la Nación se compromete a entregarles una participación compatible con los niveles históricos, que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987".

El papel de esta ley fue muy importante en relación con la situación previa:

- el porcentaje a distribuir a las provincias resulta el más elevado en términos históricos

- Se acordó la expansión de la lista de impuestos que integran la masa coparticipable, en especial la inclusión del gravamen sobre los combustibles líquidos.

- Se puso un límite máximo al mecanismo discrecional de transferencias financieras al reducir los Aportes del Tesoro que habían beneficiado a las provincias más ineficientes, y a partir de ella se redujeron al 1 % de la masa coparticipable.

- Se dispuso un límite mínimo a los recursos que recibirían las provincias equivalente al 34 % de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, con independencia de su carácter de coparticipables.

El principal aspecto negativo es que los porcentajes de la distribución secundaria no fueron resultado de prorrateadores que tuvieran en cuenta con antelación criterios objetivos, sino que fueron producto de negociaciones entre las provincias.

La nueva ley había nacido en un contexto de mucha debilidad institucional, ya que la situación política del gobierno central le impedía adoptar una política nacional frente a la mayoría justicialista entre los gobernadores y en el Senado de la Nación. Requiriendo más fondos, aquellos presionaron al Gobierno, que a los pocos meses sancionó una nueva ley.

La ley 23.562, promulgada en mayo de 1988, crea el Fondo Transitorio para financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales, que de acuerdo a su art. 1, estaba "destinado a reforzar los ingresos de las jurisdicciones provinciales que enfrenten situaciones de emergencia financiera".

Para conseguir esos fondos, la Nación debió recurrir a nuevos impuestos:

- sobre la venta al público de cada paquete de cigarrillos, 8 %.

- sobre los intereses y ajustes de depósitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera, impuesto adicional de emergencia del 2,2 %.

- sobre la transferencia de títulos públicos, impuesto adicional de emergencia de entre el 5 y el 7,5 por mil.

La distribución de estos fondos benefició durante su año de vigencia a un grupo de 15 provincias, que en su mayoría son las mismas que recurrieron también al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Desde 1989, la ley 23.562 asignó a cada provincia, un importe máximo igual al monto que le había correspondido en el mes de diciembre de 1988.

1. **Análisis del artículo 75 incisos 1, 2 y 3 de la Constitución Nacional.**

**Art. 75.- [ENUMERACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES].- Corresponde al Congreso:**

**Inciso 1.- [ADUANAS. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN].-** **Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.**

Este inciso establece dos funciones importantes del Congreso:

1. Dictar leyes sobre aduanas: Recordemos (artículo 9) que en nuestro país hay aduanas exteriores o nacionales (entre los países limítrofes), pero nunca interiores (es decir entre las provincias). Además ya vimos en los artículos 10 a 12 que dentro del país hay libertad de circulación.
2. Dictar leyes sobre importación y exportación: Recordemos (artículo 4) que el Congreso es el que crea en forma exclusiva estos impuestos indirectos externos (mientras que los indirectos internos son creados en forma concurrente: Estado y provincias).

De todas formas a partir de la incorporación de nuestro país al Mercosur (proceso de integración de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) estos temas de importación y exportación pasan a ser establecidos por órganos supranacionales o por decisiones de los Estado miembros del Mercosur.

**“Uniformes en toda la Nación”:** Esto significa que si en una aduana se cobra un impuesto del 30% sobre el valor de determinada mercadería, debe cobrarse exactamente el mismo porcentaje en todas las aduanas del país para el mismo producto.

**Inciso 2.- [CONTRIBUCIONES INDIRECTAS Y DIRECTAS].- Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.  
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.  
La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.  
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.  
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.  
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.**

Este inciso será analizado en cada una de sus partes:

* **“Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.”**

Como se expresó anteriormente, las contribuciones indirectas son facultad concurrente del Congreso y las provincias (pueden ser creadas y aplicadas tanto por la Nación como por las provincias salvo aquellas contribuciones que tengan asignación específica). Mientras que las contribuciones directas son facultad de las provincias y excepcionalmente del Congreso.

Entonces, las directas por tiempo limitado e indirectas (salvo las contribuciones que tengan asignación específica) son coparticipables: es decir que pasan a formar parte del fondo de participación tributaria que será repartido entre la Nación y las provincias.

* **“Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.”**

La coparticipación entre el Estado y las provincias se lleva a cabo a través de una ley – convenio hecha teniendo en cuenta los acuerdos entre el Estado y las provincias. Esta ley indica cómo se van a repartir los fondos. En general las provincias con más desarrollo atienden sus presupuestos fiscales en un 50% con recursos propios y el resto provienen del Tesoro Nacional por la coparticipación; mientras que para las otras provincias el porcentaje es 10% y 90% aproximadamente.

* **“La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”**

La distribución de lo recaudado por impuestos entre Nación, provincias y la Ciudad Buenos Aires se realiza de una forma objetiva en proporción con:

* Los servicios y funciones que presta cada uno;
* Con lo que recaudan y
* Por la cantidad de población que tienen (a mayor recaudación o cantidad de habitantes, más será lo destinado a ella) en forma objetiva y con igualdad de oportunidades en todo el país.

Recordemos que el Gobierno Federal le ha sacado a las provincias el derecho a recaudar los impuestos directos. A cambio le da un porcentaje a cada una del producto de esos impuestos.

* **“La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.”**

Esta ley – convenio tiene al Senado como cámara de origen (esto es para asegurarle a las provincias que van a tener representación igualitaria en la confección de esta ley) y se necesita para su aprobación la mayoría absoluta de cada Cámara.

No puede ser reglada ni modificada (salvo con el acuerdo de las provincias) y por último debe ser aprobada por todas las provincias.

* **“No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.”**

Competencia: ámbito de validez jurídica que habilita a crear (o aplicar) el derecho.

Servicios: Actividad de bien público.

Funciones: Rol previsto dentro de una organización.

Este párrafo nos indica que cuando el Estado o las provincias entre sí, transfieran o reasignen competencias, funciones o servicios, la provincia que la recibe debe tener recursos suficientes para ello.

* **“Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.”**

Este órgano de control es determinado por ley y fiscaliza la ejecución de las previsiones de este inciso 2 (ejemplo: DGI).

**Inciso 3.- [RECURSOS COPARTICIPABLES].- Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.**

Esto surge porque antes de la reforma, el Congreso podía crear unilateralmente sistemas de coparticipación paralelos, beneficiando a determinadas provincias y perjudicando de ese modo a otras (ya que se extraía dinero de la masa coparticipable sin la necesidad de tener el aval de las demás provincias).

Hoy en día para hacer asignaciones específicas se debe modificar la ley convenio, para lo cual se necesita la aprobación de las provincias.

Unidad n° 13: El Accionar Administrativo

1. **El acto administrativo: Concepto y elementos.**

Los actos son las decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o de juicio. Se caracterizan porque se manifiestan a través de declaraciones provenientes de la voluntad administrativa y dirigidas directamente al intelecto de los particulares a través de la palabra oral o escrita, o de signos con un contenido ideográfico.

De acuerdo con el derecho vigente, el acto administrativo emana de un órgano del Estado, pero ese órgano es el Ejecutivo, siendo excluidas entonces en el concepto de acto administrativo las actividades que realizan los órganos legislativo y judicial en ejercicio también de la función administrativa.

En resumen, el acto administrativo es una declaración unilateral y concreta del órgano ejecutivo que produce efectos jurídicos directos e inmediatos. La Administración pública se encarga de satisfacer los intereses colectivos, dicta los actos administrativos, está formada por personas físicas que son los funcionarios públicos que deciden en nombre del Estado. Por ejemplo: el hecho de que haya clases de 8 a 12hs.

Para que un acto administrativo sea válido debe contar con los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para su formación y existencia. Concurriendo todos los elementos, el acto administrativo es perfectamente válido. Los elementos esenciales que hacen a la legitimidad del acto son los siguientes: elemento subjetivo, elemento objetivo, causa, forma y fin. La Corte Suprema se refiere a tres elementos: competencia, objeto o contenido y forma.

Elementos del Acto Administrativo

Elementos esenciales: aquellos que si no estarían el acto administrativo sería nulo.

**1.** **Competencia:** aptitud legal de un órgano o ente estatal, otorgada por el ordenamiento jurídico, para actuar dentro de sus funciones administrativas. La competencia puede clasificarse:

* Por la materia: atiende al conjunto de poderes, facultades y atribuciones que le corresponde a un ente u órgano, en razón de la naturaleza de las funciones o cometidos asignados. Ej.: ministerio de educación, de economía.
* Por el territorio: toma en cuéntale ámbito espacial en que el órgano o ente puede válidamente desplegar el ejercicio de sus atribuciones.
* Por el tiempo: período en el cual va a tener legalidad.
* Por el grado: vinculado a la ubicación que el órgano tenga en la jerarquía administrativa.

**2.** **Sujeto:** Los actos administrativos emanan de un órgano estatal y que este órgano es el Ejecutivo. El órgano ejecutivo realiza actividad administrativa, que es una función del Estado, ente que goza de personalidad jurídica. En consecuencia **el Estado, por medio de su órgano ejecutivo y de los órganos jurídicos menores, podrá dictar actos administrativos.** Dentro de cada ente jurídico podrá dictar el órgano competente para ello.

**3.** **Objeto:** El elemento objetivo está constituido por el objeto o contenido del acto. **El contenido es el efecto**

**práctico que con el acto se pretende obtener**. Debe ser física y jurídicamente posible y cierto, es decir, que debe estar dentro de la normativa legal vigente. Ejemplo: la venta de órganos está prohibida, el INCUCAI no podría efectuar un acto que establezca la compra de órganos.

Debe decidir todas las peticiones formuladas; puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte los derechos adquiridos. El contenido del acto debe ser posible. La posibilidad ha de ser física y jurídica, esto significa que: El acto es físicamente imposible cuando no es posible in rerum natura. El acto es jurídicamente imposible cuando está prohibido por la ley.

El acto es jurídicamente posible para la Administración cuando el ordenamiento jurídico le atribuye a ésta la facultad de cumplirlo por medio de sus órganos en ejercicio de sus facultades.

**4.** **Causa:** La causa es el fin que persigue el órgano administrativo al dictar el acto, fin que consiste en la satisfacción del interés general que el legislador ha previsto y tutela. La causa respondería, entonces, a la pregunta ¿Para qué se dicta el acto? El acto se dicta para satisfacción del interés general que se haya establecido por ley y que ésta protege.

**5.** **Procedimiento**: aunque la ley no mencione expresamente el debido proceso administrativo como reglamentación procedimental administrativa de la garantía de defensa consagrada por el Art. 18 de la C.N., es una especie de procedimiento insoslayable cuando los derechos particulares puedan resultar afectados.

**6. Motivación:** Por motivación del acto administrativo debe tomarse la expresión de las razones que han llevado al órgano administrativo a dictar el acto, como también a la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y lo justifican. En nuestro derecho positivo la ley 19549 dice que el acto administrativo debe ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los hechos y antecedentes que le sirven de causa y el derecho aplicable. Un acto administrativo no es formalmente perfecto y por lo tanto válido, si no está motivado, pues la circunstancia de que la Administración no obra arbitrariamente sino en los límites que el ordenamiento jurídico legal le impone, hace imprescindible que sus decisiones expresen los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar su legitimidad.

**7. Finalidad:** es satisfacer el interés público.

**8. Forma:** La forma del acto administrativo: Formada la voluntad en el ámbito de la Administración, ésta debe exteriorizarse y la forma se refiere al modo como se declara una voluntad ya formada.

El acto administrativo debe ser en general escrito, fechado y firmado y como complemento de la firma puede haber una aclaración de la misma o un sello, membrete, etc., que identifique al funcionario público y señale a qué órgano pertenece. Cabe aclarar que en casos de urgencia, o donde no hay tiempo para recurrir a la forma escrita o cuando se trate de la actividad de policía, la forma de manifestar la voluntad es generalmente verbal.

La Administración puede declarar su voluntad de manera expresa o tácita. Es expresa cuando mediante ella queda manifestado directa y concretamente el objeto del acto. La declaración de voluntad será tácita cuando permita deducir inequívocamente por vía de interpretación el sentido de voluntad de la Administración.

* Escrito
* Verbal
* Con señales (prohibido fumar, semáforo)

1. **Voluntad:** intención del órgano que origina el acto jurídico, de las personas físicas que lo efectúan y representación de los administrados.
2. **Moralidad:** La moralidad no es tampoco un elemento del acto administrativo. Es simplemente un carácter del contenido u objeto del mismo. El contenido del acto debe ser moral. El acto que violare la moral pública está en contra de lo dispuesto en la Constitución Nacional en el artículo 19.

Elementos accidentales: si están viciados el acto no es nulo como en los esenciales, sino que se corrigen.

**1. Plazo:** es el lapso en el cual el acto comienza o termina de producir los efectos jurídicos que le son propios. Indica el día desde el cual debe tener eficacia el acto o desde el cual la eficacia del acto administrativo debe cesar.

**2. Condición:** es todo acontecimiento futuro e incierto al cual se subordina el comienzo o el cese de la producción de los efectos jurídicos del acto.

**3. Modo:** es la carga u obligación que la Administración, en su uso de facultades discrecionales, puede imponerle al administrado y cuyo incumplimiento puede originarle aplicación de la caducidad.

El modo consiste en una carga impuesta a la persona a favor de quien se concede el acto para beneficio del que lo dicta.

1. **Caracteres del acto administrativo.**

Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo regular son:

* Legitimidad o Presunción de legitimidad.
* Ejecutividad
* Ejecutoriedad
* Estabilidad
* Impugnabilidad

**Presunción de legitimidad**: Es la presunción de la validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. El vocablo legitimidad no debe confundirse con “perfección”.

La legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido conforme al derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos; por eso crea la presunción de que son legales, es decir se los presume válidos y que respeten las normas que regulan su producción.

Que el acto en principio sea regular significa que básicamente es válido, pues reúne todos sus requisitos, puede contener algunos vicios, pero a pesar de ello sigue siendo regular.

Efectos:

La legitimidad no necesita declaración: El estado no necesita declarar que su actividad es legítima. Tiene a su favor la presunción legal.

Anulación sólo a petición de parte: Es la resultante de la impugnabilidad del acto administrativo. El administrado debe peticionar la ilegitimidad en el caso que esta exista.

Necesidad de probar la ilegitimidad*:* La prueba de la ilegitimidad que queda reducida a los actos anulables, no a los nulos de nulidad absoluta, que están excluidos de la presunción de legitimidad.

Ejecutoriedad administrativa: La presunción de la legitimidad es presupuesto de la posibilidad administrativa de ejecutar el acto, pues el acto que se presume legítimo tiene obligatoriedad y exigibilidad.

Instrumentalidad pública administrativa:Instrumento probatorio de los actos administrativos es un instrumento público. Ello no implica la legitimidad del contenido del mismo acto. La instrumentalidad pública certifica su otorgamiento (celebración, firma, fecha) pero no certifica su contenido.

Imposibilidad de revocar, modificar o sustituir: la presunción de legitimidad del acto administrativo hace que el mismo no pueda ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa un vez notificado, así como tampoco es factible suspender sus efectos.

**Ejecutividad**: Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber de cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación.

La obligatoriedad es una característica indispensable del acto administrativo, que asegura a la autoridad la disposición exclusiva sobre la eficacia del acto como garantía de los intereses que tutela la Administrativos: Todo acto administrativo regular tiene la propiedad de ser esencialmente ejecutivo; es una cualidad genérica inseparable del acto con independencia de que se ejecute o no.

El acto debe ser respetado como válido mientras subsista su vigencia, (le es propia la obligatoriedad).

El acto para tener ejecutividad, debe ser regular y estar notificado.

Ejecutividad es sinónimo de eficacia del acto. Es la regla general de los actos administrativos y consiste en el principio de que una vez perfeccionados producen todos sus efectos, sin que se difiera su cumplimiento.

**Ejecutoriedad:** Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en forma expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad con funciones administrativas para obtener el cumplimiento del acto. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la notificación del acto. Cuando el acto sea ejecutivo pero no ejecutorio, se deberá solicitar judicialmente su ejecución coactiva.

La administración tiene la capacidad para obtener el cumplimiento de sus propios actos, sin necesidad de que el órgano judicial reconozca su derecho y habilite a ejecutarlos.

Este carácter es esencial en la actividad administrativa.

La administración tiene otorgado por el ordenamiento jurídico de manera implícita o explicita, quien le confiere los medios coercitivos para ejecutar por sí misma o hacer ejecutar por el administrado obligado o por terceros el acto administrativo.

La presunción de legitimidad avala la ejecutoriedad, pero a la vez la limita, dado que sólo son ejecutorios aquellos actos que la Administración puede ejecutar, dentro de la categoría genérica de actos regulares.

La ejecutoriedad aparece en el acto administrativo cuando se ha cumplido todo el proceso de su formación y el ordenamiento jurídico le otorga además le otorga la posibilidad de su pronta realización.

**Actos no ejecutorios**: Actos certificados, actos registrales. En este sentido , la inscripción en el registro de nacimiento, un matrimonio o una defunción no tienen carácter ejecutorio, por agotarse en si mismos .

**Efectos de la ejecutoriedad:** Los principales efectos son dos

* Acción a posteriori del órgano judicial para conocer la legitimidad del acto. Se debe probar que no posee vicios de ilegitimidad si esto es así se procederá con el acto y si posee vicios el obligado a cumplir el acto deberá pedir a nulidad del mismo.
* En el caso del que el derecho positivo lo autorice, la Administración podrá efectuar la ejecución coactiva del acto por medio de los agentes administrativos.

**Medios**:

* La ocupación que se dispone si el particular se opone a la entrega de un bien determinado. Silo autoriza la ley, la administración entra en posesión del bien haciéndolo ocupar por su gente.
* La ejecución de bienes muebles o inmuebles, se hace efectivo el apremio sobre el patrimonio particular. Procedimiento que posee la administración para el cobro de créditos.
* La ejecución directa. Por la misma Administración o por terceros .Se utiliza en el supuesto en que se imponga al particular una prestación que implique la actividad material y fungible.
* La coacción directa: se aplica a las prestaciones no fungibles, vale decir aquellas que el obligado debe prestar personalmente y respecto de las cuales no es posible la sustitución. Por ejemplo la prestación del servicio militar.
* Coacción indirecta: ocurre cuando para la ejecución del acto administrativo se utiliza algún tipo de sanción, por ejemplo multas clausuras, inhabilitaciones

**Condiciones**

* Es necesario que la actividad administrativas que se va a ejecutar tenga sus fuentes, en un texto expreso o razonablemente implícito de la ley.
* El hecho de que el administrado oponga una resistencia, sea a la ley, sea a la acción administrativa. La ejecutoriedad, como medida debe convertirse en medida necesaria en casos de resistencia y aparición del incumplimiento.
* Es necesario que la ejecutoriedad tienda únicamente a la realización de la actividad prescripta por la ley. El empleo de la coacción no debe servir para ir más allá de lo que exige la ley.

**Diferencia entre ejecutoriedad y ejecutividad:**

No hay que confundir ejecutoriedad con ejecutividad ya que el primero es la posibilidad de la Administración, otorgada por el orden jurídico, de ejecutar (hacer cumplir) por si misma el acto. Cuando hablamos de ejecutividad nos referimos a la exigibilidad u obligatoriedad inmediata. La ejecutividad es el acto.

La ejecutividad proviene de la validez del acto, mientras que la ejecutoriedad se asienta en la ejecutividad es consecuencia de la presunción de legitimidad.

**Estabilidad:** Es la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados.

Es la irrevocabilidad del acto por la propia Administración.

La LNPA habla que de acto que no puede ser “revocado”, “modificado” o “ sustituido”. El acto puede revocarse en ciertos casos de excepción, se limita a los casos irregularidades manifiestas.

La fuerza material de la estabilidad sirve al interés destinatario y le protege:

1. De la sustracción de una situación jurídica que esta garantizada (acto administrativo favorable)
2. Del incremento de las obligaciones que están impuestas (acto administrativo oneroso)

Los actos administrativos son, en principio, irrevocables debido a la seguridad jurídica y a la buena fe que ampara las situaciones por ellos creadas.

Que la Administración no pueda alterar los actos administrativos que declaran derechos subjetivos encuentra sustento en los artículos 17 a 19, 28, 43 y 86 de la Constitución.

Pero no por ello la Administración queda atada a la irrevocabilidad, sino que cuando el interés público reclama una ratificación, puede acudir al órgano judicial que anule el acto lesivo.

**Impugnabilidad:** El acto administrativo en su calidad el acto productor de efectos jurídicos directos, puede ser impugnado mediante la interposición de recursos administrativos o acciones y recursos judiciales.

El acto administrativo que se presume legitimo, exigible y hasta ejecutorio, es impugnable administrativa o jurisdiccionalmente por los administrados, en ejercicio del derecho defensa que ama para la Constitución, la impugnación puede ser en sede administrativa o en sede judicial. En sede administrativa a través de recursos, reclamaciones, denuncias, en virtud del procedimiento administrativo que regula tales medios de defensa de los administrados. En sede judicial la impugnabilidad del acto puede hacerse por las acciones y recursos propios del proceso administrativo. La impugnabilidad administrativa procede por razones de legitimidad y por razones de oportunidad, merito o conveniencia. La impugnibilidad jurisdiccional procede únicamente por razones de legitimidad

1. **Nulidades Administrativas.**

Para comenzar con el desarrollo de este tema, es necesario anteriormente explicar el significado de lo que se conoce como acto viciado. Este concepto aparece en el mundo jurídico por no haber cumplido los requisitos esenciales que atañen a su existencia, validez o eficacia. El defecto, vicio o irregularidad afecta al acto en la medida o magnitud del incumplimiento del requisito concretamente violado. La consecuencia que hay que asignar al acto viciado, depende de la importancia que en cada caso tenga el vicio cometido.

Los vicios del acto administrativo son las faltas o defectos con que éste aparece en el mundo del derecho y que, de acuerdo con el orden jurídico vigente, lesionan la perfección del acto, en su validez o en su eficacia, impidiendo su subsistencia o ejecución. La invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado, y la gravedad de la invalidez de un acto administrativo, debe medirse por la lesión que produzca en los intereses de los afectados y en el orden público y jurídico estatal.

Hay una relación de causa a efecto entre vicios y nulidades. La nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante la transgresión al orden jurídico. Actúan como “antibióticos” de la juridicidad, para el saneamiento del anti-derecho. Son un resultado obligado del antecedente: los vicios jurídicos. El concepto de nulidad no hace sino reunir en un concepto unitario todas las características que, según los casos, deberá adoptar la efectiva supresión del acto.

Los vicios se clasifican según la gravedad e importancia que reviste la antijuridicidad, en:

• Muy graves

• Graves

• Leves

• Muy leves

Según la gravedad, afectan la invalidez. Es inválido el acto administrativo con vicios muy graves, graves y leves, por el contrario, los vicios muy leves no afectan la validez. Como consecuencia jurídica, los vicios que si afectan la validez, producen su inexistencia, nulidad o anulabilidad.

Existen cuatro categorías de consecuencias jurídicas aplicables a los actos según el vicio de que adolezcan, según la ley:

• Anulabilidad o “nulidad relativa”

• Nulidad o “nulidad absoluta”

• Nulidad constitucional o actos insanablemente nulos

• Inexistencia

La nulidad constitucional y la inexistencia corresponden al vicio muy grave, la nulidad o “nulidad absoluta” al vicio grave y la anulabilidad o “nulidad relativa” al vicio leve. Dependiendo de la falta de algún elemento esencial en un acto y de la gravedad del vicio, se aplicara alguna de las consecuencias jurídicas ya nombradas. Esta orientación es adoptada por el Art. 14 de la LNPA (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), en virtud del cual el acto es nulo cuando alguno de sus elementos resulta excluido, y el Art. 15 de la misma ley, respecto de la anulabilidad, agrega que “Si se hubiere incurrido en…un vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales”.

Sin embargo, la enumeración legal de estas nulidades no es taxativa ni la clasificación es rígida, debido a que la autoridad administrativa puede declarar la existencia de otros vicios, además de los complementados legalmente, y apartarse, excepcionalmente, mediante resolución fundada que justifique las circunstancias particulares del caso que hacen razonable adoptar otra clasificación.

A continuación expresaremos la clasificación doctrinaria de los vicios que afectan el acto administrativo y cada una de las categorías de las nulidades:

Vicios muy graves e inexistencia: El acto administrativo tiene un vicio muy grave cuando:

• Resulta clara y terminantemente absurdo o imposible el hecho.

• Presenta una imprecisión esencial e insuperable, a pesar de un razonable esfuerzo de interpretación.

• Transgrede una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales.

• Adolece de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido atribuciones judiciales o legislativas, o de incompetencia en razón del territorio.

• El órgano colegiado lo emite sin el quórum o la mayoría necesaria.

• Carece de la firma del agente que lo emite.

• Se omite la forma escrita cuando ésta es exigible.

• Se omite absoluta y totalmente la notificación.

• Se notifica verbalmente, y no se respeta el medio de notificación adecuado.

Como ya hemos nombrado anteriormente, la consecuencia jurídica correspondiente en estos casos es la inexistencia. Como características fundamentales, no se presumen legítimos y su acción es imprescriptible, o sea que son impugnables en todo momento.

Vicios graves y nulidad: El acto administrativo tiene un vicio grave cuando:

• Esta en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente.

• Incumple deberes impuestos por normas constitucionales, legales o sentencia judicial.

• Viola reglamentos dictados por autoridad superior.

• Contraviene instrucciones que establecen derechos para los administrados.

• El objeto esta prohibido por el orden normativo, excluidos los casos que se califican como muy graves.

• Vulnera la estabilidad de otro acto administrativo.

• Es emitido por un órgano incompetente en razón del tiempo, o del grado, y la delegación esta prohibida.

• Adolece de incompetencia en razón de la materia, por haberse ejercido atribuciones de otros órganos o entes administrativos.

• Es dictado mediante connivencia dolosa entre el agente público y el administrado, error esencial del agente, dolo del administrado determinante del acto, dolo del agente, etc.

• Se lo ha emitido sin haberse obtenido la previa autorización, siendo ella exigida.

• Ejecuta un acto no aprobado, siendo exigida la aprobación.

• Es irrazonable.

• En el órgano colegiado no se ha cumplido el requisito de la convocatoria o no se ha sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros.

• Contraviene reglas unívocas de la ciencia o la técnica que afectan el objeto del acto.

• Viola principios elementales de la lógica.

• No se documenta por escrito.

• Esta documentado y firmado, pero no se ha confeccionado el acta de la sesión del órgano colegiado que lo dicto.

• Se lo ha emitido violando la garantía de defensa u omitiendo el cumplimiento previo de algún trámite necesario.

• Carece de motivación o esta es indebida, equivoca o falsa.

La consecuencia jurídica correspondiente a los vicios graves del acto es la nulidad. El acto nulo se caracteriza por:

• Ser irregular.

• Solo en principio tiene presunción de legitimidad y ejecutividad.

• La declaración de nulidad produce efectos retroactivos.

• En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.

• A pesar de ser irregular, y en cuanto declare derechos subjetivos y ha sido notificado, los agentes públicos y los particulares tienen la obligación de ejecutarlo y cumplirlo.

• Si declaran derechos subjetivos que se están cumpliendo sólo puede impugnarse judicialmente; prescribiendo a los 10 años la acción para impugnarlo en tanto los ordenamientos jurídicos provinciales no establezcan plazos distintos.

• En caso de no declarar derechos subjetivos puede disponerse su nulidad en sede administrativa.

Vicios leves y anulabilidad: El acto administrativo tiene un vicio leve cuando:

• No decide, certifica o registra expresamente todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento.

• Viola reglamentos dictados por la misma autoridad que lo dicta o una inferior.

• Es emitido por órgano incompetente.

• Es emitido por un funcionario de hecho, que ejerce efectivamente un cargo administrativo existente bajo la apariencia de legitimidad.

• Contraviene reglas unívocas de la ciencia o la técnica que no se refieren a aspectos esenciales del acto.

• En los órganos colegiados se resuelve un asunto no incluido en el orden del día de la convocatoria.

• Falta la fecha de emisión.

• Se da oportunidad de defensa, pero en forma imperfecta.

• La motivación en genérica, vaga, incompleta o insuficiente.

• Su notificación es incompleta, parcial o deficiente.

La consecuencia jurídica que corresponde a los vicios leves del acto es la anulabilidad. El acto anulable se caracteriza por:

• Considerarse irregular.

• Tener presunción de legitimidad y ejecutividad.

• Los agentes públicos y particulares tienen la obligación de ejecutarlo y cumplirlo.

• La declaración de nulidad produce efectos solo para el futuro.

• La acción para impugnarlo judicialmente prescribe a los dos años, siempre y cuando los ordenamientos jurídicos provinciales no establezcan otros plazos.

• En sede judicial no procede de oficio la declaración de nulidad.

Como características fundamentales, estos actos se presumen legítimos y sólo son impugnables por el término de prescripción.

Vicios muy leves y validez: El acto administrativo tiene un vicio muy leve cuando:

• Realizando un razonable esfuerzo de interpretación, es posible encontrar su sentido, a pesar de su imprecisión.

• Media error no esencial del agente público o dolo no determinante del administrado.

• En órganos colegiados no se cumplen los requisitos de convocatoria respecto de un miembro que ha concurrido a la sesión, no constan en el acta los votos, el tiempo o el lugar de la sesión o las personas que han intervenido.

• Están incompletos o equivocados el lugar y la fecha de emisión.

• Falta la aclaración de la firma del agente que interviene, la mención del órgano o entidad del que emana o lugar de emisión.

Los vicios muy leves no afectan la validez del acto, es decir, el acto es plenamente válido.

Diferencias entre nulidades civiles y administrativas

Nulidades civiles:

• La nulidad, según la concepción del derecho civil, es una sanción legal que priva de sus efectos a un acto jurídico en virtud de una causa existente en el momento de la celebración.

• Estas invalidan los actos jurídicos privados, es por ello que son inaplicables en el derecho administrativo.

• Se conciben como sanción por la ausencia de un elemento constitutivo del acto.

• En el derecho civil, la nulidad es siempre declarada por un órgano judicial.

• Los vicios del acto jurídico en su mayor parte están expresamente contemplados en el Código Civil.

• Integran un sistema estático (rígido) y no son concebibles sin un texto que las prescriba.

• Tienen su fuente en la ley.

• Tienden fundamentalmente a cuestionar la voluntad de las partes.

• La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, excepto la nulidad relativa.

• Pueden peticionarla: los que tengan interés en hacerlo, el ministerio público y aquellos en cuyo beneficio se han establecido.

• No se necesita una investigación de hecho para su declaración, exceptuando los actos anulables.

• La acción para impugnar los actos nulos prescribe a los 10 años y los anulables a los dos años.

Nulidades administrativas:

• Tratan principalmente de reafirmar la vigencia objetiva del derecho y de salvaguardar el interés colectivo en atención a la finalidad que persigue la actividad estatal.

• No dependen exclusivamente del acto viciado para su sanción, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico, o sea de la gravedad del vicio. En caso de duda acerca de la importancia del acto, hay que atenerse a la consecuencia más favorable.

• Pueden ser declaradas por un órgano no judicial.

• La enunciación de los vicios no es taxativa, pudiendo la autoridad competente declarar la existencia de otros vicios de conformidad con el principio sentado.

• Integran un sistema dinámico (flexible) y se admite la existencia de nulidades implícitas o virtuales.

• Pueden resultar de vicios por trasgresión a normas constitucionales, legales, reglamentarias, etc.

• No puede ser declarada de oficio, pero por excepción procede ante la inexistencia del acto.

• La petición puede ser realizada por los que ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo.

• No puede declararse sin una investigación previa del hecho, exceptuando actos inexistentes. Toda impugnación contra actos administrativos debe ser alegada y probada en juicio.

• Puede operar tanto por ilegitimidad originaria (vicios existentes desde el nacimiento del acto) o sobreviniente (cuando un acto que nació válido se torna inválido por un cambio en el ordenamiento jurídico).

• El plazo de la prescripción de la acción rige mientras la legislación específica no señale otros.

Nulidades constitucionales

Son absolutas y no requieren declaración jurídica alguna. Los actos que interrumpan la observancia constitucional serán pasibles de esta severísima sanción; serán absoluta e insanablemente nulos. Se tratará de actos que ostentan un vicio manifiesto, no susceptibles de ser subsanados por confirmación alguna. Serán considerados como si nunca hubieran existido y la acción para declararlos es imprescriptible.

El Art. 36 de la constitución nacional menciona “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos”.

1. **Los contratos de la Administración: características distintivas.**

Los contratos de la Administración pueden realizarlos los tres órganos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos contratos ligan a los distintos órganos del Estado con un particular.

Un contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa.

Análisis de la definición:

* Es un acto **bilateral** que emana de la manifestación de voluntad coincidente de las partes y se distingue del acto administrativo, que por esencia es unilateral.
* Es una **declaración de voluntad común** en el sentido de que se requiere la *voluntad concurrente del Estado* (manifestada a través de un órgano estatal) o de otro ente en ejercicio de la función administrativa, por una parte, y de un particular u otro ente público (estatal o no estatal), por otra.
* **Productora de efectos jurídicos:** Produce efectos jurídicos porque si no los produjera no tendría interés para el derecho. el contrato de la Administración determina recíprocamente atribuciones y obligaciones con efectos jurídicos propios, directos e inmediatos (a diferencia de los simples actos de la Administración) y de manera individual para cada una de las partes.
* **Entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de la función administrativa:** cualquiera de los tres órganos (legislativo, ejecutivo y judicial) puede celebrar contratos administrativos. Pero también celebran contratos administrativos los entes públicos no estatales y los entes privados que ejercen técnicamente la función administrativa por delegación estatal.
* **Y un particular u otro ente público:** el contratista puede ser un particular (persona física o jurídica) u otro ente público (estatal o no estatal).
* **La Administración ejerce prerrogativas** en lo que se refiere a la interpretación, ejecución y extinción del contrato. Las mismas son propias de la Administración y ha de ejercerlas para la mejor satisfacción del interés público, pero no implican necesariamente un perjuicio para el particular cocontratante.

Se le reconocen al particular como cocontratante el derecho a toda una gama de indemnizaciones en el caso en que se encuentre con que ha de soportar cargas más pesadas que aquellas que habían sido previstas.

Elementos:

En los contratos administrativos hallamos los mismos elementos que en los actos administrativos: sujetos; voluntad; objeto, y forma. Estos son los elementos esenciales que atañen a la existencia y validez del contrato.

* **Sujetos:** son las partes del contrato. Pueden ser sujetos de la contratación administrativa las personas físicas o naturales, las personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales.
* **Voluntad:** para que haya contrato se requieren dos voluntades válidas y opuestas que concurran a su formación. Una de ellas es la de la Administración y la otra la del contratista.
* **Objeto:** el objeto del contrato es la obligación que por él se constituye. Los contratos de la Administración pueden tener por objeto una obra o servicio público y cualquier otra prestación que tenga por finalidad el fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades generales.
* **Forma:** es uno de los elementos esenciales. Se refiere al modo concreto de cómo se materializa, exterioriza o instrumenta el vínculo contractual. Se pueden señalar las siguientes formas: a) la *manifestación* recíproca de voluntad de los contratantes; b) la *notificación* o comunicación fehaciente de la aceptación, adjudicación, por parte de la Administración; c) la *formalización escrita* o instrumentación, y d) la *autorización o* *aprobación* del contrato por otro órgano administrativo o por el órgano legislativo.

Clasificación de los contratos administrativos: En general los contratos administrativos son de colaboración pero existen otros que se llaman de atribución. La diferencia entre estos dos tipos de contrato radica esencialmente en el establecimiento de la parte que hace las prestaciones; así un contrato de obra pública sería de colaboración porque el particular es el encargado de realizar las prestaciones. Mientras que si se trata de la concesión de un bien del dominio público, el contrato sería de atribución porque en este supuesto la prestación la hace la Administración que concede a un particular el uso especial de una poción del dominio público por un término limitado, mediante el pago de un canon por parte de ese particular.

Mientras que el contrato de colaboración se efectúa teniendo en cuenta el interés general de la colectividad, en el de atribución se tiene en cuenta el interés particular de aquel a quien se le otorga.

Se distinguen también los contratos, según su tipicidad, en contratos típicos y atípicos, en la medida en que se encuentren regulados o no por una disciplina concreta y detallada de la ley.

Tipos de contratos de la Administración:

* Contratos de empleo público
* Contratos de obra pública
* Concesión de obra pública
* Concesión de servicio público
* Suministro
* Empréstito público
* Concesión de uso de bienes del dominio público
* Transporte
* Locación de servicios y de cosas
* Compraventa
* Fianza
* Mandato
* Depósito
* Mutuo hipotecari
* Contratos aleatorios (de juego, lotería, pronósticos deportivos y ruleta)
* Cuasicontratos administrativos
* Fideicomiso y “leasing”

Caracteres del contrato:

El contrato administrativo tiene los siguientes caracteres específicos:

1. Formalidad: En general toda la actividad de la Administración tiene que ser formal porque tiene que satisfacer al interés colectivo. Además, la formación de la voluntad administrativa requiere un procedimiento muy complejo, descomponiéndose en un cierto número de fases en las cuales el acto de conclusión de un contrato va precedido de medidas previas que condicionan esta conclusión y de medidas de aprobación posteriores que lo complementan y condicionan su entrada en vigencia.

En los contratos administrativos se supedita su validez y eficacia al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones vigentes en cuanto a la *forma* y *procedimientos de contratación.*

1. Desigualdad de los intereses de los contratantes, por cuanto la Administración persigue la satisfacción del interés colectivo, mientras que el particular persigue la satisfacción del suyo propio. Ello origina que, como la satisfacción del interés general debe ser prioritaria, es lógico que la Administración tenga una serie de prerrogativas para conseguirla. La Administración puede imponer modificaciones en el contrato en ejecución, pero esta modificación unilateral debe hacerse dentro de ciertos límites para que sea razonable. La Administración puede unilateralmente extinguir el contrato, es lo que se llama rescisión contractual.
2. Efectos con relación a terceros: los contratos de la Administración pueden, en ciertos casos, ser opuestos a terceros; tienen efectos que se extienden a terceros que no son partes. Por ejemplo, servicios públicos, obras públicas.
3. Derechos y obligaciones personales: en principio, los derechos y obligaciones emergentes del contrato administrativo respecto del contratista, son de carácter personal.
4. Mutabilidad: el Estado tiene la facultad de cambiar el contrato (las partes tienen que estar de acuerdo), siempre respetando la esencia del mismo.
5. El interés público debe ser el fin del contrato de la Administración, el cual a su vez cumple con el objetivo del Estado.
6. **La Actividad Administrativa de Prestación (Los Servicios Públicos): Concepto y caracteres.**

Actividad Administrativa de Prestación de Servicios Públicos:

Para comenzar a desarrollar el tema vamos a dejar en claro el concepto de los servicios públicos, para esto citamos a Dromi quien dice en una de sus publicaciones que un servicio público “Es un medio para un fin próximo o para un fin inmediato que se traduce en actividades públicas, con forma de obra, función o prestación de interés público y con un régimen jurídico de derecho administrativo común a todo el quehacer de la función administrativa”

En forma sintetizada, un servicio público es el conjunto de presentaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad primordial ayudar a las personas que lo necesiten. Estos servicios suelen tener un carácter gratuito, que corre a cargo del Estado, son propios de los países con un Estado de bienestar o Estado benefactor.

Así pueden ser considerados:

**a)** **Servicios públicos con o sin competencias administrativas,** es decir, según requieran o no para su prestación el ejercicio repotestades o prerrogativas de poder público.

**b)** **Servicios públicos propios o impropios,** según lo que preste el Estado o alguna persona privada; sin en este último caso actividades individuales de interés públicos.

**c)** **Servicios obligatorios o facultativos,** según la necesidad o exigibilidad de su prestación.

**d) Servicios Uti Universi o Uti Singuli,** según que sus destinatarios sean toda la comunidad o un sector de administrados, respectivamente.

**e) Servicios públicos de gestión pública o privada,** según sea el titular de la prestación.

Los caracteres de servicios públicos son las notas distintivas que nos permiten individualizarlos como parte de la actividad estatal y determinan los derechos del usuario y las obligaciones de la Administración. Ellos son continuidad, Regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad.

a) Continuidad: indica que el servicio debe ser prestado cada vez que la necesidad que satisface se presente. En relación a la posibilidad o no de su paralización o suspensión podemos hablar de continuidad absoluta cuando la necesidad colectiva que cubre el servicio público no admite que el mismo sea interrumpido. De continuidad relativa cuando el servicio se presta en determinadas oportunidades.

Para asegurar esta continuidad del servicio se han considerado situaciones que pudieran llegar a afectar su efectiva prestación como es la reglamentación del derecho de huelga, la prohibición de la ejecución forzosa de los bienes afectados a un servicio público; la prestación directa por el Estado, en caso de rescate de servicios concedidos cuyo efecto fundamental es la extinción del referido contrato administrativo; en caso de la quiebra del concesionario la Ley concursal prevé la continuidad del servicio.

La continuidad del servicio público fija su status jurídico y hay que mantenerlo inalterado, porque dada la necesidad colectiva de servicio, este debe prestarse.

b) Regularidad: Que el servicio sea regularmente prestado debe entenderse de conformidad a las reglas o normas preestablecidas; las condiciones a que se sujeta la efectiva prestación del servicio.

c) Uniformidad: Es la igualdad de trato para todos los usuarios de un mismo servicio. Situación de igualdad que deriva del principio constitucional del Art 16 y que debe ser tenida como igualdad para los que están en las mismas condiciones.

Por aplicación de este principio, la existencia de categoría de usuario es legítima y es dentro de cada una de ellas en donde se exigirá el trato igualitario, siendo inadmisible prerrogativas que privilegien a unos detrimentos de otros.

d) Generalidad: La prestación del servicio público tiene como fin la satisfacción de una necesidad colectiva y como tal debe ser usado y exigido por todos los habitantes.

e) Obligatoriedad: El servicio público establece la relación jurídica prestador-usuario y por su propia naturaleza está obligado a prestarlo quien lo toma a su cargo y a exigirlo el usuario.

En cuanto a las Formas de prestación, el interés colectivo puede ser satisfecho de dos maneras:

1) Servicio público prestado directamente por el Estado a través de órganos de la Administración central o por entidades descentralizadas, autárquicas o empresas públicas.

2) Por particulares, sean sujetos privados o entidades públicas no estatales. En este caso, lo hacen a través de una concesión, licencia o permiso otorgado por el Estado a quienes reúnan las condiciones exigidas para ser prestatarios del servicio durante el termino convenido y según sean los términos de la concesión con la transferencia de prerrogativas sobre el dominio público.